

A black and white photograph of a crowded city street, likely in Latin America, with tall buildings in the background. The street is filled with people, and there are trees and streetlights visible. The overall scene suggests a busy urban environment.

LUIS MAIRA

**LAS
DICTADURAS
EN
AMERICA LATINA**

Cuatro ensayos.

CESOC



LUIS MAIRA ha participado durante años en el debate intelectual y en la vida política de Chile.

Nació en Santiago en 1940. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, especializándose en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Fue presidente de la FECH entre los años 1963-1964 y Diputado por Santiago durante tres períodos.

En 1968 recibió del Círculo de Periodistas del Congreso el premio al mejor diputado. Un año más tarde, la apreciada distinción al parlamentario mejor documentado del Congreso Nacional.

En el campo académico ha sido Secretario Ejecutivo de la Unidad de Investigaciones de América Latina y Director del Instituto de Estados Unidos en el CIDE de México. Ha ejercido como profesor en las Universidades Católica de Río de Janeiro, Nacional Autónoma de México y Católica de Chile. Ha publicado seis libros, entre los que se destacan "América Latina y la Crisis de Hegemonía Norteamericana" (Desco, Lima 1982), y "Los Estados Unidos: Una Visión Latinoamericana" (Fondo de Cultura Económica, México 1984).

LAS DICTADURAS EN AMERICA LATINA
Cuatro Ensayos

Edición al cuidado de Luis Rocca Lynn.
Diseño de Cuqui Barrenechea.

© Luis Maira, 1986
© Centro de Estudios Sociales Ltda. (CESOC).
Inscripción N° 65215
José Miguel de la Barra 508, Dpto. 14, Santiago.
Primera Edición, septiembre de 1986
Impreso en los talleres de Imprenta Pucará,
Matucana 1509, Santiago.

IMPRESO EN CHILE/PRINTED IN CHILE

LUIS MAIRA

**LAS DICTADURAS
EN
AMERICA LATINA**

Cuatro ensayos

CESOC
EDICIONES CHILE Y AMERICA

Introducción

Los trabajos que integran este libro fueron escritos en momentos distintos, pero la reflexión que los anima forma parte de un mismo plan: un intento por comprender mejor los fenómenos autoritarios de América Latina.

El primero de ellos "Las nuevas dictaduras militares en América Latina" fue preparado para el Primer Encuentro de Científicos Sociales y de Teólogos que se realizó en San José, Costa Rica, en febrero de 1978, teniendo como perspectiva la necesidad de presentar, en vísperas de la Tercera Conferencia Episcopal de América Latina que se realizaría en Puebla, un panorama de los principales cambios políticos que se habían producido en la región en los años posteriores a la reunión del CELAM de Medellín, efectuada en agosto de 1968.

El ensayo comparativo de los rasgos del Estado Fascista "clásico" y el de Seguridad Nacional fue escrito

para un Encuentro Internacional acerca de "El control político en el Cono Sur", convocado por la Casa de Chile en Ciudad de México, en diciembre de 1976. Este seminario constituyó una de las primeras oportunidades para el intercambio sistemático de opiniones acerca de este tema por parte de especialistas de los diferentes países latinoamericanos en que se habían instaurado estos regímenes militares de nuevo tipo.

El enfoque acerca del autoritarismo en Centroamérica fue presentado a una Conferencia Internacional sobre "La Crisis de América Central", organizada por la Fundación alemana Friedrich Naumann, también en San José, en diciembre de 1984, dentro del propósito de establecer un encuadramiento de las dictaduras del mismo centroamericano en un contexto comparativo con las tendencias existentes en la parte sur de América Latina.

Finalmente, el análisis del régimen militar chileno del general Augusto Pinochet se elaboró en enero de 1986 para su inclusión en el primer número de la nueva revista "América Latina" que ha comenzado a editar el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y da cuenta del enfoque que el autor tiene respecto de la experiencia dictatorial que le es más próxima y que mejor conoce.

Todos estos trabajos subrayan los elementos más específicamente "políticos" de estos regímenes de fuerza pues éste era el aspecto de la discusión en que nuestra reflexión era más insuficiente hasta hace un tiempo. Esto no implica, por cierto, una desvalorización de otros factores como los económicos, los culturales o los relativos a la estructura social, los cuales han originado contribuciones valiosas de diferentes especia-

listas que sirven de base a mis propios textos como en muchos casos se indica.

Estos cuatro análisis son ahora publicados, en su versión original, sin más revisiones que una corrección de estilo y una reducción de las notas y del aparato crítico, lo cual puede implicar la duplicación de algún argumento, pero mantiene la coherencia del razonamiento realizado en cada caso y somete con más rigor al análisis efectuado a las pruebas, siempre difíciles, del paso del tiempo y los desarrollos históricos concretos.

Pensamos que su publicación conjunta se justifica no sólo por el hecho de que ninguno de estos trabajos había sido difundido en Chile previamente sino que, sobre todo, porque creemos que una lectura integrada de ellos puede entregar algunos elementos que ayuden al quehacer de los amplios sectores sociales que trabajan cotidianamente por el restablecimiento de la democracia en el país.

Quisiéramos subrayar que nos parece que en estos ensayos subyace una reflexión destinada a diferenciar el funcionamiento del Estado de Excepción en Europa y en América Latina. En Europa se originan los más característicos modelos políticos autoritarios tales como el Bonapartismo, el Fascismo y las Dictaduras personalizadas o de "notables" y ha sido precisamente en torno a ellos que se ha efectuado la mayor parte de la discusión teórica de estos fenómenos y se han construido las hipótesis y teorías explicativas de su funcionamiento que han alcanzado mayor difusión. Por lo mismo, durante décadas, corrimos en el análisis político latinoamericano el riesgo de recoger, en forma mecánica, algunos de los enfoques o conclusiones de ese debate para acabar así "encajando" forzosamente dentro de tales pautas a nuestras dictaduras autóctonas.

De ahí arranca la necesidad de pensar desde América Latina el surgimiento y desarrollo del Estado de Excepción a partir de la especificidad de nuestros propios procesos históricos. Tal trabajo, por fortuna, ha avanzado en forma significativa en las dos últimas décadas con los aportes efectuados por un conjunto de dentistas sociales de la región, entre los que hay que señalar a José Luis Reyna y Pablo González Casanova en México, Gerard Pierre Charles en Haití, Edelberto Torres Rivas y Rafael Menjivar en Centroamérica, a Luis Alberto Costa Pinto, Helio Jaguaribe y Fernando Henrique Cardoso en Brasil, a Guillermo O'Donnell, José Nun y Marcelo Cavarozzi en Argentina, Rene Zabaleta en Bolivia, Julio Cottler en Perú y Manuel Antonio Garretón, Tomás Moulián y Norbert Lechner en Chile. Gracias a éstas y otras contribuciones el pensamiento social latinoamericano dispone hoy de los elementos básicos de una "Teoría de las Dictaduras" que existen en nuestra región. Podemos así, a partir del mejor conocimiento de estas tendencias, trabajar con más eficacia por su erradicación y por construir sistemas políticos estables que garanticen la convivencia civilizada y el progreso social en nuestros países.

Como ha sido suficientemente establecido por la historia no puede haber una acción política eficaz sin una seria comprensión teórica de la realidad que se enfrenta. Por ello este libro, al ubicarse en dicha perspectiva, está exento de neutralidad. En un momento particularmente difícil de la vida política de Chile su publicación aspira a acercar los aspectos de la reflexión y la acción como una contribución a la lucha por una sociedad democrática.

Por ello está dedicado a los miles de chilenos que he

conocido a mi regreso del exilio —trabajadores, mujeres, pobladores y estudiantes— que con su esfuerzo sin descanso de cada día recrean la esperanza por que nuestra patria vuelva a ser un "asilo contra la opresión" y un espacio para el ensanchamiento de la libertad y la dignidad humanas.

LUIS MAIRA

Santiago, agosto de 1986.

Las nuevas dictaduras militares en América Latina

1. En la introducción de su conocido trabajo sobre el fascismo, Poulantzas parafraseando críticamente a Max Horkheimer sostiene que "el que no quiera hablar de imperialismo también debería callar en lo que al fascismo se refiere". Se trata de una aclaración pertinente que podría ser extendida con validez a todas las formas de dictadura capitalista y, en particular a las que hoy encontramos en América Latina.

Si algo enseña la experiencia reciente de nuestra región, es que la comprensión de los fenómenos políticos internos de cada país sólo puede ser lograda a partir de la correlación de éstos con los factores internacionales y, en particular con los proyectos y proposiciones formuladas por el gobierno y las grandes corporaciones de Estados Unidos en el contexto de afianzar o racionalizar la dominación de los países del área.

Inscrita en este marco, la historia del actual período de América Latina se inicia con el triunfo de la Revolu-

ción Cubana y con el afianzamiento de un proyecto socialista al interior de ésta. La magnitud del desafío cubano y el riesgo de propagación de su experiencia a la zona geográficamente contigua, originó de parte de Estados Unidos una política de doble vía, con una cara "positiva", la Alianza para el Progreso, encaminada a resolver las situaciones más críticas de los distintos países del área como una manera de prevenir nuevas experiencias revolucionarias y una faz negativa, expresada en la doctrina de la contrainsurgencia y el adiestramiento de nuevas fuerzas represivas para desbaratar "la subversión" en caso de que al interior de cualquier país ésta se presentara en la ciudad o en el campo.

Por factores complejos que no corresponde analizar aquí, de estos dos intentos de respuesta al "desafío socialista" sólo el segundo tuvo una aplicación amplia y consistente. La primera consecuencia de esta situación, fue que Estados Unidos durante casi toda la década de los sesenta careció de una política global y articulada para la región latinoamericana y se limitó a una puntual y de contención. Desde el golpe de Estado efectuado en República Dominicana contra el régimen constitucional de Juan Bosch, incluso los sectores liberales de la Administración Kennedy pasaron a admitir esta situación como un dato de su política hemisférica. La segunda consecuencia de esta política, consistió en la aparición de un conjunto de dictaduras militares de nuevo cuño que se implantaron a partir del derrocamiento del Presidente Joao Goulart en Brasil. Al golpe de Estado que ejecutan los militares en ese país en marzo de 1964, seguirán los de Argentina en 1966 (donde el régimen resultante mantiene sus características mientras dura el mandato del general Juan Carlos Onganía, hasta 1970); Bolivia, tras la liquida-

ción del régimen nacionalista del general Juan José Torres por su colega Hugo Banzer en agosto de 1971; Uruguay y Chile, donde en 1973, con expresiones distintas se instauran gobiernos militares de extrema derecha y, de nuevo Argentina, en marzo de 1976 al llegar al poder el general Jorge Rafael Videla, tras la descomposición y fraccionamiento del Gobierno Peronista.¹

Para una correcta comprensión y seguimiento de estas nuevas dictaduras militares, resulta indispensable una reflexión en el nivel de la teoría política que apunte a descubrir la "lógica" y la "racionalidad" a que responden, en cuanto a Estados capitalistas de excepción, por un lado, y a señalar la base teórica que edifica hegemonía al interior de las Fuerzas Armadas y la manera en que ésta se articula con los intereses imperialistas, por otra.

2. El primer gran problema que en general, pone por delante la caracterización de cualquier forma de dictadura capitalista deriva de la inevitable similitud (al menos formal) que podemos encontrar entre sus diversas manifestaciones. A partir de fines de la Segunda Guerra Mundial se ha venido configurando una suerte de "teoría general de las dictaduras". Desde que el autor de "Behemoth", Franz Neumann escribiera sus notas sobre la teoría de la dictadura² poco antes de su

1 Todos los comentarios que realizamos en este artículo, están referidos a este conjunto de países. Hemos excluido a los regímenes de Paraguay y Nicaragua por considerar que éstos constituyen las últimas expresiones de la dictadura militar clásica en América Latina. Igualmente dejamos fuera por su diferente carácter las experiencias de gobiernos militares en Perú, Panamá, Honduras y Ecuador, sea por ser proyectos modernizantes o por su carácter transitorio.

2 Franz Neumann "El Estado Democrático y el Estado Autoritario" Ed. Paidós, Buenos Aires, 1968.

muerte, en 1954, diversos autores, vinculados tanto a la teoría revolucionaria como al pensamiento tradicional, han realizado contribuciones en esta misma línea.

Estas, aunque distan mucho de haber alcanzado una expresión definitiva, permiten a estas alturas, describir y subrayar algunos elementos comunes a las distintas expresiones del Estado capitalista de excepción. En su obra "Les dictatures européennes", André y Francine Demichel, anotan tres criterios comunes a las diferentes formas de dictaduras surgidas desde el vientre del Estado liberal: 1. la osmosis de los aparatos ideológicos y administrativos del Estado; 2. la no admisión de los conflictos de clase y 3. la degradación del fenómeno jurídico, en particular del principio de legalidad que singulariza la funcionamiento del "Estado de Derecho" instaurado luego del triunfo de las revoluciones liberales.

Tenemos la sensación, sin embargo, de que sin desconocer las dificultades de este ejercicio es posible avanzar en la tipificación de los rasgos específicos de los Estados de excepción latinoamericanos, yendo más allá de sus formas clásicas: el Bonapartismo, tal como lo caracterizara Marx en el "18 de Brumario" y el fascismo, al cual ha sido dedicada buena parte de la reflexión política reciente, con el objeto de buscar la especificidad de nuestras experiencias más recientes. Creemos que el problema de las dictaduras capitalistas de la región necesita ser repensado a partir de la experiencia concreta de América Latina y de los rasgos de dependencia y explotación múltiples que inciden sobre nuestros procesos políticos, singularizándolos.

En los últimos años el debate acerca de si las nuevas dictaduras militares tienen o no un carácter Fascista.

ha estado cargado de pasión y no ha producido conclusiones definitivas. Tras una montaña de escritos, lo único que se ha logrado cimentar es una actitud de relativismo entre las partes contendientes: quienes sostienen el carácter Fascista de estas experiencias, concluyen por admitir que se encuentran ausentes de ellas diversos elementos fundamentales del proyecto Fascista clásico (inexistencia de partido Fascista; falta de proyectos corporativistas o de organizaciones de masas para canalizar el apoyo social de la pequeña burguesía y de los grupos menos concientes de la clase obrera y el campesinado). En el otro extremo quienes niegan el carácter Fascista de estos regímenes deben admitir que ellos reproducen varios elementos de aquellos que caracterizaron a la Italia Fascista o a la Alemania nazi de entre guerras, los que en lo esencial dicen relación con el intento de desarticular a la clase obrera y a las organizaciones políticas que la expresan.

Así las cosas, no tiene sentido insertarse en esta discusión. Por el contrario, sigue planteada la necesidad de conocer más apropiadamente los procesos de maduración e incubación de estas nuevas dictaduras militares; las motivaciones de las fuerzas sociales que les han prestado respaldo desde sus primeras fases; el carácter de sus relaciones con los diferentes centros capitalistas de poder internacional; el sustrato orgánico de las vinculaciones de cooperación que mantienen entre sí; el proyecto político mediante el cual intentan reorganizar la dominación global de sus burguesías y el carácter de los proyectos con los que buscan prolongar la desarticulación del movimiento obrero y popular.

3. Con miras a una más correcta comprensión de nuestras experiencias políticas más recientes, resulta

igualmente interesante asumir las conclusiones de algunos trabajos sobre las experiencias de Europa del Sur y en particular de los regímenes autoritarios de España y Portugal durante los gobiernos de Oliveira Salazar y Franco. Estos, tras confrontar la praxis de tales sistemas políticos con la predominante en los fascismos típicos, concluyen por asignar gran importancia a ciertos elementos "sui generis", que corresponden precisamente al nivel de desarrollo capitalista mucho más retardado que tenían esos países *vis a vis* el de Alemania e Italia (lo cual era aún más evidente en la época en que se inician dichas experiencias, en la década de los treinta). Estas diferencias en el nivel de desarrollo se reflejan en una distinta correlación de fuerzas al interior de la burguesía nacional; tanto en España como en Portugal, hallamos un cierto equilibrio entre la burguesía industrial y financiera nacientes, y en proceso de ascensión frente a los sectores terratenientes que extraen su poder político, su riqueza y su prestigio social del medio rural y de la propiedad sobre una tierra que explotan más bien en términos arcaicos y rudimentarios. En dichos países el conjunto de la burguesía nunca vio amenazada en forma efectiva su dominación, tenía un control eficaz sobre el aparato del Estado y no tenía necesidad de las Fuerzas Armadas o de un partido político Fascista como un elemento decisivo de mediación para el control y funcionamiento del Estado. Por lo mismo, en la medida que se organizan manifestaciones orgánicas equivalentes a las de las experiencias fascistas, éstas cumplen una función más bien ritual, y en un cierto sentido decorativas, puesto que en todo momento el organizador del proceso político es el propio dictador que ha logrado centralizar una cuota muy alta de atribuciones y de poder en sus

manos. Este factor de la personalización del poder ayuda a explicar la precariedad de los proyectos destinados a prolongar la vigencia de estos modelos autoritarios, una vez desaparecidos Oliveira Salazar y Franco; arroja luces sobre el tipo de conflicto que surge entre los sectores de la burguesía que en el pasado la figura del "conductor" unificó y que, a su desaparición, ven recrudecer sus pugnas y permite entender cabalmente por qué en esos países el proceso de desarticulación de estas dictaduras "personalizadas", contó con una base amplia de apoyo y de consenso de las que casi en todo momento la hegemonía obrera ha estado excluida.

Los recientes sucesos de Portugal, España y también Grecia, han provocado un duro impacto emotivo sobre aquellos sectores de la izquierda latinoamericana que tras polarizar mecánicamente las opciones políticas de la región entre socialismo y fascismo, esperaban del colapso de éste último las posibilidades de implantación de un proyecto socialista, en forma más o menos inmediata. Si alguna lección resulta indispensable recoger en el proceso de desplome de las dictaduras europeas durante los años setenta, es que entre los regímenes autoritarios y la opción socialista se mueve una vasta y diversificada gama de democracias restringidas, más o menos amplias que pueden o no ajustarse en plenitud a las pautas de los regímenes políticos democráticos-liberales que, no por grises y poco atractivos, resultan menos funcionales a la hora del recambio de las dictaduras desgastadas. España, Portugal y Grecia se han encargado de mostrar hasta donde es cierto que Estados Unidos tiene un objetivo estratégico de dominación que puede servir mediante diversas tácticas. Al interior de éstas últimas su rango de manio-

bra es particularmente amplio en lo relativo a las características de los regímenes políticos de reemplazo. En términos de estabilidad política y de creación de condiciones favorables a la progresiva implantación de los intereses transnacionales hay una variedad de democracias incompletas que toman la forma de regímenes políticos semicompetitivos y resguardados, con resabios autoritarios, que son muy apropiados para ensayar una nueva fase de expansión capitalista en esos países.

4. Lo anterior impone una lectura de los nuevos hechos más ligada a nuestra propia experiencia política a la vez que exige una profundización de los rasgos originales de las formas dictatoriales que se presentan en nuestra región. Una vez establecido el carácter abierto y variado de las formas concretas que asume el Estado de excepción Capitalista, es posible dirigir nuestras observaciones hacia el desarrollo político de América Latina.

Creemos que la experiencia histórica del área puede ser mejor entendida si asumimos el supuesto de que los modelos clásicos de dictadura burguesa —el Bonapartismo y el Fascismo— así como sus derivados, la dictadura personalizada o de notables, han experimentado en nuestros países reajustes importantes determinados por el diferente estado de desarrollo de las fuerzas productivas y por la diferente naturaleza de las crisis políticas que aquí los originan. De este modo, podemos explorar de manera más consistente las dos variables predominantes de dictadura Capitalista que durante su existencia independiente han tenido los Estados latinoamericanos.- la dictadura militar "clásica" o tradicional y la nueva dictadura militar con ideología de Seguridad Nacional. Ello, a su vez nos impone la obligación de realizar esfuerzos sucesivos y de aproximarnos creati-

vamente a los diferentes episodios de la historia política del continente.

Hablando en términos genéricos se puede sostener que mientras la dictadura militar tradicional corresponde a la etapa en que la hegemonía política es detenida por las oligarquías terratenientes dirigidas por Partidos Conservadores o Liberales que cuentan con el apoyo de la Iglesia, en el marco de una distribución de la población activa en que predominan los trabajadores del sector rural y en medio de pautas culturales y sociales que no son otra cosa que la prolongación del estilo y los valores predominantes en las últimas etapas de la dominación colonial, las nuevas encuentran su razón de ser a partir del ascenso de la industrialización con el consiguiente proceso de urbanización y que maduran luego de la reorganización internacional del proceso productivo que se inicia al término de la Segunda Guerra Mundial.

Las dictaduras militares tradicionales, originadas normalmente en pronunciamientos militares eran expresión del fenómeno del caudillismo que a su vez, reflejaba la debilidad de la implantación de la mayoría de nuestros Estados Nacionales. Limitadas dentro de los compartimientos estancos de los territorios nacionales ellas correspondían a una articulación directa entre burguesías internas hegemonizadas por aristocracias de la tierra y Fuerzas Armadas directamente ligadas a ellas. La solidez de estas viejas oligarquías tornaba innecesario del ejercicio del poder por parte del conjunto de las Fuerzas Armadas y permitía remitir eficazmente la dirección del gobierno a uno o más líderes salidos del seno del ejército. Por ello los regímenes políticos de este origen carecían de un proyecto histórico, e incluso de programas específicos. El esta-

blecimiento de estas dictaduras se explicaba por divisiones temporalmente inconciliables del grupo dominante o en rebeliones relativamente inorgánicas de las masas populares. Aunque en muchos casos concretos se prolongaron en el tiempo, incluso por décadas, este tipo de dictaduras militares tenía una legitimidad temporal y constituían un paréntesis entre experiencias democrático-liberales.

Es la aparición de un movimiento obrero organizado y de los partidos populares surgidos para expresar en el plano político dichos intereses de clase, la que determinará el agotamiento de la vieja forma de articular en forma autoritaria la dominación. A partir de la crisis mundial que sucede a la Gran Depresión capitalista, a comienzos de los treinta, es precisamente cuando en los países actualmente regidos por estas nuevas formas de dictadura militar se van potenciando las fuerzas sociales más dinámicas sobre la base de un proceso sostenido de organización político-social. Junto a la clase obrera, que va ampliando su sustentación orgánica desde las grandes empresas hasta llegar a las medianas y aún a las pequeñas; va apareciendo un variado movimiento campesino que, en ciertos casos, asume las banderas reivindicativas del movimiento obrero, cosa que también ocurre con los importantes movimientos juveniles, especialmente estudiantiles. El ascenso orgánico y la amplitud de la lucha del movimiento popular que asume una plataforma anticapitalista y anti-imperialista, es el factor determinante de la crisis política de estos países, en la medida que acaba por cuestionar y tornar inestables e ineficaces todos los modelos políticos tradicionales, tanto autoritarios como de corte liberal.

A partir de la expansión industrial basada en el

proceso de sustitución de importaciones, la presencia y el impacto del capital extranjero se irá diversificando en los distintos países al sumar a la actividad radicada en la extracción de materias primas y explotación de servicios de utilidad pública, los diversos establecimientos industriales. Tal proceso concluirá por afianzarse en los años cincuenta con la presencia norteamericana en los servicios financieros, los grandes complejos industriales de la segunda expansión industrial y en las actividades de los conglomerados y empresas transnacionales.

De este modo, si las formas originarias de la dictadura capitalista en la región asumían un carácter predominantemente "nacional" las más nuevas se dan dentro del contexto de una creciente internacionalización del proceso productivo y de vinculaciones interestatales cada vez más amplias. Entonces, la naturaleza del proyecto político y de los diversos modelos y programas específicos, pasa a estar condicionado por las decisiones de una dirección global que expresa los intereses de la hegemonía norteamericana. Las funciones de las Fuerzas Armadas y las organizaciones de sus tareas políticas pasan a ser definidas a partir de factores igualmente internacionales. Un símbolo de este nuevo momento, podemos encontrarlo en la suscripción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 en Río de Janeiro o en el funcionamiento de la Junta Interamericana de Defensa desde 1943. A partir de esta época, las diversas Fuerzas Armadas latinoamericanas dejan de existir y justificarse sólo en función de la defensa del territorio propio de sus estados y de su capacidad para afrontar eventuales conflictos fronterizos, para pasar a constituirse en parte de un destacamento regional, destinado a preservar los valo-

res del mundo occidental en contra de la amenaza del comunismo.

Así las cosas la aparición de las nuevas formas de autoritarismo militar se explica por factores que exceden con largueza el marco nacional. Si las Fuerzas Armadas se ven involucradas en estas nuevas experiencias es a partir de una redefinición de sus funciones históricas; de la aparición de una forma específica de dependencia en el ámbito militar y de la aceptación por parte de sus jefes del liderazgo económico y político de Estados Unidos sobre los países del área con todas las consecuencias que este proceso implica.

5. Aunque, en general toda la teoría política que en América Latina ha servido de fundamento a las diferentes formas del Estado de excepción se caracteriza por un alto grado de incoherencia y vaguedad y por una gran variedad de sus referentes, en el caso de las nuevas dictaduras latinoamericanas es notable la amplitud y complejidad de su acervo teórico que incluye ingredientes que van desde la geopolítica clásica al integrismo católico, de las teorías económicas monetaristas a las concepciones políticas del totalitarismo corporativista. Con todo, dos visiones globales destacan como concepciones animadoras principales de estas experiencias: la teoría de las relaciones internacionales de la época de la guerra fría y la doctrina de la Seguridad Nacional. El punto más importante a subrayar es el de la estricta complementaridad de estas dos concepciones.

6. En primer término, las direcciones militares latino americanas de los años 60 y 70 asumen los supuestos del período de la Guerra Fría como factores permanentes e inmutables para la organización de las relacio-

nes internacionales. En parte, ésto se explica por las ideas prevalecientes en la época en que los más altos oficiales actuales recibieron su formación en los centros de perfeccionamiento militar norteamericanos. Pero el fenómeno es más profundo. Desde las primeras décadas del presente siglo, los conflictos militares abiertos entre las naciones latinoamericanas se habían reducido considerablemente, lo que afectaba el rol de las Fuerzas Armadas dentro de cada sistema político convirtiéndolas en un blanco fácil en términos de la reducción de la calidad y volumen de sus aprovisionamientos y contingentes. Con la emergencia de la guerra fría ellas ven aparecer nuevamente un enemigo visible, peligroso y permanente: "el comunismo internacional en su fase de expansión". Entonces, la tarea de las Fuerzas Armadas se redefine y actualiza en función de su pertenencia a un bloque de naciones que integran "el mundo libre" y que llevan adelante un conflicto en donde lo que está en juego, es la forma misma de civilización y las pautas esenciales de organización de la sociedad.

Para estos efectos, lo característico de la guerra fría es que en ella todos los países son importantes en la lucha, sea por su contribución política, por su aporte al aprovisionamiento de materias estratégicas, o por sus contribuciones propiamente militares. Los pactos de ayuda militar bilaterales y los acuerdos multilaterales de defensa, serán los documentos que extenderán la constancia material de esta situación.

Así, en el marco del gran conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se provoca una "dignificación" y revalorización de la función militar en América Latina. Este, que es un fenómeno que tam-

bien se aprecia en los países capitalistas desarrollados, resulta mucho más acentuado en los países capitalistas de la periferia. Para hacer frente al riesgo de "la agresión extracontinental" de que habla el TIAR, los altos mandos militares perfeccionarán una relación especial con las direcciones militares y con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la que luego se extenderá a la comunidad de inteligencia de ese país. De este modo, incluso bajo gobiernos de orientación democrático-liberal los mandos militares de los países latinoamericanos dispondrán de un interlocutor privilegiado en uno de los centros de poder decisivos del Gobierno Norteamericano. Conviene subrayar igualmente, que la etapa de la guerra fría y de plena vigencia de la política de bloques ofreció en Estados Unidos las máximas posibilidades de poder político interno a los grupos dirigentes del Pentágono.

No debe extrañarnos entonces, que dentro de su lógica, los militares latinoamericanos consideren cualquier modificación en los esquemas de política exterior de Estados Unidos o de las demás naciones capitalistas avanzadas como una capitulación en relación a la política correcta de enfrentamiento con el comunismo a la que ellos atribuyen un valor permanente. Esta incomprensión y ofuscación es mayor cuando hacen frente a políticas norteamericanas como la "detente" que supone la configuración de un *modus vivendi* entre las grandes potencias, que incluye la limitación parcial de la producción y uso de armamentos estratégicos.

Ante tales "claudicaciones" la única posición válida, a juicio de los jefes militares latinoamericanos, pasa a ser la de una cruzada que sostenga con firmeza las posiciones correctas a la espera de que las naciones líderes

del mundo capitalista, en especial Estados Unidos, retornen a las posturas justas que nunca debieron haber abandonado.

Este segmento de la constelación ideológica de las actuales dictaduras militares, tiene una serie de implicaciones prácticas. Crea una tendencia en la dirección de una autonomía relativa de estos regímenes frente al Gobierno de Estados Unidos, en la medida que éste sostenga la retórica de la distensión o de los derechos humanos. Lleva a sus dirigentes a la organización de verdaderos *lobbies* en Washington para organizar la asociación con los grupos políticos más conservadores de ese país y con los grupos de poder financiero que comparten en forma casi completa sus puntos de vista. Determina igualmente la articulación de vinculaciones preferentes con organismos bancarios y con la comunidad financiera de ese país que les permiten defenderse de cualquier presión de carácter gubernamental e incluso anularlas en base al ejercicio de la influencia política de estos aliados internos en Washington.

En particular bajo la administración demócrata del Presidente Cárter, este factor originó un conflicto que tiene significación por mucho que los márgenes con que se maneja el Gobierno de Estados Unidos excluyan la confrontación global y abierta de sus críticos y la aplicación de sanciones políticas o económicas a quienes no sigan sus recomendaciones.

7. La segunda gran concepción animadora de los nuevos regímenes militares de América del Sur, es la doctrina de Seguridad Nacional convertida por la mayoría de ellos en tesis oficial de sus Ejércitos y Gobiernos. En relación a esto, conviene restablecer también, su carácter propiamente imperialista. Aunque las versiones más

popularizadas de esta doctrina son las latinoamericanas tanto en su variable brasileña (formulada en la Escuela Superior de Guerra de Brasil y en particular en las teorizaciones del general Golbery do Couto Silva) como Argentina (cuyos exponentes más importantes son el general Osiris Villegas y el Teniente general Benjamín Rattenbach), quedando como una expresión bastante subdesarrollada —"Geopolítica parvularia" la denomina en un trabajo Raúl Ampuero— la concepción de la Academia de Guerra Chilena, cuyo vocero más conocido es el propio general Augusto Pinochet, los planteamientos originales de esta teoría fueron formados en el Colegio Nacional de Guerra, el más alto instituto de estudios militares de Estados Unidos. En dicho centro, desde comienzos de los cuarenta en base a las concepciones y propuestas del más importante teórico norteamericano de Geopolítica, Nicolás Spykman (quien a su vez tomó lo principal de sus ideas de los teóricos alemanes), se fueron elaborando los puntos centrales de esta doctrina cuyas ideas fueron elevadas a la categoría de norma legal en 1947 con la *National Security Act*.

Como se ha establecido en diferentes trabajos los elementos centrales de la doctrina de la Seguridad Nacional se orientan al planteamiento de una guerra interna que permita la supervivencia nacional de los Estados capitalistas sobre la base de la identificación y del aniquilamiento de los "enemigos internos" en cada nación. El conflicto mundial entre las superpotencias pasa a tener así siempre una expresión nacional que se traduce en la existencia de una subversión interna aliada al comunismo que es preciso erradicar. Para ganar la batalla contra la subversión es indispensable reestructurar el poder político y colocarlo bajo tuición

militar. El Estado y el Gobierno quedan así virtualmente intervenidos en razón de los intereses superiores de la nación con el propósito preciso de crear las condiciones favorables para vencer en el decisivo enfrentamiento interno de proyectos antagónicos de civilización y sociedad. Por ello como han anotado Jaime Rojas y José Antonio Viera Gallo³ "la seguridad de los Estados Latinoamericanos, descansa en la participación activa en una estrategia global de lucha permanente contra el comunismo".

Es importante anotar que, para los principales ideólogos de la Seguridad Nacional, esta doctrina comporta una respuesta global a las concepciones del Marxismo-Leninismo puesto que integra los ámbitos políticos, económicos, psicosociales y el específicamente militar. Hallamos también en ella, los supuestos de una estrategia reaccionaria del desarrollo, que liga indisolublemente los conceptos de Seguridad Nacional y desarrollo, subordinando las expectativas del crecimiento, la justicia en las relaciones sociales y la satisfacción de las necesidades humanas a la seguridad del Estado y de la sociedad. La nación, elemento global y aglutinador toma el sitio de los partidos, las clases y los grupos que, en función de sus conflictos e intereses subalternos, dividen artificialmente a la sociedad y ponen en riesgo los valores de la civilización cristiana (entendida ésta última, casi en los mismos términos en que la concepción integrista la caracteriza).

La proyección más importante de esta doctrina es que por la naturaleza prácticamente indefinida de la

3 Jaime Rojas y José A. Viera-Gallo "La Doctrina de la Seguridad Nacional y la militarización de la política en América Latina", México 1977 (mimeo).

confrontación que busca resolver, plantea una incompatibilidad estratégica con todas las manifestaciones de la democracia liberal, pues sus sostenedores estiman que los diferentes mecanismos consustanciales a ésta (elecciones, alternancia en el poder, Derechos Humanos, aceptación del pensamiento crítico), provocan la indefensión de los Estados frente al extremismo subversivo. Por lo mismo, los proyectos de institucionalización y los anuncios del establecimiento de formas democráticas restringidas, constituyen tan sólo recursos tácticos, cuyo propósito último es, o ganar tiempo o dar expresión institucional a los patrones políticos autoritarios y represivos. Todo esto incide directamente en la posibilidad de un recambio efectivo desde adentro de las actuales administraciones militares que pueda concluir en una efectiva salida democrática. Mientras la doctrina de Seguridad Nacional se mantenga como concepción oficial de las Fuerzas Armadas de los países sudamericanos, no existe posibilidad alguna de democratización real. Por lo mismo, la actividad de los sectores democráticos y del movimiento popular tiene que pasar necesariamente por la destrucción de la base ideológica y material de poder que, al interior del aparato represivo, ha permitido el surgimiento y desarrollo de esta concepción antipopular.

Los sectores de la izquierda latinoamericana en particular, deben entender que sin una lucha ideológica profunda en contra de estas doctrinas contrarias al proyecto popular y sin las consiguientes operaciones concretas que lleven a su completo desmantelamiento, cualquier solución política sería aparente y permitirá a los sectores de extrema derecha, tanto civiles como militares, retener un poder de veto sobre el conjunto de la sociedad.

8. Con el advenimiento de la Administración Cárter se introdujeron diversos elementos nuevos en relación a la viabilidad de los regímenes militares de América Latina en su forma original.

El primero de ellos parece determinado por el intento de buscar una coordinación más estrecha de políticas entre los diferentes países capitalistas desarrollados (tal como surge de las diversas proposiciones y de los diferentes estudios de la Comisión Trilateral). Allí subyace una nueva estrategia de desarrollo global que busca acentuar la reorganización de los distintos procesos productivos en términos internacionales, asignando a los países en desarrollo una actividad industrial que consiste tanto en la producción de partes y piezas como de productos determinados pero en el contexto de la planeación global de las empresas transnacionales. Esta propuesta busca, en cambio, concentrar en los países capitalistas desarrollados la producción y la venta de servicios y tecnología y de bienes industriales de alta sofisticación. Es evidente, y la experiencia más reciente así lo muestra, que estos intentos de asignación de otro tipo de especialización productiva choca con los intereses y designios de los Estados más avanzados de la región latinoamericana (un buen ejemplo de estos problemas y de las dificultades para resolverlos, puede ser el del programa brasileño para el desarrollo de su propio potencial nuclear donde no parece haber punto de acuerdo posible entre el gobierno de Estados Unidos y el de Brasil). Así, aunque los programas económicos de algunos gobiernos militares muestran la disposición a ajustarse a la nueva distribución de roles y encaminar su fuerza industrial en términos de coordinación subordinada muy parecidos a los de las economías de Taiwán o

Corea del Sur, éste no será un principio absoluto y eso debe tenerse en cuenta.

Así, el esquema trilateralista, junto con revalorizar la importancia de América Latina, puede constituir una fuente de eventuales nuevas contradicciones entre los Estados Nacionales y la actividad e intereses de las grandes corporaciones transnacionales.

En segundo término, hallaremos la preocupación de muchos de los nuevos formuladores de la política hemisférica del Departamento de Estado por no ligar su suerte e intereses de un modo permanente a regímenes autoritarios cuya crisis preveen en un plazo medio. Bajo la Administración Cárter asistimos a un intento de homogeneización política y mientras, por una parte, algunos de sus asesores e ideólogos (v. gr. Samuel Huntington) se muestran preocupados por la "gobernabilidad" de las democracias liberales occidentales, los encargados de la política latinoamericana se empeñan en buscar la instauración de democracias resguardadas o viables, un modelo político que se halla a mitad de camino entre las dictaduras militares con ideología de Seguridad Nacional y las democracias liberales que en el pasado mejor funcionaron en la" región a la manera de Uruguay o Chile.

En tercer término y como producto de lo anterior encontramos en el gobierno demócrata una mayor discordancia en torno a los caminos a seguir frente a la región y en particular en lo relativo al tratamiento de las dictaduras militares. En los distintos centros de poder (Departamento del Tesoro, Pentágono, Departamento de Estado, Consejo de Seguridad Nacional) tienden a perfilarse diferentes proposiciones políticas. En forma más general, al nivel del sistema político en su conjunto, hasta por las concepciones híbridas del

Presidente se favorece una pugna de legitimidades "liberal" y "conservadora". Esto se traduce en un fenómeno nuevo conforme al cual los diferentes sectores de las burguesías nacionales y aun del bloque en el poder de los países del Cono Sur, encuentran interlocutores adecuados en Washington, pero no tienen capacidad para imponer sus concepciones al conjunto del Gobierno Cárter.

De este modo, incluso la evidente ambigüedad a la que el Presidente Cárter ha echado mano con el objeto de relegitimar el sistema establecido de su país, tras las graves crisis de los años 1973 y 1975, ha terminado por ser un factor desfavorable para la mantención de los regímenes dictatoriales militares tal como fueron inicialmente concebidos.

10. Los fenómenos descritos han terminado por proyectarse en forma dinámica sobre las perspectivas del movimiento popular latinoamericano.

Las derrotas sufridas en los primeros años de la década del 70 por las organizaciones populares fueron las más severas en toda la historia de la región. La magnitud de la desarticulación y los retrocesos orgánicos de los movimientos populares, no pueden ser soslayados; en algunos casos comprometieron la totalidad de los avances logrados a lo largo de prolongadas décadas de lucha. Sin embargo, para las exigencias internas de los nuevos modelos políticos, esto no fue todavía suficiente. El supuesto bajo el cual trabajaban las dictaduras militares era el de la total liquidación de los sectores populares y de la clase obrera en su expresión política y la acción de sus partidos y a esto respondió la intensidad en el uso de las técnicas represivas.

Esto último —el aniquilamiento de las organizacio-

nes del pueblo— no fue conseguido ni siquiera durante los primeros años en las más favorables circunstancias. Por lo mismo, no puede extrañar el que, junto con producirse las primeras fisuras al interior de los grupos dominantes y de las Fuerzas Armadas, asistiéramos a un flujo y una gradual reorganización del movimiento popular que se inicia precisamente con un aumento de la actividad de las organizaciones obreras.

La propia pérdida de coherencia de la política norteamericana ha sido un factor decisivo en este proceso. Su reflejo inmediato se puede apreciar en la fractura, más o menos evidente, de la clase dominante en los distintos países del Cono Sur de América Latina. Ante la retórica confusa y los altibajos en las propuestas del gobierno demócrata, algunos grupos gobernantes han optado por las salidas de institucionalización y la actividad de procesos de transferencia del poder político a sectores civiles reservándose sólo una función tutelar de éstos, en tanto que otros optaban por mantener políticas duras, aun a riesgo de desmejorar sus relaciones con Estados Unidos. Un ejemplo de la primera opción, lo hallamos en la táctica del Gobierno boliviano de Banzer y dentro de otro contexto, en el cambio adoptado por los regímenes de Perú y Ecuador, todos los cuales han convocado para el curso de 1978 a procesos electorales que pueden culminar en la organización de gobiernos civiles moderados, sujetos a la fiscalización de sus respectivas Fuerzas Armadas. En el otro extremo tenemos las decisiones de los regímenes militares de Chile y Uruguay que anuncian su agresiva disposición de resistir todas las presiones, vengan de donde vengan, teniendo como propósito fundamental la consolidación de sus actuales proyectos políticos y económicos.

En todos los casos, sin embargo, y cualesquiera que haya sido el camino escogido por los grupos militares que detentan el poder, encontramos una progresiva revitalización del movimiento obrero y popular. Tras largos años de pacificación por la violencia, en que ninguna demanda reivindicativa fue siquiera posible, las organizaciones sindicales se reagrupan y levantan plataformas que incluyen tanto el mejoramiento económico como el avance hacia la democratización. La connotación política de sus posiciones debe ser subrayada: las diferentes huelgas y movimientos de resistencia civil registrados en el último tiempo en Latinoamérica apuntan, no sólo a la recuperación de las ventajas perdidas de los trabajadores; en el horizonte de su lucha se halla inscrita con nitidez la búsqueda de una democracia política renovada que no se satisface con los recambios formales y que reclama el derecho a decidir acerca de la organización política y económica de la sociedad.

Esta recuperación inicial del movimiento popular no debe ser, naturalmente, sobreestimada; su mayor significación reside en que viene a poner término a una etapa oscura de reflujo y derrota. Pero para plantearse la liquidación de las formas actuales de dominación y para levantar un proyecto histórico propio que, otra vez, abra posibilidades de avance en la dirección del socialismo, será necesario acumular todavía mucha fuerza y resolver numerosos problemas pendientes que han impedido hasta ahora levantar una alternativa articulada para afrontar el proceso de reorganización de la economía, el Estado y el aparato militar. Es preciso tener conciencia que si no existen tácticas adecuadas, éste repunte puede ser desbaratado y las manifestaciones de lucha reprimidas, para recomponer otra vez la precaria unidad de los grupos dominantes.

Pero, por otra parte, la situación actual ofrece importantes perspectivas. La experiencia histórica muestra que es difícil detener el proceso de pugnas y descomposición cuando la unidad de las burguesías nacionales se ha roto en función de esquemas y alternativas políticas contrarias y aun contradictorias. Esto es más válido todavía en un cuadro de opciones y propuestas no coherentes por parte de los distintos centros de poder norteamericanos. Así, todo parece indicar que en los años que vienen avanzará la reconstrucción del movimiento popular y se crearán condiciones reales para, tras acentuar su crisis, hacer posible el objetivo de la liquidación de las actuales dictaduras militares del Cono Sur de América Latina.

Notas para un estudio comparado entre el Estado Fascista "clásico" y el Estado de Seguridad Nacional

El tema que me toca desarrollar se titula "Notas para un estudio comparado entre el Estado Fascista clásico y el Estado de Seguridad Nacional del Cono Sur de América Latina".

Tengo la sensación cierta, de que este análisis tiene importancia por varios conceptos. Desde hace varios años, dirigentes de las organizaciones de izquierda y de los sectores democrático-liberales de América del Sur vienen discutiendo, bastante apasionadamente, acerca de si los proyectos políticos de carácter autoritario puestos en ejecución en varios países de América del Sur tienen o no, un carácter Fascista.

Inicialmente, optamos por respuestas más o menos tajantes, de algún modo asignables a las experiencias políticas de América del Sur; de Chile, Uruguay, Bolivia, Argentina y Brasil, preferentemente. Algunos por un lado asumían su carácter identificablemente Fascista, por el otro se trataba de negar esa característica

intentando encuadrar los modelos políticos allí aplicables dentro de los patrones de las dictaduras militares modernas conocidas en la región.

La propia práctica de dichos regímenes ha introducido modificaciones a esos enfoques de forma que a estas alturas se pueden recibir muy variadas contribuciones y reflexiones de uno u otro sector, y hoy se admite la necesidad e importancia de una discusión teórica más a fondo del tema en el plano de los sistemas políticos, con miras a precisar los rasgos principales del proyecto político que actualmente se aplica en el Cono Sur de América Latina. Este intento apunta a la necesidad, no tanto de establecer una calificación global de estos regímenes, como de, más bien, desentrañar la racionalidad del funcionamiento de estos regímenes políticos sobre la base de una desagregación un tanto más sofisticada que la simple calificación genérica inicial acerca de si ellos son o no, fascistas.

En esta línea de esfuerzo se puede inscribir este análisis que busca subrayar las diferencias de "racionalidad" que anima a ambas series de experimentos autoritarios.

Comienzo por señalar algunas dificultades importantes que plantea este tema, dos de las cuales parece importante retener permanentemente en nuestra discusión.

La primera, es que si uno intenta analizar la teoría política Fascista, tiene que hacerlo asumiendo necesariamente el carácter tardío e insuficiente de su formulación.

Ernest Mandel, comentando la discusión provocada en el campo del pensamiento revolucionario en torno a los orígenes y la esencia del fascismo, hizo una precisión muy correcta a este respecto, cuando señala que

"la historia del fascismo, es al mismo tiempo, la historia del análisis teórico del fascismo". Efectivamente, a diferencia de las experiencias democrático burguesas aplicadas en el siglo XIX bajo la forma de proyectos políticos concretos, precedidas nítidamente en el tiempo por su teorización más o menos completa, y a diferencia también de la organización política socialista, donde ocurrió el mismo fenómeno, en el caso del fascismo se da primero la irrupción del fenómeno político mismo —Mussolini está en el poder a fines de 1922 en Italia, apenas tres años después de que se ha fundado el primer movimiento Fascista, propiamente tal, que existe en Europa— mientras que el proceso de la sustentación teórica del proyecto Fascista sólo se inicia simultáneamente con la construcción de la forma estatal Fascista.

Entonces los principales teóricos del fascismo trabajan, producen, al mismo tiempo que la experiencia fascista se va desarrollando. Es el caso de Giovanni Gentile, de Alfredo Rocco y de las expresiones del mismo Benito Mussolini en Italia, y de Cari Schmitt o Alfred Rosenberg, en el caso del modelo nacionalsocialista alemán, para señalar algunos¹. Esto introduce una dificultad, en la medida en que determina que la estructura política del fascismo deje de tener la precisión de los modelos que se construyen con una base teórica anterior y más completa.

Un segundo elemento a considerar es que el fascismo —a diferencia de otras teorías políticas— asume un carácter conscientemente contradictorio, y en muchos casos, voluntariamente no racional. Esta es una caracte-

1 Para los fines de este trabajo limitamos la conceptualización de "fascistas" a los dos modelos fundacionales: el italiano y el alemán.

rística de toda la elaboración teórica de corte autoritario que se hace en el período que media entre las dos guerras mundiales. En último término, el fascismo es una respuesta de fuerza a un nivel insuficiente de amenaza de la clase obrera y a su intento de implementar un proyecto histórico que asegure su hegemonía; y por lo mismo no se preocupa mucho de su propia consistencia ideológica. Probablemente, nada ilustre mejor este carácter contradictorio de la teoría política Fascista, que algunas afirmaciones hechas por los principales líderes del fascismo.

Mussolini, por ejemplo, en 1924, sostiene: "Nosotros los fascistas tenemos el valor de descartar todas las teorías políticas tradicionales; somos aristócratas y demócratas. Revolucionarios y reaccionarios, proletarios y antiproletarios, pacifistas y antipacifistas. Basta con tener un solo punto fijo: la Nación, el resto es obvio".²

El mismo Mussolini en otra de sus intervenciones de la época, un año antes del acceso al poder del fascismo en Italia, en 1921, había afirmado claramente: "Acción, no palabras. No hay necesidad de dogmas, basta con la disciplina".

Adolf Hitler, por su parte, en 1933, el año de la instauración de la experiencia nacionalsocialista en Alemania, sostenía textualmente: "Todos los programas son vanos. Lo que importa es la voluntad humana, la acción certera, el coraje varonil".

Es evidente que hay aquí un desprecio por la teoría política, y por contraste, con lo que caracteriza la base ideológica en casi todos los otros sistemas políticos. Aquí la teoría política sobre el hombre, la sociedad y

2 Citado en Luján y Bettónica "Y Mussolini creó el fascismo".

el Estado, desempeña un rol significativamente secundario. Es un rasgo indispensable de asumir en el caso del fascismo.

Esta característica específica será heredada en la forma que conocemos a través del testimonio cotidiano, muy claramente en las actuales experiencias autoritarias del Cono Sur de América Latina. Así, un día, el ministro del Interior de Argentina, el general Albano Harguindeguy, nos puede decir que "en Argentina no ha habido golpe de estado, porque sencillamente en Argentina, no existía Estado, al terminar la experiencia de la presidente Isabel Perón", y otro día, el almirante José Toribio Merino, constituido en ideólogo de la Junta Militar chilena, nos iluminará el camino teórico del modelo chileno señalando que en su opinión, "el gobierno de Salvador Allende, no era un gobierno marxista, sino que era un gobierno marciano", ya que allí se reproducían los rasgos de esas cosas que —como él dice— "se veían en la televisión" (*sic*).³

Desde antiguo estos elementos de irracionalidad desconciertan a los científicos sociales. En general, el pensamiento y la práctica de tipo autoritario, y muy señaladamente el pensamiento y la práctica Fascista, tienen un desprecio por la coherencia teórica que hace que cuando fenómenos de esta naturaleza son observados por quienes tienen, a diferencia de ellos, preocupación por un cierto rigor de análisis, a éstos no les resulta fácil asumir algunos de los supuestos, elementos y contradicciones, que son inherentes al desarrollo de las experiencias fascistas. De ahí que en el intento de desentrañar la racionalidad viva, el funcionamiento real de las experiencias autoritarias actuales de la región Sur de

3 Diario "Excelsior", México, miércoles 24 de noviembre, 1976, p. 3 A.

América Latina, y tratar de establecer las semejanzas y diferencias de éstas con las experiencias fascistas clásicas, se deba necesariamente asumir el impacto diversificador que los elementos de irracionalidad anotados proyectaron sobre los diversos regímenes políticos que, con un grado mayor o menor de consenso, han merecido el calificativo de fascistas.

La caracterización de un régimen de excepción sobre cuyos elementos distintivos, incluso los especialistas, difícilmente logran ponerse de acuerdo, impone algunas precisiones conceptuales previas al esfuerzo de comparación que intentamos asumir. Creemos que en la imposibilidad de lograr un pleno acuerdo acerca de cuáles experiencias merecen el calificativo de fascistas y cuáles no, debemos tratar de utilizar como método aproximativo la caracterización de una suerte de proyecto político Fascista tipo, que busque integrar, en una construcción más abstracta, los elementos característicos de aquellas experiencias que son más indisputadamente calificadas como fascistas clásicas, esto es, el Fascismo italiano y el régimen Nacionalsocialista alemán. De esta manera evitaremos caer en disquisiciones acerca de si experiencias como las de España, Portugal u otras, son o no fascistas. Con la construcción de una suerte de prototipo teórico integrador de los elementos más característicos originarios, que resuma lo esencial de las experiencias italiana y alemana de preguerra luego se hará más fácil confrontar ese resultado con las que, a su vez, sean características definitorias más o menos comunes de las experiencias autoritarias actuales del Cono Sur de América Latina.

Ahora bien ¿cuáles son los segmentos principales de análisis para la realización de un estudio comparativo de esta doble serie de experiencias? Nos parece válido

un esquema que a lo menos tome en consideración los siguientes factores fundamentales:

1. Vías de acceso al poder.
2. Formas que asume la instalación en el poder.
3. Proceso de desarticulación de la organización política preexistente.
4. Pautas de legitimidad.
5. Papel y valoración del Estado.
6. Existencia y utilización del Partido Fascista.
7. Determinación del papel fundamental atribuido en el proyecto al sistema económico.

La suma de factores anteriores puede permitirnos una determinación del grado de vigencia en los nuevos regímenes autoritarios de ciertas características esenciales del proyecto político del fascismo clásico.

En torno a estos siete elementos quisiéramos ordenar lo principal de nuestras observaciones, buscando establecer entonces, en estos campos, las comparaciones, constantes y cambios verificados entre las experiencias fascistas clásicas y las nuevas experiencias autoritarias en el Cono Sur de América Latina.

En primer término está el tema de las vías de acceso al poder. Aquí ya encontramos una primera bifurcación de opciones que diferencia a las experiencias latinoamericanas recientes, de las manifestaciones clásicas del fascismo. Tanto en el caso alemán como en el caso italiano, el fascismo, aunque a primera vista pueda parecer curioso, para afianzar su culminación exitosa de acceso al poder desprecia el mecanismo del golpe de estado propiamente tal. La moderna historiografía es unánime en señalar que la marcha sobre Roma de Mussolini, de octubre de 1922, es mucho más un proceso de compulsión política de una de las facciones políticas de la burguesía sobre los sectores dirigentes,

que un golpe de estado propiamente dicho. Además de que el avance de los camisas pardas había sido públicamente anunciado desde la reunión del Partido Fascista en Milán, una semana antes de la marcha; el rey Humberto I tiene, una vez producida ésta, la posibilidad de utilizar el mecanismo del estado de sitio que le daba facultades suficientes para controlar la situación, puesto que disponía desde el punto de vista de la fuerza numérica, de una masa de más de 100 mil hombres armados, contra 30 mil mal armados, que eran los manifestantes fascistas que confluyeron sobre Roma desde diversos puntos de Italia. Por eso, a esta altura, no hay entre los estudiosos ninguna duda o vacilación en cuanto a entender que el proceso de acceso del Partido Fascista italiano al poder en 1922 es fundamentalmente un acto de dimisión de las principales fuerzas democrático-liberales de Italia (los liberales y el Partido Popular) y del rey, antes que un golpe de estado o una operación que merezca una calificación aproximada. Lo que Mussolini comprendía bien fue que el desgaste de las fórmulas políticas vigentes al que él contribuyera decisivamente, estaba maduro y que en ese contexto un acto de masas servía como factor compulsivo para coronar el proceso de ascenso del Partido Fascista italiano; el futuro Duce advierte el vacío de poder, lo aprovecha y se inserta dentro de él.

¿Y en el caso de Hitler? La experiencia es todavía más concluyente. Los Nacionalsocialistas alemanes entienden claramente que deben abandonar los intentos putchistas fracasados en 1923 para construir, a partir de la crisis de 1929 y de la descomposición del sistema político de la República de Weimar, una alternativa de poder de apariencia enteramente constitucional que culmina finalmente, en enero de 1933, en el llamado

del presidente Hinderburg al partido nazi a gobernar, y en la consagración constitucional de Hitler como Canciller del estado alemán y como líder "legítimo" de la república.

Así las cosas, la experiencia clásica del fascismo no utiliza como vía para la captura del Estado el mecanismo del golpe de estado. En cambio, esto sí ocurre y muy característicamente en los principales casos que eslabonan recientemente la expansión de las experiencias autoritarias en América Latina. A partir del golpe de estado de abril de 1964 en Brasil, nos encontramos con el empleo del mecanismo básico del acceso violento al poder con fractura inmediata de la institucionalidad anterior y con una abierta destrucción del régimen preexistente; lo propio ocurre en Bolivia en agosto de 1971; y en Chile y Uruguay en 1973 (aunque en Uruguay bajo una modalidad un tanto distinta donde por el rol que asume el presidente Juan María Bordaberry, el fenómeno se acercaría más a la forma clásica del fascismo). Finalmente, el golpe de estado aparece con las mismas características en la experiencia de marzo de 1976 en Argentina.

Luego, miradas las cosas desde el punto de vista de las vías y mecanismos de acceso al poder, el fascismo y los regímenes del Cono Sur llegan a éste por caminos distintos; en un caso, el más reciente, por el empleo abierto, explícito del poder militar bajo la forma del golpe de estado; mientras que en Italia y en Alemania acceden a través de un proceso envolvente, de copamiento de la organización democrático-liberal.

Este mismo elemento tiene importancia en cuanto nos lleva la posibilidad de establecer diferencias relativas al proceso de desarticulación de la organización política preexistente. Este es un tema muy vasto y

tenemos perfecta conciencia de que se necesitan determinados estudios para que estemos en condiciones de esclarecerlo suficientemente. Incluye tópicos como el estudio de la actividad agitativa, conspirativa e insurreccional, la identificación de las ofensivas fascistas contra las organizaciones de los trabajadores y sus partidos, la determinación del poder de masas, que alcanzan en cada experiencia concreta los partidos del nuevo proyecto autoritario, del mismo modo que los escenarios y las técnicas que utilizan con posterioridad al acceso a la dirección del aparato estatal.

En cualquier caso, el factor nuevo que introduce la experiencia Fascista de entre guerras en los casos italiano y alemán (la que es asumida en varios casos latinoamericanos, si bien no en todos), es la valorización de una contrarrevolución de masas, la utilización de una organización social, que levantando básicamente el fantasma de la proletarización, es capaz de sumar el caudal de la burguesía al conjunto de los sectores de la pequeña burguesía y de las capas medias y al sector menos consciente del proletariado industrial, así como a importantes capas del empresariado rural y del campesinado.

Sin embargo, el estudio de las formas concretas que asume la preparación del advenimiento de estas experiencias autoritarias debe ser dirigido al conocimiento de los diferentes casos concretos. Este ejercicio tiene una gran riqueza y ofrece significativas posibilidades a todos aquellos que traten seriamente de afrontar en términos de una solución alternativa la situación actualmente predominante en América Latina. Visto en su perspectiva histórica, presenta un carácter acumulativo en la medida que la agitación y la actividad contrarrevolucionaria va asumiendo en cada caso nuevo el

conjunto de las lecciones de las experiencias anteriores y agregando nuevos ingredientes. El caso italiano nos muestra sí el significado de la táctica de la "tensión permanente" como método para fatigar y debilitar al movimiento popular. Igualmente, el sistema de las expediciones punitivas que permiten a los grupos fascistas amplificar, mediante la movilización y el empleo de la técnica más avanzada de la época, el impacto de sus fuerzas de choque. El caso alemán nos sitúa frente a las "ventajas" de una ofensiva muy concentrada de desarticulación que, apoyada en normas prohibitivas, desbarata en pocos meses al conjunto de la organización sindical, al movimiento social y los partidos políticos, dejando al fascismo como única fuerza. El caso español ilustra las reacciones que estos asumen en un contexto de enfrentamiento civil. Es particularmente descriptivo de las medidas encaminadas a sancionar a los dirigentes de las organizaciones democráticas, una vez que han conquistado el control físico de determinado territorio, así como también de la técnica de la intervención y el control militar de la educación superior. La guerra civil española y la acción de los falangistas en ella aporta también luces para entender la manipulación de los sentimientos religiosos y medir el papel que puede alcanzarla Iglesia Católica como fuerza al servicio de la reacción. Muchas de las situaciones recientes en América Latina, y particularmente el golpe brasileño de 1964, fueron también precedidos de intensas campañas en que se agitó la presunta defensa del espíritu religioso (recuérdese la famosa procesión multitudinaria del 21 de marzo de ese año, en Río de Janeiro en defensa de Dios y contra el peligro del comunismo). Finalmente encontramos la estrategia imperialista de la desestabilización aplicada en contra del go-

bierno de la Unidad Popular en Chile en donde se combinaron, de un modo todavía más científico, las acciones en los campos económico, militar, político institucional y de las organizaciones sociales, lográndose un importante enfrentamiento entre masas populares polarizadas que, con su propio choque, fueron preparando la legitimidad del posterior golpe de estado.

El cuarto campo al cual es indispensable dirigir la atención, es el relativo a las pautas de legitimidad con las cuales busca afianzarse el grupo autoritario que adquiere la detención del poder político efectivo por cualquiera de los dos medios. Aquí encontramos nuevamente una contraposición bastante significativa entre lo que es la experiencia europea del período de entre guerras y las situaciones más recientes de América Latina.

En el caso del Fascismo italiano, así como en el del Nacionalsocialismo alemán, la legitimidad básica está dada por la utilización de un tipo de nacionalismo que tiene como directo corolario un proyecto de expansión imperialista; esto se explica por el hecho de que tanto Italia como Alemania fueron países en los cuales el proceso de unificación del Estado tuvo un carácter tan retrasado, que sólo se materializó en la segunda mitad del siglo XIX; por lo mismo la búsqueda de un imperio colonial que allí igualmente tardía, lo que llevaba a los líderes del fascismo clásico a pensar muy directamente en la necesidad de la conquista imperial y de la expansión imperialista.

En el caso de Hitler, por lo demás, esta expansión como se advierte en la lectura de *Mi lucha*, tomó un carácter claramente selectivo, cuando Hitler, burlándose de Mussolini en alguna medida, decía "yo no quiero Camerunes, quiero tierras buenas hacia la Europa del

Este", señalando que el espacio vital que aspiraba conquistar era el continuo territorial que se extendía hacia Polonia y la Unión Soviética.

En el caso de Mussolini, líder de un país más modesto en recursos y con base material más limitada para emprender la conquista de nuevos territorios, su proyecto imperial se traslada sobre territorios africanos, y culmina con la bien conocida experiencia de Abisinia en 1935.

Pero, en cualquier caso, lo que estaba explícito en ambos casos era el tipo de nacionalismo que propiciaban los líderes fascistas clásicos, que incluía la necesidad de constituir un imperio bajo la égida de los Estados Nacionales que ellos mismos dirigían. No se trataba de un nacionalismo retórico, se trataba de un nacionalismo cuya proyección práctica era muy directa y muy efectiva. Todo el desarrollo de la geopolítica, toda la tesis alemana del espacio vital, y toda la organización del trabajo militar alemán, y en medida menor, del italiano, confirman precisamente esa línea básica que está directamente inscrita en la pauta de legitimidad de esos movimientos.

En cambio, en las experiencias autoritarias del último tiempo en América Latina, como se ha insistido claramente, el nacionalismo no tiene esta connotación; encontramos acá el nacionalismo como un elemento puramente retórico, en un cuadro de agudización muy efectiva de la dependencia exterior y en un contexto de reducción real de las posibilidades de utilización de la soberanía nacional. El comentario podría añadir que este rasgo no se cumple ni siquiera en el proyecto del subimperialismo brasileño, puesto que en una buena medida la transferencia de decisiones a manos de las corporaciones transnacionales norteamericanas, y del

propio gobierno de Estados Unidos como país eje y central en la defensa de los intereses fundamentales de la región, hacen que haya ahí una claudicación en términos del ejercicio efectivo de las prerrogativas de soberanía y conducción políticas.

Esto es aún más nítido, por cierto, en todas las otras experiencias que se viven en América Latina, y llega a puntos límites en situaciones como las de Chile y Uruguay.

El quinto elemento, en el cual un análisis comparado debe detenerse, es el relativo a la valoración del papel del Estado. Nuevamente aquí encontramos diferencias muy fundamentales en el papel que la concepción política Fascista asigna a la actividad estatal, y aquella que le atribuye la mayoría de los regímenes autoritarios del Cono Sur.

El fascismo clásico, en parte por su propia vocación expansionista y belicista, confiere a la actividad estatal un rol decisivo. Son ellos mismos, no es el trabajo de sus críticos o adversarios, lo que acuñan la expresión "Estado totalitario", y es bien conocida la afirmación de Mussolini en su célebre discurso de la Scala de Milán, para señalar la caracterización del estado totalitario, cuando sostiene la fórmula típica del Fascismo: "todo dentro del estado, nada fuera del estado, nada contra el estado".

Las experiencias latinoamericanas —con la excepción del caso brasileño, donde sí se advierte un afianzamiento de la organización, estructura y prerrogativas estatales— se caracteriza por un visible y en algunos casos poco comprensible debilitamiento de la estructura y organización del estado nacional.

Este proceso de desarticulación de la organización estatal preexistente, se expresa muy nítidamente al

menos en la definición de políticas públicas en dos sectores: la delimitación de la amplitud del área de actividad económica del Estado y el desarrollo de las actividades del sector social.

Los regímenes del Cono Sur de América Latina, con la excepción del brasileño que podría constituir un caso aparte, en cuanto a fortalecer cierta área del dominio público y dejar un cúmulo de industrias estratégicas, más o menos vasto, bajo el control del estado, se caracterizan por una política de "privatización" en la cual se favorece, bajo variadas formas jurídicas, la enajenación de las empresas públicas y se eliminan del campo estatal las actividades colocadas bajo control público en el período anterior, de un modo casi indiscriminado e ilimitado.

Al mismo tiempo, caracteriza a estas experiencias el considerar que está fuera del área de responsabilidad estatal directa el atender las actividades del sector social, en especial las de educación, salud y vivienda, que la mayoría de los estados democrático-liberales de Sudamérica venían desarrollando en el período que se extiende desde el término de la segunda guerra mundial.

De esta manera también en este terreno, la significación, el valor que atribuyen uno y otro proyecto a la actividad del estado nacional es visiblemente disímil: mientras los proyectos fascistas clásicos no vacilan en calificarse a sí mismo como estatistas, y desarrollar políticas económicas que condicionan fuertemente al comportamiento del sector privado, los proyectos de América del Sur se rigen más bien por el "principio de subsidiaridad", y sostienen que el estado debe buscar "por todos los medios posibles y bajo todos los recursos" imaginables, que el mayor número de actividades sean desarrolladas y decididas por la iniciativa privada y

sostienen que sólo la incapacidad de ésta para asumir tales tareas crea condiciones de legitimidad para que el Estado vaya a la satisfacción de lo que pasa a ser entonces una necesidad pública absoluta. Parece ser evidente que este último criterio no se inscribe en la teoría política del fascismo sino que pertenece más bien a los primeros estadios de la teoría política liberal, habiendo sido abandonado por la práctica de los estados democrático-liberales ya en la primera mitad del siglo XIX, lo que nos lleva a estimar la orientación económica actual de los regímenes militares del Cono Sur de América Latina simplemente como una regresión frente a la práctica contemporánea de los Estados democrático-liberales, y como un intento de retrotraer la actividad política a los primeros momentos de la elaboración del pensamiento liberal cuando este proyecto político no afrontaba todavía las enseñanzas derivadas de su propia práctica.

Otro terreno, en el que no encontramos una clara identidad entre las experiencias fascistas clásicas y las experiencias políticas más recientes del Cono Sur de América Latina, es el relativo a la existencia y utilización de un partido único Fascista.

Este es un tema que a juicio de la mayoría de los especialistas reviste la mayor significación para la conceptualización de un régimen como Fascista. Esto, porque el papel que el partido Fascista desarrolla, desde el momento mismo en que se plantea la búsqueda del poder, y especialmente en las fases iniciales de instalación de las experiencias fascistas clásicas alemanas e italianas, es fundamental, y lo eleva a la condición de instrumento principal de acción y control político; el partido Fascista tanto en Italia como en Alemania, es quien asume la confrontación física de las organizacio-

nes de la clase obrera, el enfrentamiento y castigo de los militantes de los partidos revolucionarios para provocar su desmoralización política y su reflujo; es quien asume la preparación de la hegemonía Fascista ganando la calle y aplicando el terror; es quien realiza las operaciones punitivas, especialmente en el caso italiano hacia el sector rural; es el que en definitiva galvaniza a sectores cada vez más amplios de las capas medias y a los grupos menos conscientes del proletariado industrial y del campesinado, difundiendo sus consignas, los símbolos y todos los elementos que son propios de la liturgia Fascista. Y en la etapa siguiente a la toma del poder, es esencialmente el agente básico para el desarrollo de la función represiva en el interior del Estado Fascista que establece.

Mientras más en profundidad se estudia el desarrollo de los aparatos represivos en el interior de regímenes fascistas clásicos, más se concluye que el elemento diferencial en cuanto al uso de la represión respecto al estado liberal anterior, es que el empleo de ésta en el estado democrático liberal se caracteriza por un uso institucionalizado y delimitado; el Estado hace uso de la fuerza y la represión, pero lo hace por canales y a través de medios que son conocidos y delimitables. Entre tanto, en el fascismo, y en en esto desempeña un rol fundamental el partido Fascista, el uso de los aparatos represivos se torna incontrolable precisamente porque su gestión sale de los cauces institucionales, y queda discrecionalmente radicado, por un lado, en los militantes de los partidos fascistas y en su organización, y por el otro lado, en las policías secretas —la Ovla o la Gestapo— que los regímenes fascistas clásicos desarrollan.

Así, por muchos conceptos, la existencia del partido

y su actividad es un factor fundamental en la caracterización de los proyectos fascistas de entre guerras.

En América Latina, en cambio, no sólo no encontramos la existencia del partido Fascista, sino que encontramos claramente la reticencia de las direcciones militares gobernantes a la formación de ese partido Fascista. Esa reticencia no se altera, en términos reales, por el hecho de que consientan en determinadas circunstancias la existencia de ciertas organizaciones políticas que pasan a desempeñar un rol mucho más formal que real. Tal es claramente el caso del modelo político brasileño y de su mecanismo partidista de dos fuerzas, la Acción Renovadora Nacional y el Movimiento Democrático Brasileño, tan poco significativo en su impacto profundo, que el gobierno militar se da el lujo de permitir que el partido oficial pierda dos elecciones en dos años sin que pase nada desde el punto de vista de la estabilidad del régimen. Otro caso, aún más limitado dentro de la tendencia a la organización de movimientos de fachada y poco relevantes, es el de Chile, donde un sector de lo más característico de la derecha chilena intenta organizar en 1975, el llamado Movimiento de Unidad Nacional (MUN) sin que posteriormente se pueda registrar ningún efecto gravitante de esta organización, la que al parecer terminó por no desempeñar ningún papel en el interior del sistema político que la junta militar aún no termina de organizar y definir.

Como contrapartida a su rechazo del partido Fascista, el proyecto político vigente en el Cono Sur de América Latina, se caracteriza por un concentración del poder en la estructura de mando tradicional de las fuerzas armadas, que conscientes de su inserción "institucional" en el tipo de dictaduras que se empiezan a establecer desde la experiencia brasileña, no quiere com-

partir cuotas de ese poder con sectores que estén fuera de la estructura del mando jerárquico.

En relación con el elemento del partido reaccionario con expresión de masas que, en la trayectoria de los regímenes fascistas clásicos aparece como muy significativo, muchos de los analistas latinoamericanos intentan hacer lo que a mi juicio es mucho más un juego de palabras que una respuesta real al problema, diciendo que, mientras que los partidos fascistas fueron "partidos-milicias", por tanto partidos políticos con una organización militar, los regímenes latinoamericanos se apoyan en ejércitos que se politizan y que pasan a cumplir las funciones de dirección permanente del Estado. Entonces, al elemento partido-milicia del fascismo clásico se intenta contraponer un ejército politizado, como si los dos elementos por el hecho de jugar con los mismos términos tuvieran una significación análoga.

Una estimación del rol que cumplen en el período de instalación y consolidación de los regímenes fascistas (en el caso italiano entre 1922 y 1928 y en el caso alemán de 1933 a 1935), los partidos fascistas y nacionalsocialista, afirma la conclusión de que para la especificidad del proceso de control total del poder político, el partido, es un elemento importante a considerar y que el hecho de que este factor no se presente en las experiencias del Cono Sur de América Latina, es determinante de una implantación política diferente y más precaria. Es más, no constituye una casualidad el que en muchos casos la llegada de los militares al poder haya sido precedida de un buen desarrollo de la actividad de masas, y que pese a esas experiencias anteriores se advierta muy nítidamente un esfuerzo de desarticulación posterior que arranca de la cúpula militar y que

dispone la virtual desmovilización de esa base de apoyo. Los casos de Brasil y Chile son muy significativos a este respecto y ponen de manifiesto la falta de fe y la desconfianza con que la estructura militar mira el desarrollo de un movimiento de masas que pueda llegar a condicionar el ejercicio pleno de las prerrogativas que han concentrado en el vértice superior del aparato estatal.

Un último elemento que aparece importante en la comparación (y que configura un rasgo del llamado "fascismo colonial", donde el elemento de la dependencia entra en juego) es el de la determinación del papel atribuible en uno y otro tipo de experiencias al sistema económico en general y a la política económica en particular.

En las experiencias clásicas, por los factores que ya han sido descritos, encontramos una estrategia económica de afirmación nacional, con culminación belicista, implementada con apoyo en la gran burguesía interna y en el sector industrial preferentemente, mientras que, en los modelos latinoamericanos actuales, nos encontramos con una estrategia de desarrollo que busca una nueva inserción internacional de nuestros países y que propicia ampliar el margen de influencia del capital extranjero y practica la desindustrialización y la transferencia de dominio y de explotación de las riquezas naturales y recursos básicos nacionales a manos de los grandes consorcios internacionales, impulsando un tipo de política económica que implica el subdesarrollo dependiente y se viene traduciendo en una captación a cualquier precio de capital y de tecnología extranjera, proveniente de las empresas transnacionales, en tanto desde el punto de vista interno, sacrifican no pocas veces el apoyo de los sectores industriales y

trabajan en estrecho contacto con grupos especulativos asentados en actividades de tipo financiero.

El caso chileno quizá sea el más nítido de esta línea, pero también en las experiencias uruguaya y argentina, encontramos proyectos que reflejan el mismo tipo de lógica (de nuevo habría que hacer la consideración de que para este efecto, aparece como una experiencia *sui generis* el caso brasileño).

Todo lo anterior nos aproxima a un decisivo campo en el que el análisis debería ser proyectado para asumir la comparación entre estos dos tipos de experiencias políticas: el relativo a la vigencia de ciertos rasgos específicos del proyecto político del fascismo clásico en las actuales manifestaciones autoritarias del Cono Sur latinoamericano.

Mi impresión es que aquí se encuentra —sin ser éste probablemente el campo más determinante desde el punto de vista de la racionalidad de funcionamiento de los proyectos— un cierto número de elementos que son coincidentes, entre los desarrollos italiano y alemán de entre guerras, y las experiencias más recientes latinoamericanas de Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. Creo que por su carácter suficientemente conocido es posible reseñarlos sin que sea necesario extenderse en demasiados comentarios sobre cada uno de ellos.

¿Cuáles son estos elementos? Yo he tomado un grupo de diez que aparecen claramente reflejados en los fascismos italiano y alemán y de los cuales hay un número importante de antecedentes que lleven a pensar que están siendo considerados en las presentes experiencias del Cono Sur.

En primer término, el principio de máxima concentración de la estructura del poder estatal. Mientras toda

la construcción democrático-liberal, en su teoría y en su práctica se basa en la idea de una división interior del trabajo en el aparato estatal —tal es el presupuesto del principio de separación de los poderes y delimitación de competencia—, los teóricos del fascismo se guiaron por los supuestos contrarios. Las ideas que constituyen una obsesión en Montesquieu entre otros, para organizar el aparato estatal al que ven como el monstruo amenazante que describiera Hobbes, al punto que su teoría de división de los poderes del Estado contenidas en el libro undécimo de *El espíritu de las leyes* se funda en la idea de "dividir el Leviatán", de seccionar el poder político y neutralizar en un juego de competencias e instancias de fiscalización al Estado, para que así no amenace la prerrogativas del hombre individual, el Estado Fascista se caracteriza por el principio exactamente inverso; exalta la concentración suprema, máxima, de las prerrogativas de competencia y bajo este supuesto organiza la estructura del poder estatal. Por eso, presentados bajo la forma de organigramas, los regímenes fascistas aparecen tan burdos y simples, tan poco competitivos con el nivel de sofisticación que habían alcanzado ya a esas alturas los sistemas políticos democrático-liberales en cualquiera de sus manifestaciones.

Este elemento centralizador ciertamente está presente en la mayoría de los modelos políticos latinoamericanos en las experiencias que comentamos. Hay una concentración de la estructura de poder estatal y hay una desaparición de la división interior del trabajo, característica de las formas democrático-liberales.

El segundo rasgo que es coincidente, en uno y otro tipo de experiencias políticas, es la negación simultánea y enlazada de las perspectivas socialistas y de la

organización democrático-liberal. El enemigo principal, tanto del fascismo como del autoritarismo del Cono Sur de América Latina es, ciertamente, el proyecto socialista, la perspectiva de una hegemonía socialista y el ascenso de las fuerzas que la implican que son los sectores populares, la clase obrera y sus partidos. A partir de esta necesidad de enfrentar al que aparece como su enemigo principal, el autoritarismo del Cono Sur, hace el mismo raciocinio del fascismo clásico y dice: "si queremos evitar de un modo permanente el riesgo de la instauración del socialismo, tenemos que ser capaces de destruir el sistema que resulta incapaz de contener el ascenso de las fuerzas que propugnan el socialismo, o sea, tenemos que destruir también el Estado Democrático Liberal y sus manifestaciones". El general Augusto Pinochet, "enriquece" a este respecto con una frase de gran brevedad, la teoría política del autoritarismo cuando sostiene en sus conversaciones con el jefe del estado uruguayo, José María Bordaberry, en Montevideo en mayo de 1975: "La democracia es el mejor caldo de cultivo del comunismo". En consecuencia, concluyen los militares, igual como ayer lo hicieron Mussolini y Hitler, si se quiere luchar contra el comunismo, también se tiene que destruir la democracia, porque si no se destruyen las formas democrático-liberales, el riesgo del socialismo —y para las capas medias, a las que el fascismo habla, el riesgo de la "proletarización"— seguirá siendo un riesgo permanente.

Este emplazamiento y sus secuelas que no aparece con anterioridad a la aparición del fascismo en el pensamiento político, son claramente recogidas en las experiencias del Cono Sur.

Luego encontramos' la titularidad elitista del poder político. Entre los enemigos de la democracia liberal y

en especial entre los principales teóricos que preceden a la aparición de los regímenes fascistas, como los italianos Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, se había insistido mucho en la necesidad de asegurar para "los mejores" la conducción de las organizaciones estatales. Esto, en lo cual insisten tanto los líderes fascistas del período de entreguerras y que es la base, por otro lado, de todas sus teorías racistas, es claramente recogido por los altos mandos militares de América del Sur en los últimos años. Ellos consideran que el desarrollo de la lucha política y la existencia de partidos que expresaban los intereses populares en América Latina imposibilitó y desnaturalizó el acceso selectivo de las minorías más preparadas y capaces a los puestos de dirección del Estado, al subordinar las oportunidades de participar en la función pública al compromiso político. Este ingrediente teórico es la base en los estados del Cono Sur de América Latina, de una clara alianza entre el sector más tecnificado de la dirección militar y un sector de la tecnocracia civil (fundamentalmente economistas) en la cual se reclutan la mayoría de los principales asesores de estos regímenes —personalidades del tipo de Roberto Campos y su influencia a fines de la década del 60 en Brasil o más recientemente "técnicos" como Alejandro Vegh Villegas en Uruguay o Jorge Cauas en Chile.

Otra característica de la organización política del fascismo clásico que encontramos, aunque no con la misma intensidad, presente en las actuales experiencias de América Latina, es la exaltación de la importancia del jefe o conductor.

Formalmente, los gobiernos militares de América del Sur han llegado al poder como expresión de una decisión del conjunto de los mandos de las distintas ramas

de las fuerzas armadas, bajo la forma de juntas militares, o colectivos de comandantes en jefe de las distintas ramas; en algunos casos —siendo el chileno el más claro— han revertido esta variable original a formas de concentración del poder de tipo unipersonal, desplazando así la significación e influencia de quienes al comienzo estaban colocados, al menos teóricamente, en posición paritaria de mando en favor de los que finalmente resultan ser los "jefes supremos" de la nación y del Estado.

Naturalmente que aquí juegan los factores de la rivalidad inter-armas, las correlaciones de poder de fuego y de fuerza de cada sector y ésto es lo que explica el que normalmente sea el Comandante en jefe del ejército el que logra afirmarse y consolidarse como el conductor político de la nación. (En el caso brasileño de nuevo, encontramos la manifestación más atenuada de esta característica y una cierta mayor institucionalización de las cuotas de poder entre los diversos cuerpos armados).

Otro elemento, que es fácilmente proyectable a nuestras experiencias, es la abolición del principio de legalidad, o para usar el lenguaje de los propios juristas que estudian las normas fascistas como Ernst Fraenkel,⁴ la implantación de un ordenamiento jurídico que es mucho más "prerrogativo" que "normativo". Mientras toda la legislación democrático-liberal se asienta en el valor de la seguridad jurídica y en la necesidad de que las personas conozcan cuáles son sus deberes, sus obligaciones y sus facultades, la construcción jurídica del fascismo se basa en la disposición de atribuciones

4 V. la compilación "The Dual State" Simón and Schuster Nueva York, 1941.

y de prerrogativas globales, por parte de los titulares del poder estatal.

Se podrían señalar muchas citas de los propios juristas del fascismo clásico reforzando esta característica. El italiano Sergio Pannunzio por ejemplo, en 1928, ligaba la idea de normas jurídicas con la discrecionalidad del conductor en los siguientes términos: "El Estado Fascista —decía él— se actualiza dinámicamente con la siempre renovada decisión del conductor".⁵ Por su parte, Carl Schmitt, probablemente el más importante teórico del derecho de las concepciones autoritarias en Alemania e inspirador muy próximo de la construcción jurídica nacionalsocialista, distinguía al Estado como "elemento político dinámico" en la experiencia nacionalsocialista, contratándolo con el Estado en cuanto "elemento político estático", bajo la república de Weimar y en general bajo cualquier régimen democrático-liberal. Consecuencia de esto, y dada la especificidad de este criterio en el campo jurídico encontramos otro rasgo característico en las experiencias recientes latinoamericanas que es común con las modalidades del fascismo clásico: la supresión total e indefinida del estatuto de garantías personales y de libertades públicas.

Todo este clásico capítulo que, en los orígenes de las revoluciones burguesas, dio lugar a las declaraciones universales de derechos del hombre y del ciudadano, y que finalmente terminó alojándose, un tanto más modestamente, en un capítulo de las constituciones que los estados democrático-liberales aprobaban, en el caso del fascismo simplemente es cancelado y no se

5 Citado por Hans Manfred Bock en el trabajo "El fascismo", contenido en la "Introducción a la ciencia política" de W. Abendroth y K. Lenk, Anagrama, Barcelona.

reconoce una sola garantía ni se consagra una sola norma a este respecto, quedando también sujeto el funcionamiento de los derechos fundamentales a la discrecionalidad prerrogativa de los titulares del poder.

Siempre en el campo jurídico y vinculado al fenómeno del poder, encontramos todavía otro segmento de coincidencias entre los fascismos clásicos y las recientes dictaduras militares latinoamericanas. Es la baja tendencia a la institucionalización, la búsqueda de un funcionamiento por plazo indeterminado bajo regímenes legales de excepción, que suprimen precisamente la certidumbre normativa de todas las garantías y libertades.

Igualmente aparece claro y reiterado, en uno y otro caso, la proscripción de los partidos políticos y del movimiento obrero auténtico, así como de otras organizaciones sociales. En algunos países, como en los casos de Chile, Uruguay y Bolivia, había un importante desarrollo de nuevas organizaciones sociales en la última década, especialmente en el sector campesino, a las que los regímenes autoritarios también van afectando en su existencia y funcionamiento.

Un factor que no encontramos hoy en el Cono Sur en relación a los rasgos que tipificaron en lo político a los proyectos fascistas clásicos es la discriminación racial como política del Estado. Esto que fue característico en el caso alemán y que se concretó en las leyes de Nuremberg en 1935, constituyó un criterio impuesto por Hitler en sus dominantes relaciones con Mussolini en el caso italiano, materializándose en la legislación de discriminación de los judíos de 1938, acá no aparece como una política a nivel estatal, aunque ciertamente muchos de los grupos civiles que asesoran y están próximos a los conductores militares de las

experiencias argentina, chilena, boliviana y brasileña, tienen claramente definiciones e impulsan manifestaciones de tipo racista. El reciente proyecto de favorecer la colonización de territorio boliviano por 250 mil colonos blancos racistas de Sudáfrica y Rhodesia puede ser reconocido como una manifestación explícita de la fuerza potencial de estas tendencias. A nadie escapa que, de materializarse esta iniciativa, tendría un impacto profundo y de largo plazo en la situación política de toda América del Sur.

Podemos concluir con tres rasgos (de aquellos que mejor conocemos y que están suficientemente estudiados y descritos); anotaremos que en uno y otro caso se da también un máximo fortalecimiento de los aparatos represivos. No es necesario siquiera, pues hay bastantes estudios específicos, hacer comentarios sobre el papel que la DINA desempeña en Chile como columna vertebral del sistema chileno;⁶ o el tipo de prerrogativas con las que se mueve la DOPS brasileña u otras de las policías secretas o de los servicios de inteligencia militar en sus distintas ramas, que funcionan en la mayoría de los regímenes militares latinoamericanos.

Lo que sí es conveniente, sobre todo en relación con lo que decíamos al hablar del partido, es señalar que el inmenso fortalecimiento que los aparatos represivos están teniendo en las experiencias del Cono Sur, está estrechamente vinculado con la inexistencia de una organización política que actúe como órgano de dirección y de apoyo de estos modelos. Precisamente, en la medida en que los mandos militares deciden no tener el

6 A este respecto puede verse el trabajo "La DINA en Chile", aparecido como anexo del núm. 102 de "Chile Informativo", editado en México, que constituye la publicación más completa acerca de la coyuntura económica y política de este país.

respaldo de un partido de masas reaccionario y su nivel de determinación hacia una opción represiva se hace cada vez más nítida, eso también explica que los aparatos represivos hayan sido finalmente el lugar de inserción de muchos de los integrantes de grupos civiles, como Patria y Libertad en Chile, o algunos de los escuadrones de aniquilamiento como la Triple A en Argentina, o el Escuadrón de la Muerte en Brasil. Estos grupos estructurados en la fase previa al establecimiento de los nuevos regímenes, actuaron más tarde concertadamente en su interior para presionar hacia una solución y una línea más dura y reaccionaria.

Dos últimos rasgos en materia de proyecto político aproximan al fascismo clásico y a las nuevas experiencias latinoamericanas. Primero, la fusión completa de los aparatos ideológicos y administrativos del Estado, con un empleo bastante intensivo de todos los medios de comunicación social. Esto, que lo encontramos ya en las experiencias de entreguerras, aparece reiterado hoy en cada uno de los modelos políticos del Cono Sur de América Latina; no hay duda que la organización del Ministerio de Propaganda que manejó Goebbels en la Alemania nazi, sirve de punto de inspiración de las nuevas dictaduras. Esta influencia resulta clara de la revisión, incluso de las instrucciones y aun de los articulados, que rigen el funcionamiento de las actuales Direcciones de Comunicación Social de las Dictaduras de América del Sur y fijan los procedimientos para implementar la mayoría de sus actividades.

Finalmente hallamos la regimentación de la cultura, básicamente de la educación superior, y una especial proscripción del pensamiento crítico y de la ciencia que favorece el desarrollo de este tipo de pensamiento. No hay duda, en este renglón, que a los diversos tipos

de regímenes de excepción, el desarrollo de las ciencias sociales les es sumamente incómodo y constituye una de las más serias amenazas para su hegemonía y subsistencia. Esto explica que las migraciones forzadas de especialistas y científicos hayan sido tan numerosas en todos estos sistemas políticos. Es también seguro que, cuando los pueblos del Cono Sur pongan término a los actuales gobiernos, van a encontrar también el nivel de postración y deterioro del desarrollo científico que singularizó el final de las experiencias fascistas típicas y que hace que, incluso hoy día, los científicos políticos y sociales de Alemania Federal tengan que hacer el comentario de que la recuperación de ese período histórico ha sido lenta y extremadamente difícil y sus efectos negativos se hacen sentir todavía.

Estos son, buscando una confrontación de elementos básicos, los elementos que permiten una comparación entre el proyecto Fascista de entreguerra, y el tipo de régimen autoritario militar surgido en América Latina en la última década a partir del golpe de estado que derrocó al presidente João Goulart en Brasil a fines de marzo de 1964.

Creo, sin embargo, que cualquier análisis que apunte a los factores esenciales de las nuevas experiencias latinoamericanas, requiere tomar en consideración algunos de los que podríamos llamar rasgos definitorios de la coyuntura política de América Latina en el último tiempo, los que están condicionando el diseño y el funcionamiento de este nuevo modelo político militar de la región.

En esta perspectiva no pueden dejar de ser consignados en una presentación comparativa de las racionalidades de ambos tipos de proyectos dos elementos originales que ayudan también a diferenciar el proyecto

político que surge en América Latina, frente al de los fascismos clásicos.

Son ellos: el papel que desempeña la teoría de las relaciones internacionales del período de la guerra fría, por una parte, y la llamada Doctrina de Seguridad Nacional por la otra.

Ninguno de éstos son elementos autónomos o secundarios en la construcción ideológica de los militares. Se trata de criterios fundamentales y que se complementan entre sí, dentro de la lógica del razonamiento de las autoridades políticas de origen militar que gobiernan en América del Sur, hoy día.

En primer término, es claro que la teoría de las relaciones internacionales del período de la guerra fría, la contraposición en blanco y negro de los intereses de dos grandes bloques antagónicos de poder mundial el del mundo democrático y el del mundo comunista viene a llenar para los militares latinoamericanos un vacío de legitimidad (y por ende de actividad) que se estaba haciendo bastante profundo, en la medida que los conflictos nacionales estaban desapareciendo (al menos en su culminación propiamente bélica) en la región. Es preciso considerar también para apreciar esta influencia que la formación de todos los actuales mandos superiores de las Fuerzas Armadas de América del Sur se ha hecho, desde el término de la segunda guerra, precisamente en las academias de Estados Unidos y de la Zona del Canal en Panamá. Los generales Banzer, Pinochet, Geisel y Videla iniciaron su carrera de oficiales a comienzos de la década de los cincuenta cuando la doctrina del "borde del abismo" de Foster Dulles, punto de clímax de la guerra fría, estaba en total vigencia. Los militares latinoamericanos tuvieron la percepción de que esta nueva confrontación de fuerzas

entre el Este y el Oeste los situaba en el centro de la pugna principal de la época. Del conjunto de supuestos que gobiernan las relaciones internacionales del período de la guerra fría, los altos mandos militares extraerán algunas consecuencias importantes para desarrollar su propia acción profesional, así como para construir su proyecto de acción de Estado. En los años siguientes y fundamentalmente luego del advenimiento de la revolución cubana, asistimos a un esfuerzo por desarrollar las concepciones y Doctrinas de Seguridad Nacional que no son otra cosa que un intento de proyectar hacia el campo de la actividad propiamente profesional, el tipo de compromisos que implica para las Fuerzas Armadas de América Latina, el hecho de que ya no estemos viviendo en un mundo de paz, sino que estamos viviendo en un mundo en que —a juicio de ellos— se da una confrontación activa, permanente e indefinida en todos los campos, entre dos formas de vida, dos formas de civilización, opción frente a la cual declaran que ni ellos ni nuestros países pueden ser neutrales. El corolario natural de este enfoque es la necesidad de organizar toda la programación y desarrollo de las tareas militares y de la defensa nacional con una visión distinta de la tradicional, y asumir en este nuevo contexto, un enfrentamiento de fuerzas que pasa por el interior de todos y cada uno de los países de la tierra y que confiere a las fuerzas armadas un papel renovado y fundamental.

La Doctrina de Seguridad Nacional aparece entonces como una respuesta profesional, originada inicialmente en el Pentágono y en las academias militares de ese país. Estas doctrinas son difundidas luego en los centros de capacitación a los cuales acceden los oficiales latinoamericanos, como Fort Gullick, en la zona del

Canal y Fort Benning de la infantería de Marina, en Georgia, y más tarde se desarrollan en forma autónoma en los dos centros de mayor reflexión militar estratégica de América Latina que son Brasil y Argentina.

El estudio de los textos de la geopolítica y la seguridad nacional latinoamericanos podría dar lugar no sólo a una exposición sino a un seminario especial, probablemente muy rico y muy iluminador, para el conocimiento de los problemas que enfrentan los pueblos latinoamericanos en su lucha por recuperar la democracia y la libertad. Este esfuerzo de análisis resulta impostergable, máxime cuando por lo demás, ya se conoce un número suficiente de estos materiales, los que hoy incluso circulan para el consumo del gran público.

Una correcta valorización de estas nuevas visiones nos ayudará a comprender que no es ninguna coincidencia que varios de los principales estrategas de los ejércitos latinoamericanos de América del Sur hayan desempeñado el rol político tan destacado que hoy día tienen. El general chileno Augusto Pinochet, era uno de los principales especialistas en Geopolítica de la Academia de Guerra de su país. El principal asesor del actual presidente del Brasil, Ernesto Geisel, es el general Golbery do Couto e Silva, autor del principal texto moderno de geopolítica de Brasil. En la experiencia argentina en la década del sesenta, generales como Benjamín Rattenbach y Osiris Villegas, productores de buena parte del pensamiento de Seguridad Nacional argentino desempeñaron papeles políticos de alta significación.⁷

⁷ De los principales textos de geopolítica y estrategia de la Seguridad Nacional que circulan actualmente en forma amplia, conviene destacar: "Geopolítica de Brasil" de Golbery do Couto e Silva; "Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional y Guerra revo-

La Doctrina de Seguridad Nacional afirma ciertos criterios que son indispensables para la configuración del modelo político autoritario. En primer término, la idea de que los conceptos de seguridad y desarrollo están íntimamente ligados, pero que el concepto de desarrollo está subordinado al concepto de seguridad. De acuerdo a las expresiones del general Golbery do Couto e Silva de Brasil, autor de un texto de pública difusión reciente en aquel país, "el desarrollo interesa en cuanto proporciona los elementos constitutivos del poder nacional (...). El desarrollo es por tanto, un factor de potencia, y luego, el desarrollo es sólo un aspecto de la guerra total".⁸

El Estado, en consecuencia, es un haz de concentración de poderes dentro del cual el elemento Seguridad Nacional es el único ingrediente coordinador de las distintas funciones que se cumplen en su interior. De nuevo en las palabras de este geopolítico brasileño "la Seguridad Nacional es la función del poder nacional, fortalecido armónicamente en sus cuatro expresiones: poder político, poder económico, poder psicosocial y poder militar".⁹

"La seguridad reúne —expresa— en una sola fuerza y un solo factor los cuatro componentes del poder nacional, y son los cuatro juntos los que permiten realizar, la Seguridad Nacional".¹⁰

lucionaria comunista" del teniente general Osiris G. Villegas; "El sistema social militar" en la sociedad moderna y Sociología militar del teniente general Benjamín Rattenbach (los 4 últimos en Ed. Pleamar de Buenos Aires), y Geopolítica del general Augusto Pinochet (Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile).

8 Citado en el artículo "La doctrina de la seguridad nacional" de Joseph Comblin, aparecido en la revista Mensaje de Santiago de Chile, abril de 1976.

9 J. Comblin, artículo cit.

10 J. Comblin, artículo cit.

La doctrina de Seguridad Nacional, en consecuencia, pasa a ser un elemento técnico que engarza el conjunto de proyectos de índole político-económica y social, los que se implementan válidamente al interior de un Estado de estas características. Esta idea que es compartida, en forma absoluta, por el resto de los líderes militares de América del Sur, se liga, precisamente, con el tipo de retórica nacionalista que desarrollan los gobernantes militares actuales en el Cono Sur de América Latina.

Do Couto e Silva define a este respecto la actitud válida del "nuevo hombre latinoamericano" frente a su Estado Nacional: "ser nacionalista es reconocer como suprema lealtad la lealtad a la nación, de la que uno es una parte íntima, pero una parcela actuante y consciente. Ser nacionalista es sobreponer, por lo tanto, a cualquier otros intereses individuales o de facciones, o de grupos, a todas las ventajas regionalistas o parroquiales los verdaderos intereses de la nacionalidad. Ser nacionalista es estar dispuesto siempre a sacrificar cualquier doctrina, cualquier teoría, cualquier ideología, sentimientos, pasiones ideales, valores, cuando ellos aparecen nocivos, y de hecho incompatibles con la lealtad suprema que se debe dedicar sobre todo a la nación. El nacionalismo, por lo tanto, es, debe ser, y sólo puede ser —concluye— un fin en sí mismo, un fin último".¹¹

De esta manera existe un juego funcional entre los elementos que configuran la teoría internacional del período de la guerra fría (que divide a la humanidad en dos campos irreconciliables y a los hombres en dos lealtades también incompatibles, la lealtad al mundo

11 J. Comblin, artículo cit.

occidental y cristiano y a las "formas democráticas" o la lealtad al totalitarismo comunista) y la doctrina de la Seguridad Nacional que busca resolver en el interior de cada Estado en forma activa esta disputa. En ambos casos, no hay lugar para la conciliación ni para términos medios, y esto determina, a su vez, una concepción del desarrollo en que éste aparece subordinado, igual que el cumplimiento de las tareas políticas, al logro de ciertas finalidades militares, dando la clave para la comprensión de la racionalidad última del modelo autoritario de Seguridad Nacional del Cono Sur de América Latina

En esta perspectiva, los conceptos de "guerra interna", de "enemigo interior", de "conflicto permanente", de "fronteras ideológicas", son otros tantos hitos de un sola y misma concepción que anuda, jerarquizándolos del modo que hemos expuesto, los problemas de la Seguridad Nacional, con los problemas del desarrollo, del cambio social y del enfrentamiento de las estructuras sociales interiores de cada uno de nuestros países.

Por lo mismo, los nuevos modelos políticos de América Latina, recogen estas dos reflexiones básicas para su explicación. La teoría internacional de la guerra fría y la nueva Doctrina de la Seguridad Nacional aportan una serie de rasgos que van configurando como experiencias políticas originales y significativas a las que últimamente se instalan en el Cono Sur.

Basta con reseñarlos pues son bastante conocidos: la justificación de la subversión inicial y la toma del poder en nombre de la Seguridad Nacional; la auto-atribución por parte de las Fuerzas Armadas de la representación del conjunto de la nación; la sinonimación Fuerzas Armadas-Patria y el monopolio de lo

patriótico; el enfoque tecnocrático; el moralismo; la preocupación por el orden público interno; el simplismo de los diagnósticos y el mecanicismo de las soluciones, y en algunos casos (claramente en el chileno, con sus añoranzas portalianas) la añoranza por una edad de oro anterior, el período de la paz social, el período del orden, que está atrás en el tiempo, y hacia el cual es necesario volver haciendo retroceder la historia, logrando retrotraer la marcha de las cosas en el país a un período que se restaura.¹²

En la determinación detallada de los elementos originales, que se derivan de los rasgos señalados, así como de las claves que otorgan para abordar la modificación de la situación actual, hay un campo de trabajo muy definido para las direcciones políticas democráticas y revolucionarias de América Latina por un lado, y para los especialistas de las ciencias sociales por otro. En todo este esfuerzo hay un largo camino que recorrer.

Como conclusión de este inicial intento de análisis comparativo, me parece a mí que es posible señalar, que si bien los nuevos regímenes militares del Cono Sur de América Latina, reproducen muchos ingredientes de los regímenes fascistas del período de entreguerras, su racionalidad fundamental —y ésto es lo que convendría asumir— aparece como diferente. Es cierto que ambos tienen como propósito fundamental (tanto el fascismo como el modelo de Seguridad Nacional del Cono Sur de América Latina) extirpar en primer término, cualquier perspectiva socialista, y para ello desarticular a los partidos políticos populares, y a las organizaciones obreras. Sin embargo, mientras las experiencias políti-

12 El desarrollo de estos elementos puede encontrarse en "Nacionalismo y militarismo en América Latina", de L. A. Costa Pinto, México, Siglo XXI, 1975.

cas fascistas de entreguerras buscaron esencialmente la aplicación de una solución política de fuerza, implementada desde el Estado, que incluía la politización de las Fuerzas Armadas, y la búsqueda de su subordinación a las directivas del líder Fascista y del Partido Fascista, las fórmulas actualmente aplicadas en América del Sur, implican ante todo un intento de respuesta militar, en términos de guerra interna permanente, al desafío del proyecto socialista, que lleva a la subordinación de todos los restantes factores, incluidos los económicos y los políticos, al criterio de asegurar la victoria militar sobre las fuerzas del "extremismo y la subversión" —como se les denomina— y sus aliados.

Esta distinta racionalidad, política en un caso, militar en otro, es la que aconseja mirar, en mi concepto, al Estado con ideología de Seguridad Nacional del Cono Sur de América Latina, como una variable diferenciada de las otras formas que asume en el mundo contemporáneo el estado de excepción. Así se nos aparece como una forma diferente del fascismo, del bonapartismo, de las dictaduras militares modernas, o de las dictaduras de notables.¹³

Es importante destacar, en todo caso, para fines políticos más concretos, que cualquier distinción que emane de un análisis político realizado con una cierta precisión científica, no implica para nada el atribuir a los regímenes autoritarios latinoamericanos un carácter menos brutal que el de los fascismos clásicos. Simplemente apunta a desentrañar con mayor precisión los criterios y las pautas de funcionamiento que derivan de una racionalidad política y estatal diferente,

13 La caracterización de cada una de estas formas puede verse en "Les dictatures européennes", de André y Francine Demichel, París, Presses Universitaires de France, 1975.

lo cual es fundamental de tener en cuenta al decidir las acciones, tanto para su debilitamiento como para su derrocamiento; por lo mismo, las conclusiones expuestas tampoco afectan a la posibilidad de darle a estos regímenes el tratamiento público de "fascistas", si convencionalmente, por razones de pedagogía política así se resolviera.

En último término, estamos seguros que lo menos importante para combatir a los regímenes autoritarios del Cono Sur de América Latina es la denominación que se les da; lo que interesa de veras es saber cómo funcionan, qué intereses sirven y cómo pueden ser derrotados para siempre.

El autoritarismo en Centroamérica: una mirada desde la historia y la teoría política latinoamericana

La Teoría Política y los Regímenes Autoritarios en América Latina.

En la última década, el pensamiento social de América Latina ha acabado por hacerse cargo de uno de los fenómenos políticos que influyen más directamente en la historia y el porvenir de la región: la existencia generalizada de dictaduras políticas. Numerosas contribuciones, entre las que sobresalen las de Guillermo O'Donnell,¹ Alain Rouquié,² L. A. Costa Pinto,³

- 1 '1966-1973: el Estado burocrático autoritario, derrotas, triunfos y crisis', Guillermo O'Donnell, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982 y "Dependencia y Autonomía", Guillermo O'Donnell y Delfina Link, Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1973.
- 2 "El Estado militar en América Latina", Alain Rouquié, Editorial Siglo XXI, México, 1984.
- 3 L.A. Costa Pinto es autor de un libro pequeño pero precursor sobre el tema: "Nacionalismo y militarismo", Editorial Siglo XXI, México, 1971 que ha influido considerablemente en toda la discusión posterior sobre el tema

Joseph Comblin,⁴ Manuel Antonio Garretón⁵ y Alfred Stepan⁶ se han ocupado de desentrañar las raíces y la lógica de los más recientes experimentos autoritarios registrados en los países del área.

Este conjunto de trabajos ha traído un considerable progreso en el conocimiento del tema y ha permitido abrir una perspectiva latinoamericana en un asunto que durante décadas fue visto en base a los esquemas teóricos producidos en otras regiones, principalmente en Europa Occidental, en donde el autoritarismo se presentaba en un contexto económico y social muy distinto. De esta manera, ante la aparición de nuevos Estados de excepción latinoamericanos ya no se recurre, como antes, al ejercicio mecánico de encuadrarlos en algunas de las categorías características de algunos países capitalistas desarrollados, decidiendo si se trata de un modelo político "bonapartista", de uno "fascista" o de una "dictadura de notables". Ahora entendemos mejor que todo régimen de fuerza presenta ciertas características comunes como lo adelantara Franz Neuman en su opúsculo sobre "Notas para el estudio de una teoría de las dictaduras",⁷ publicado a comienzos de los años

4 "El poder militar en América Latina", Joseph Comblin, Ediciones Sígueme, Salamanca, España, 1978.

5 "El proceso político chileno", Manuel Antonio Garretón, Ed. FLACSO, Santiago, 1983 y "Dictaduras y democratización", Manuel Antonio Garretón, Ed. FLACSO, Santiago, 1984.

6 Alfred Stepan, Profesor e Investigador en el área de estudios latinoamericanos de la Universidad de Yale, ha trabajado exhaustivamente en el estudio de dos casos nacionales muy relevantes para entender la participación militar en el continente: Brasil y Perú. "Brasil, los militares y la política", Ed. Amorrortu Buenos Aires, 1972 y "The state and Society (Perú, incomparative perspectives)", Princeton University Press, New Jersey, 1978.

7 "El Estado democrático y el Estado autoritario", Franz Neumann Editorial Paidós, Buenos Aires, 1968.

50, muy poco antes de su muerte. Pero sabemos también que, para la verdadera comprensión de un modelo político autoritario, lo que más importa es el conocimiento de la racionalidad específica de dicho fenómeno, lo que implica establecer las condiciones históricas en que éste se produce, su vinculación con los conflictos sociales existentes en la sociedad en que emerge, así como las vinculaciones entre el grado de desarrollo económico y el carácter de los procesos productivos con la necesidad específica de una reorganización de la dominación política fundada en el empleo abierto de la coacción estatal.

En la comprensión de todos estos aspectos, podemos encontrar en los trabajos aparecidos desde fines de los años 60, notables progresos. Sin embargo, debemos señalar que los libros y artículos más lúcidos se han referido principalmente a las nuevas dictaduras militares de América del Sur, desarrolladas a partir de la aparición del régimen brasileño instaurado en marzo de 1964 y que ha sido "perfeccionado" en sus prolongaciones argentina, chilena, boliviana o uruguaya. Ellas son las que han originado marcos teóricos como el del "Estado Burocrático Autoritario".⁸ el "Estado Militar",⁹ o el "Estado basado en la Ideología de Seguridad Nacional".¹⁰

En cambio, una atención mucho menor ha sido presentada a las experiencias numéricamente más abundantes e históricamente más antiguas que no pueden ser encuadradas dentro de esta nueva racionalidad autoritaria y que se encuentran en América Central, en los países del Caribe y en el resto de América del Sur.

8 O'Donnell op. cit.

9 Rouquié op. cit.

10 Garretón, op. cit.

Por ello, si intentamos una visión de conjunto del fenómeno autoritario latinoamericano, podríamos decir que en la realidad contemporánea de la región coexisten dos modalidades básicas de regímenes autoritarios que podemos denominar, para simplificar, como la "Dictadura Militar Tradicional" y las "Dictaduras Militares Nuevas"¹¹ (es decir, aquellas que se fundan en la Doctrina de Seguridad Nacional y en las teorías de la contrainsurgencia). Parece nítido también que entre uno y otro modelo hay una cierta secuencia histórica en la medida que corresponden a sociedades diferenciadas en cuanto a su grado de modernismo y a su estructura social.

Interesa, entonces, centrar nuestra mirada en lo que ha ocurrido en América Central, intentando situar su experiencia histórica concreta dentro de este conjunto de referencias y claves políticas del autoritarismo, tal como él se registra en los cinco países que forman parte de esta subregión: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.¹²

11 Sobre la caracterización básica de ambas modalidades autoritarias nos remitimos al trabajo "Las nuevas dictaduras militares en América Latina", que se publica en este mismo libro.

12 Sobre el proceso político más reciente en América Central se pueden encontrar los principales antecedentes en los siguientes libros: "Centroamérica; futuro y opciones", Olga Péllicer y Richard Fagen, Fondo de Cultura Económica, México, 1983; "Centroamérica en crisis", Rosario Green, et. al., el Colegio de México, 1980; "Trouble in our backyard: Central America and United States in the eighties", Martin Diskin Editor, Pantheon books, New York, 1983; "La política de Reagan y la crisis centroamericana", Luis Maira, editor, EDUCA, San José, 1982 y "Centroamérica: crisis y política internacional", varios autores, editorial Siglo XXI, México, 1982.

Las claves del autoritarismo centroamericano.

Una primera y evidente dificultad que se nos presenta para el análisis de los regímenes de fuerza en América Central es que frente a ellos no podemos utilizar los enfoques y las conclusiones de la literatura referida a las nuevas dictaduras militares. Ello porque en Centroamérica no se encuentran estas dictaduras basadas en las concepciones de Seguridad Nacional como las que hallamos en Brasil, Argentina o Chile.

Pero, por otro lado, tampoco se puede afirmar que en los países centroamericanos hayan subsistido lisa y llanamente, las dictaduras militares tradicionales de las que encontramos una tan notable caracterización en la novela de Miguel Ángel Asturias "El Señor Presidente" en donde, el mayor novelista producido por la subregión, adapta en el terreno de la literatura algunas crónicas de la vida cotidiana de Guatemala durante las primeras décadas de este siglo bajo el régimen autoritario de Manuel Cabrera Estrada.

Nuestra hipótesis central es que los regímenes autoritarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala que, en la última década, han entrado en crisis representan (junto al patriarcal régimen paraguayo del general. Alfredo Stroessner) la última expresión de aquellos autoritarismos transicionales aparecidos en los años 30 y cuya funcionalidad se fue extinguiendo, a medida que cambiaban las condiciones imperantes en la sociedad latinoamericana y se hacía más vigoroso el avance modernizante. Esto explica las dificultades de recomposición interna que estos gobiernos enfrentan y permite entender, al mismo tiempo, la amplitud que ha alcanzado la crisis política en esos países.

Sin embargo, para hacer posible una comprensión

apropiada de este fenómeno se hace necesario situar nuestras consideraciones a partir de la evolución política del conjunto de los países del istmo. Para ello tomaremos los elementos gruesos de la historia independiente de los países de la subregión, buscando poner de relieve los trazos comunes y avanzando algunas hipótesis sobre las situaciones excepcionales y sus causas.

A la luz de esta mirada América Central aparece, en primer término, como una nación fragmentada en donde los particularismos y los intereses locales frustraron el proyecto de un Estado común. La mayoría de los análisis más serios acerca de la situación económica y social de esta área concluyen subrayando que sin una integración y una complementación efectiva de sus economías no hay solución para los actuales problemas del subdesarrollo y sus secuelas. Esto explica también por qué en el último siglo y medio se han realizado a partir de la iniciativa de diversos países más de 20 intentos formales, de diversos tipos, para aproximar las estructuras políticas y productivas de estas cinco naciones.

Lo concreto es que los países centroamericanos alcanzaron su independencia sin un proceso de lucha librado en su propio territorio. La declaración de ésta, primero, fue un acto de resonancia del Grito de Dolores y de la lucha de las fuerzas patrióticas encabezadas por Hidalgo y Morelos en México e, igual cosa, ocurrió con la consolidación de este proceso y la formación de la Federación Centroamericana en 1823-24. La Corona española siempre entendió que el centro de sus intereses "geopolíticos" en el Virreynato de Nueva España estaba formado por el rico territorio mexicano de tal manera que las tierras situadas al sur de la cintu-

ra de Tehuantepec eran vistas como una zona marginal y menos importante por su escasa población y por la ausencia de minerales valiosos. Por ello también las operaciones militares españolas se concentraron en el suelo mexicano y allí se decidió la suerte de todo el Virreynato.

El difícil desafío por consolidar la propuesta de una patria común, hecha por Francisco de Morazán halló sus mayores obstáculos precisamente en las carencias que, al momento de la independencia, aparecían como la peor herencia del período colonial: la falta de una tradición de autogobierno político, los escasos recursos económicos para sostener al nuevo Estado y la ausencia de vínculos efectivos con el exterior que permitieran ampliar las ventajas de la nueva nación, mediante una inserción más dinámica en el sistema internacional. Por ello, cuando en 1838 se rompió la Federación, se produjo la creación de facto de las repúblicas actuales sin que tal fragmentación haya podido ser superada hasta ahora, a pesar de la clara voluntad política de los estadistas e intelectuales más lúcidos que ha tenido Centroamérica.

Las dificultades de la centralización política en los nuevos países fueron considerables por el peso de las diversas oligarquías lugareñas en los centros urbanos más importantes. Los conflictos entre las oligarquías locales de Granada y León en Nicaragua o entre Cartago y Heredia en Costa Rica fueron, por largo tiempo, las verdaderas claves del poder político nacional; favorecieron no poco las tendencias al desarrollo de los fenómenos autoritarios, y obstaculizaron la existencia de sistemas políticos democráticos puesto que fomentaron los caudillismos y los proyectos políticos individualistas.

Las décadas siguientes a la fragmentación de la Federación Centroamericana estuvieron dominadas por el predominio de las corrientes conservadoras. Pero el poder político no estuvo en manos de verdaderos partidos políticos, de acuerdo al alcance actual de este concepto, sino de círculos que respaldaban el liderazgo de algún dirigente tradicional con fuertes conexiones político-militares. La figura más característica de este período es el dictador guatemalteco Rafael Carrera quien ejercitara un largo gobierno que cubrió hasta mediados de los años 60, llegando a proclamarse "Presidente vitalicio" en 1854.

Un elemento que probó en esa etapa tener gran importancia en la configuración de las opciones políticas y, particularmente, en la delimitación de las tendencias autoritarias, fue el perfil de la actividad productiva y en particular de las formas de la propiedad agraria. Una de las claves de la historia económica subregional que puede ayudar a explicar las particularidades democráticas de Costa Rica es, como lo ha señalado bien Halperin Donghi,¹³ el hecho de que ese país haya incursionado más tempranamente en la producción cafetalera destinada a la exportación, superando las restricciones de las exportaciones tradicionales y provocando un proceso de división de las grandes haciendas que generó una capa de medianos propietarios en la meseta central del país donde están situadas las principales ciudades, y que pronto repercutió en una participación más activa en los asuntos políticos de sectores que iban más allá de los grupos oligárquicos. En los demás casos, los intereses fragmentarios de

13 "Historia contemporánea de América Latina", Tulio Halperin Donghi, Alianza Editorial, Madrid, 1969.

una economía centrífuga no hicieron más que reforzar la dispersión en toda América Central.

En la segunda mitad del siglo XIX el hito determinante de la historia política centroamericana fue la declinación de la hegemonía conservadora y la realización de un proceso de reforma liberal, a comienzos de los años 70. Este se inició también en Guatemala y tuvo como su figura principal al Presidente Justo Rufino Barrios. Rápidamente se propagó a El Salvador, Honduras y Nicaragua generando las principales expectativas de una democratización y ampliación de los circuitos y procesos políticos. Pero el rápido fracaso de esta tentativa y la vuelta a condiciones de un autoritarismo factual es, entonces, otra de las claves de la evolución política de América Central. Nunca como a partir de 1870 existieron en estos países condiciones tan favorables como para haber avanzado al proclamado modelo de la democracia liberal, inspirada en la tradición política de EE.UU. (En un momento en que el gobierno de Washington ya ejercía una gran influencia en el área que, por aquellos años, iba acompañada de un reconocimiento y legitimidad mucho mayores que los que podríamos encontrar hoy día). En la práctica el fracaso de la reforma liberal significó una consolidación de la gran propiedad rural en países como Nicaragua y El Salvador; en este último, el inicio de la producción de café, luego de las leyes de asignación de tierras de principios de los años 80, representó el afianzamiento del sistema de latifundios y del casi mítico poder de las catorce familias por cuyas manos ha pasado, en el siglo siguiente, el control del país.

Fue tras la desaparición del proyecto de construcción de repúblicas liberales cuando alcanzó su plena culminación el modelo de la dictadura militar tradi-

cional. En las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del actual los gobiernos de fuerza superan en cantidad y en número de años de ejercicio del poder político a los gobiernos emanados de la voluntad ciudadana y estos últimos tienen, cuando llegan a existir, una existencia siempre precaria y se ven amenazados por pronunciamientos militares (o "madrugonazos" como gráficamente los denominan las crónicas políticas de la época) apenas se les ocurre plantear cualquier medida que tienda a la realización de alguna reforma social o a la ampliación de las capas dirigentes, por tímidos que estos planes aparecieran.

A esas alturas, dentro de las tendencias generales anotadas, estaban ya perfectamente claras las peculiaridades nacionales de los procesos políticos. En un cuadro caracterizado por la tendencia a la inestabilidad política y al uso de la violencia, en Guatemala los regímenes de fuerza llegan a tener una gran duración, como ocurriera con los casos ya señalados de Carrera 1838-1865 y Cabrera Estrada quien se mantuvo en el cargo entre 1898 y 1920. En Nicaragua, José Santos Zelaya, jefe de las Fuerzas liberales llega al poder tras un golpe de estado en 1893 y permanece en él hasta 1910. Entretanto en El Salvador y Honduras proliferan los golpes de estado, pero los gobiernos resultantes permanecen por lapsos más breves en el poder. En cualquier caso, también allí los gobiernos originados en el consenso y en la expresión popular son la excepción y en las historias nacionales se les recuerda de un modo especial como ocurriera en El Salvador con los presidentes Pedro José Escalón (elegido en 1903), Manuel Araujo 1911 y Arturo Araujo 1930 y en Nicaragua con el gobierno del presidente Benjamín Zeledón 1911, cuyo ascenso al poder con la perspectiva de

aplicar un programa de reformas liberales originó la intervención norteamericana en ese país.

A partir del inicio de su expansión imperial, con ocasión de la guerra contra España de 1898, EE.UU. pasará a ser un factor determinante en las perspectivas de democratización en América Central. Especialmente a partir de la proclamación del Corolario Roosevelt en 1904 que afirma explícitamente el derecho de EE.UU. para condicionar la naturaleza de los regímenes políticos latinoamericanos, en función de la salvaguarda de sus intereses nacionales se desarrolla en toda la cuenca del Caribe una política de intervención. La expresión orgánica de ésta es el régimen de protectorados del cual Nicaragua será una expresión exacta durante la segunda y tercera décadas del presente siglo.

Este modelo incluye la ocupación del país a partir del desembarco de marines norteamericanos, el establecimiento de gobiernos dirigidos por nacionales del país intervenido, que cuenten con el visto bueno de las autoridades norteamericanas; el control directo de las principales agencias públicas del área económica, principalmente los servicios de Aduana: Impuestos Internos, Tesorería, etc., la realización de programas de modernización y racionalización de la administración pública y la tentativa de dar un carácter más profesional a las FF.AA. vinculándolas al programa de formación y a las doctrinas militares aplicadas en EE. UU. En este último rubro durante los protectorados se adoptó el modelo de Guardias Nacionales, inspirado en los organismos encargados de velar por el orden público en los Estados de la Unión Americana, particularmente en los del sur, en donde desde el término de la guerra civil existía una política de control preventivo para evitar conductas disruptivas por parte de los

grupos de color que se hallaban afectados por una política factual de discriminación racial no obstante la sanción de las enmiendas 13, 14 y 15 de la constitución norteamericana, que les reconocían igualdad de derechos.

En la práctica, el período de ocupación norteamericana en países como República Dominicana, y Nicaragua generó una nueva estructura militar muy funcional al reforzamiento de las tendencias autoritarias. En esta etapa se gestaron algunas de las dictaduras más prolongadas que se han conocido en el continente como las de Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza quienes llegaron al poder siendo directores de la Guardia Nacional de sus respectivos países.

El efecto entrecruzado de estos factores políticos, con los cambios en la base estructural que precipitó el impacto de la crisis económica de 1929 sobre la subregión centroamericana, determinó el inicio de la etapa más importante de los autoritarismos en el área. Esta se caracteriza por la homologación de los países del istmo bajo gobiernos de fuerza (sólo Costa Rica constituirá, una vez más, la excepción), por el carácter más estructurado de estas dictaduras y por la prolongación y efectos perdurables de estos regímenes. En esta etapa se hace también más científico y sistemático el empleo de la represión contra los disidentes y se empiezan a adoptar ciertas formas políticas aparentemente democráticas sobre cuyos equívocos efectos nos preocuparemos en la próxima sección de este trabajo.

Los gobiernos de Rafael Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carias en Honduras y Anastasio Somoza en Nicaragua, son la expresión concreta en esta etapa.

Con excepción de este último cumplen un ciclo aproximado de ejercicio de poder de una década y media que se verá interrumpido por las repercusiones democráticas que genera en toda América Latina la derrota de los regímenes fascistas al concluir la Segunda Guerra Mundial. Es importante anotar que estas dictaduras surgieron casi coetáneamente con la llegada al poder del Presidente Franklin Delano Roosevelt y con la proclamación de la Política del Buen Vecino, uno de cuyos fundamentos era el apoyo y estímulo a la creación de democracias, inspiradas en el modelo norteamericano en los países de América Latina, así como el fin de la intervención militar directa de EE.UU. en la región. En América Central se aplicó el último de estos criterios, pero no el primero. Asistimos al fin del régimen de protectorados, pero al mismo tiempo, invocando consideraciones relativas al interés nacional estadounidense, el Secretario de Estado Sumner Welles delineó una política de respaldo a los dictadores, a cambio del apoyo de éstos a las directrices más generales de la estrategia internacional de Washington. Se vio así la contradicción de que el mismo gobierno de EE.UU. de Roosevelt que firmó la Carta del Atlántico y entró a la guerra en Europa "en defensa de los principios democráticos", facilitó el desarrollo de la oleada más sistemática de regímenes autoritarios que ha existido en Centroamérica.

Lo concreto es que en esta etapa se consolidan los rasgos y la racionalidad de los regímenes autoritarios que han predominado en dicha área durante los últimos 50 años. En esta época aumentan significativamente los intereses directos de EE.UU. y se registra un crecimiento notable de las inversiones, principalmente en los negocios agro-industriales en donde

sobresale el peso de la ya legendaria United Fruit Company. Se registra también una nítida tendencia al crecimiento de la actividad financiera la que es asumida en conjunto por firmas norteamericanas y grupos de poder nacionales. Se asiste al inicio de los primeros programas industriales, los que aunque no lleguen a presentar una envergadura considerable, permiten el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores y de los primeros partidos políticos de izquierda.

La característica fundamental de estos regímenes que, por lo demás constituye la base de su estructura de poder, es la capacidad y versatilidad de los círculos oligárquicos que los controlan. Estos grupos de poder originados en el sector rural son capaces de extender sus intereses a las nuevas actividades urbanas y de realizar una doble y complementaria política de alianzas: de un lado, se asocian con los intereses privados norteamericanos radicados en el país, quienes les aseguran el apoyo del gobierno de EE.UU. y por otro, con las cúpulas militares domésticas con las que van entrelazando acciones e intereses.

Este tipo de regímenes autoritarios, entonces, está ligado a dos requisitos que al modificarse originan la desestabilización de las dictaduras y el inicio de la crisis política que hoy vivimos: **primero**, la persistencia del equilibrio entre intereses y actividad productiva entre los sectores rural y urbano, propio de dicha etapa y, **segundo**, la mantención de un grado de subordinación (o competencia regulada) entre los círculos oligárquicos y el mando militar.

El primer elemento es fundamental, porque la viabilidad de un gobierno autoritario de esta clase, está ligada a una precaria organización de los sectores sociales populares. Esto era perfectamente posible

dentro de una estructura social dominada por la hacienda, aún cuando ésta se estructure de acuerdo a las pautas que hoy denominamos *agribusiness*, pero deja de serlo en un contexto de extensión y diversificación de las actividades económicas urbanas que generan nuevas redes de solidaridad y organización entre los habitantes de las principales ciudades. Así, como incluso lo han comprendido bien algunos de los intelectuales neoconservadores que han asesorado en este tema al Presidente Reagan, como la embajadora Jeanne Kirkpatrick,¹⁴ era inevitable que se produjera la tendencia al debilitamiento de los gobiernos autoritarios en América Central cuando se avanzara más en las tendencias a la modernización y la urbanización.

El segundo factor de equilibrio, que igualmente probó ser fundamental para la subsistencia de estas dictaduras, era la mantención de la división de funciones entre las élites civil y militar. Las primeras tenían la misión de conservar el control efectivo de la actividad productiva, en sus diversos sectores, mientras la segunda debía mantenerse como parte del aparato estatal, cumpliendo las funciones de administración de las actividades de defensa y de seguridad. Por lo mismo, el contexto de estabilidad tenía que comenzar a romperse si los sectores militares decidían subrogar a los círculos oligárquicos en el manejo de los negocios y empresas, aspirando a ser ellos mismos el núcleo hegemónico de una burguesía alternativa, en base a aprovechar las ventajas que les proporcionaba el control del Estado a cuyo amparo podían impulsar las actividades vinculadas al quehacer de su "acumulación originaria".¹⁵

14 "Dictadura y contradicción", Jeanne Kirkpatrick, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1983.

15 Este fenómeno que se presentó en forma perturbadoramente clara en

Esto último fue exactamente lo que sucedió, desde mediados de los años 60 en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. El control que la familia Somoza, asociada con altos dirigentes de la Guardia Nacional comenzó a ejercer en Nicaragua sobre todo tipo de actividades y, especialmente las exigencias de "asociación" en los negocios, que comenzó a hacer más exitosos a casi todos los empresarios, acabó por incubar una de las mayores contradicciones que sepultó al régimen dinástico de ese país. Especialmente, a partir del terremoto de 1972, los representantes del sector privado nicaragüense comenzaron a ver a los titulares de la dictadura y a su círculo más íntimo como el origen de una competencia desleal, primero, y como una franca amenaza, después, para el desarrollo de la libre empresa.

Lo propio ocurrió en Guatemala y El Salvador. Especialmente en este primer país, los militares organizaron desde principios de los años 70, sus propios negocios, los que han ido creciendo debido a las grandes ventajas que les otorga el control del poder político. En El Salvador, aunque su presencia ha sido menos significativa a la cabeza de las empresas de tamaño importante, se encuentra también a los militares en una

Guatemala arranca del proceso de desestabilización del régimen nacionalista del coronel Jacobo Arbenz en 1954. A partir de allí las Fuerzas Armadas guatemaltecas desempeñaron un papel central en la vida de ese país. Sin embargo, desde comienzos de los setenta, extendieron su actividad al campo de los negocios privados. Muchos altos oficiales pasaron a desempeñar una activa posición empresarial. Sobre los orígenes de este proceso y la participación norteamericana en él puede verse el libro de Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer "Fruta amarga", Editorial Siglo XXI, México, 1983; para comprender el período más reciente resultan excelentes el trabajo de Piero Gleijeses "Guatemala; crisis y respuesta", en Péllicer y Fagen, op. cit., p. 113 y siguientes y "Guatemala", Susanne Jonas y Davis Tobis (compiladores), Ed. Siglo XXI, México, 1975.

posición económica crecientemente ascendente y ésto tiende a traducirse en no pocas contradicciones y en la búsqueda de mayor autonomía política de éstos, respecto de los grupos oligárquicos más tradicionales del país.

La historia política de las décadas recientes en aquellos países centroamericanos que hoy enfrentan mayores conmociones, ha sido así la de un debilitamiento progresivo en la capacidad de hegemonía que puede ejercer el núcleo oligárquico militar que controla el Estado, debido tanto a una progresiva fractura del bloque de poder como al surgimiento de nuevos actores sociales, capaces de hacer más efectiva la exigencia democrática y cuyos intereses resultaron ser más contradictorios e irreconciliables con los de los titulares del poder.

A partir del desplome de la oleada de dictaduras militares iniciadas en los años 30, se ha asistido frecuentemente, desde 1945, a numerosas tentativas de aperturas políticas y ensayos democráticos. Debido a la mantención de un cierto poder de veto a los proyectos de democratización por parte de los grupos de poder, que han sido capaces de unir esfuerzos en esta dirección, a pesar que los desacuerdos entre ellos se profundizaron en otros campos, se pudo impedir que prosperaran experiencias de cambio político "razonable". Esto contuvo durante varias décadas un relevo de las élites tradicionales por grupos más modernos del centro político, ya fuera bajo la forma de asociación con éstos o permitiéndoles un ejercicio exclusivo del gobierno, a cambio de un reconocimiento del principio de alternación en el poder, lo que les habría dado a los grupos de derecha una participación significativa en el juego político.

La frustración de todas las tentativas de democratización fue, sin embargo, acompañada en Centroamérica de un crecimiento económico que complicó todavía más las cosas. Como se advierte al revisar los informes económicos elaborados por CEPAL durante la década de los 60 y la primera parte de los 70, la subregión centroamericana experimentó tasas de crecimiento de PNB del orden de 5 al 6°/o anual, en forma estable. Y como lo verifican todos los estudios de política comparada, sobre regímenes autoritarios, los períodos de dinamismo y expansión económica son poco propicios para el inicio de aperturas políticas, pues tienden a aumentar la legitimidad de quienes detentan el gobierno y favorecen el comportamiento individualista de las personas en la sociedad.

En los países centroamericanos este fenómeno se enredó durante esta etapa, teniendo en cuenta la característica central que presentó el proceso de desarrollo económico. Se trató de un desarrollo esencialmente concentrador que ensanchó las diferencias existentes entre los grupos más ricos y los más pobres en cada país, y que reforzó las conexiones transnacionales de los círculos domésticos de negocios, haciendo a su vez, más intolerable la situación de los grupos más postergados. De ahí que cuando se precipitó la crisis del área como consecuencia del impacto de la fuerte recesión de 1974-75 y de la cuadruplicación de los precios del petróleo por la OPEP, que afectó dramáticamente a todos estos países que no son productores de energéticos, las condiciones para el estallido de una crisis revolucionaria no podían ser mayores.

De este modo, el recuento de todo el período que va desde la conclusión del segundo conflicto mundial hasta la crisis económica capitalista de los años 70 deja

una clara conclusión: mientras en el ámbito económico hubo cambios significativos que tuvieron un impacto perverso en la estructura social, en el campo político, se jugó la carta de la sobrevivencia forzada de regímenes políticos autoritarios que aparecían nítidamente agotados. Las diferentes propuestas de reformas graduales fueron descartadas en favor de una apuesta de los conductores autoritarios en favor de la prolongación de los gobiernos que controlaban, a cualquier costo.

Por ello, aunque resulte paradójal, en los países de Centroamérica no se llegaron a implantar las nuevas dictaduras militares que encontramos en América del Sur, no porque no hicieran falta objetivamente a la luz de una planeación política fundada en la racionalidad de la compulsión, sino porque los propios círculos militares y las oligarquías que administraban el Estado de excepción tradicional no advirtieron el avanzado grado de erosión de éste y el riesgo de desplome que evidentemente existía. Cuando, a mediados de la década del 70, explotó la crisis política en Nicaragua, esos signos también fueron interpretados descuidadamente hasta el momento mismo en que el colapso de Somoza, ya refugiado en su *bunker* se hizo evidente.

Esto hace que, en los años ochenta, las alternativas de recomposición del modelo autoritario en Centroamérica sean muy escasas. Cuando se haga el balance de este período en la historia política de la subregión, con una mayor perspectiva y profundidad de la que hoy tenemos, la enseñanza más importante que se extraiga probablemente sea la que no es posible prolongar, a punta de pura voluntad política, regímenes autoritarios que ya han cumplido un ciclo y se encuentran exhaustos.

El peso de los factores históricos en la búsqueda de una solución democrática a la crisis centroamericana.

El estallido de la guerra civil en Nicaragua atrajo, a partir de 1977, atención internacional creciente sobre América Central.¹⁶ La ampliación de los conflictos a la mayoría de los países del área, a partir del triunfo de los sandinistas y del derrocamiento del general Carlos Humberto Romero en El Salvador, en 1979, determinaron una internacionalización muy acentuada de los diferentes procesos políticos del istmo centroamericano. Los principales actores internacionales se interesaron entonces, súbitamente, por estos países cuya historia y evolución política no conocían bien y a los que por muchos años habían prestado escasa atención. En un corto tiempo EE.UU. encuadró la crisis en un esquema estratégico, ligado directamente a la confrontación Este-Oeste,¹⁷ mientras las fuerzas políticas de Europa Occidental¹⁸ y los países del grupo de Contadora¹⁹ prestaron más atención a los fenómenos inter-

16 Sobre el desarrollo del proceso nicaragüense se puede consultar el libro de Lucrecis Lozano "De Sandino al triunfo de la revolución", Ed. Siglo XXI, México, 1985; también los trabajos "Revolution and Crisis in Nicaragua", de Richard Fagen en Diskin op. cit. p. 93 y siguientes.

17 Un texto clásico para comprender el enfoque Este-Oeste de Estados Unidos que, además, ha servido de directo antecedente a la política exterior de la administración Reagan y al surgimiento de la llamada "Segunda Guerra Fría" es el libro de Norman Podhoretz "The present danger", Simón and Shuster, New York, 1980.

18 "La Internacional Socialista y América Latina", Felicity Williams, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1984.

19 Sobre los orígenes y planes del grupo Contadora puede verse mi artículo "El Grupo de Contadora y la Paz en Centroamérica", incluido en "Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis", Heroldo Muñoz, compilador, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos

nos. En tanto que el primer esquema, dominado por la lógica militar, imaginaba el desenlace de la crisis como una victoria completa de las fuerzas democráticas sobre las del comunismo, el segundo imaginaba una conclusión de los conflictos, basado en la negociación y el logro de un consenso político entre los grupos que representan a la mayoría de la nación. Este desacuerdo, no cabe duda, ha representado un obstáculo adicional para la obtención de una salida a los problemas centroamericanos, pero ésto no debe llevarnos a lanzar sombras sobre el núcleo principal de las dificultades que tienen que ver con las características que acompañan al agotamiento de los modelos políticos autoritarios, tan prolongadamente implantados en América Central. Pensamos que el mayor interés de un ejercicio que ligue la comprensión de los diversos tipos de dictaduras existentes en América Latina, a la luz de los criterios de la teoría política, con un examen histórico de la foma en que han ido cambiando las prácticas autoritarias de los países centroamericanos, actualmente más convulsionados, es que nos permite apreciar mejor algunas "dificultades de arrastre" que hoy obstaculizan el logro de una solución política. Por lo mismo intentaremos esbozar en esta sección, un recuento de las principales.

1. El abuso de las apariencias democráticas en las dictaduras centroamericanas.

En las dictaduras militares tradicionales hubo un evi-

Aires, 1985, p. 375 y sgtes. Una completa selección de todos los documentos de trabajo del grupo se puede encontrar en "La guerra encubierta contra Contadora" Stela Calloni y Rafael Criban, Centro de Capacitación Social, Panamá, 1983.

dente descuido por los problemas de legitimidad e incluso por las apariencias. Los viejos dictadores se limitaban a ejercer el poder como señores de una hacienda ampliada a la escala de todo un país. Por lo mismo, normalmente no tenían un mayor interés por los procedimientos que pudieran dar un fundamento más válido, en lo formal, al control del gobierno. Con el correr del tiempo, estos problemas pasaron a ser más importantes. Un elemento que influyó en este fenómeno fue la propia consolidación del Sistema Interamericano,²⁰ en cuyos documentos iniciales se consagraba la adhesión de todos los miembros a "los principios y mecanismos de la democracia representativa". Otro factor importante fue la presión que comenzó a realizar el gobierno de Washington, que debía dar respuestas apropiadas a las interpelaciones, que le hacían los miembros más liberales del Congreso, con el propósito de conseguir un distanciamiento entre EE.UU. y las dictaduras de América Latina.

Lo cierto es que a partir de la gran oleada dictatorial de 1930 los regímenes de fuerza de Guatemala, Nicaragua y El Salvador comienzan a revestirse, cada vez más, de una "liturgia democrática" que en algunos casos llega a crear situaciones equívocas. Se establecen elecciones mejor reguladas para sancionar los mandatos de los dictadores, se fijan plazos periódicos para el ejercicio del poder (que luego se van prolongando según las conveniencias), se permite el funcionamiento de algunos partidos políticos opositores y se concede incluso algún espacio público a algunos líderes de oposición. Se avanza incluso hasta establecer asambleas

20 "El sistema interamericano", G. Connell Smith, Fondo de Cultura Económica, México, 1972.

legislativas con una composición pluripartidista limitada y se institucionalizan las entidades municipales.

Detrás de estas exterioridades subsiste, sin embargo, la voluntad dictatorial de monopolizar el poder, lo que determina que el circuito público de las formalidades democráticas carezca de toda sustancia y de lugar sólo a operaciones de cambio cosmético. Así, cuando un partido político opositor gana un cierto poder de convocatoria, es disuelto y reprimido; cuando un periódico se excede en sus críticas es clausurado y su director y colaboradores encarcelados; cuando un líder político empieza a amenazar las prerrogativas del gobernante, es eliminado por los cuerpos de seguridad o expulsado del país por un plazo indefinido. Y si todos estos mecanismos llegan a fracasar queda un recurso supremo e infalible: el fraude electoral. Esta práctica hizo de los países centroamericanos un peculiar espacio en cuyos procesos políticos llegó a ser una alternativa normal que "unos ganaran las elecciones y otros ganaran los recuentos".

La exigencia de las prácticas fraudulentas, con la consiguiente desvalorización por las formas democráticas, fue creciendo a medida que aumentó también el descrédito e impopularidad de las dictaduras. Los miembros de la familia Somoza siempre pudieron amañar los resultados de las elecciones en que renovaban el derecho a conservar el poder. Pero ésta no fue la situación de El Salvador y Guatemala. En El Salvador el aglutinamiento de partidos de centro e izquierda llevó a la creación de la Unión Nacional Opositora (UNO), una coalición de organizaciones social-cristianas, social-demócratas y los comunistas. La lista de la UNO ganó claramente las elecciones presidenciales de 1972, pero sus candidatos a presidente y vicepresiden-

te, José Napoleón Duarte y Guillermo Ungo, fueron despojados de su triunfo, reprimidos y obligados a partir al exilio. En 1977 la historia se repitió con agravantes. Nuevamente el candidato de la coalición opositora, el coronel Ernesto Claramunt venció, por amplio margen en los comicios, pero se proclamó presidente al candidato oficialista del Partido de Conciliación Nacional, general Osear Humberto Romero, registrándose además la masacre de decenas de manifestantes en un acto de masas realizado el 28 de febrero de ese año en San Salvador para demandar respeto a la voluntad expresada en las urnas.

Otro tanto ocurrió en Guatemala, donde la tradición del fraude electoral es muy antigua. En 1974, por ejemplo, el candidato de gobierno Kjell Laugerud fue derrotado por el abanderado de una coalición de centro dirigida por el partido demócratacristiano, el general Efraín Ríos Montt. Sin embargo, el gobierno otorgó la victoria y el cargo a su propio candidato. La situación se volvió a repetir todavía de manera más burda en 1982. El 7 de marzo de ese año el postulante oficial, el general Aníbal Guevara, Ministro de Defensa en el Gobierno del general Romeo Lucas García, perdió por amplio margen las elecciones, pero igual fue declarado vencedor originando un par de semanas más tarde el golpe de estado del 23 de marzo que, esta vez sí, permitió, por un camino distinto, llegar al gobierno a Ríos Montt.

Esta larga trayectoria de fraudes y aplastamiento de la oposición política, en base a procedimientos aparentemente democráticos ha sido una de las causas de la polarización política centroamericana y explica las dificultades existentes para alcanzar una solución a la crisis, a través de una simple convocatoria a elecciones.

Este tipo de propuesta que en otros regímenes autoritarios constituiría una demanda de los mismos opositores, en los países centroamericanos es vista como la antesala de una nueva manipulación de la voluntad popular. Por ello, para que los procesos electorales tengan algún sentido en la generación de una salida política a la crisis, es preciso que formen parte de un claro y negociado proceso de democratización que ofrezca efectivas garantías a todos los actores políticos y que forme parte de un itinerario de apertura política, cuyos hitos sean compartidos por todas las formas políticas en pugna.²¹

2. La liquidación preventiva del centro político.

La voluntad de conservar el poder a cualquier precio por parte de los titulares de los gobiernos autoritarios los llevó en todo momento, a ver con gran aprensión el surgimiento de fuerzas políticas de centro, inspiradas en el ideario del social-cristianismo o la social-democracia.

A partir de los años 50 este tipo de partidos comienza a desarrollarse en Guatemala y El Salvador y, algo más tarde, en Nicaragua y Honduras. Paralelamente se

21 Estas dificultades quedaron particularmente de manifiesto al iniciarse la rueda de negociaciones entre el gobierno del Presidente José Napoleón Duarte y las organizaciones político militares agrupadas en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLM) respaldadas por el Frente Democrático Revolucionario (FDR). Dicho diálogo iniciado en la localidad de La Palma en El Salvador se obstruyó apenas se entró al tratamiento de las convicciones políticas necesarias para poner término a la prolongada guerra civil que aflige a ese país desde 1980.

produce una evolución de algunos partidos tradicionales de origen conservador o liberal que buscan moverse hacia el centro y comienzan a ofrecer una oposición política más activa a los gobiernos de fuerza, encontrando puntos de contacto con las nuevas entidades centristas.

La reacción de los gobiernos frente a este crecimiento de la oposición fue favorecer, o al menos tolerar sin problemas, la creación de grupos para-militares de extrema derecha que denunciaban como programas comunistas las moderadas propuestas de reformas sociales hechas por social-demócratas o demócrata-cristianos. Simultáneamente se ejerció sobre los líderes de estas fuerzas, una política de amedrentamiento y represalias. Esto hace que el objetivo principal de los regímenes autoritarios centroamericanos haya sido, en muchos casos, la desarticulación y eliminación de los partidos políticos moderados que veían como la amenaza más inmediata para la continuación de sus mandatos. Del amedrentamiento se pasó a la eliminación física de los dirigentes reformistas. Tal cosa ocurrió con el diputado demócrata-cristiano Adolfo Mijangos en Guatemala en 1972; con el ex-canciller Alberto Fuentes Mohr y el ex-alcalde de Guatemala Manuel Colom Argueta, ambos líderes de las dos principales organizaciones políticas social-demócratas en 1978 y 1979. En El Salvador la primera fase de funcionamiento de la Junta Cívico-Militar que reemplazó a Romero, coincidió en una gran ofensiva de los comandos de ultraderecha de la organización ORDEN en contra de los dirigentes con una línea más avanzada dentro del PDC; a comienzos de 1980 fue asesinado Mario Zamora, ministro de Justicia, y una de las figuras más respetadas de ese sector. Y todos recuerdan aún

como el asesinato del dirigente conservador Pedro Joaquín Chamorro, propietario y director del Diario La Prensa, en Nicaragua, en enero de 1978, fue el detonante que desencadenó la fase final de la crisis política en ese país, asegurando la caída de Somoza.

De esta manera el prolongado ciclo de agonía de regímenes autoritarios que habían perdido toda capacidad de hegemonía revirtió también en la fase de desmantelamiento del centro político y sus opciones. Las direcciones de estos partidos, después del asesinato de sus dirigentes más influyentes, se debilitaron y al encontrar cerrados todos los espacios políticos, se vieron forzados a entrar en la dinámica de la polarización, escogiendo entre la claudicación frente al poder establecido, que poco les ofrecía, o la integración a frentes más amplios que, por la naturaleza misma de los enfrentamientos, habían pasado a ser dirigidos por fuerzas de izquierda con capacidad político-militar. Esto permite comprender una segunda complicación de las fórmulas de democratización en Centroamérica y explica la abundante presencia de antiguos dirigentes de centro en las organizaciones que representan a la oposición de El Salvador y Guatemala, (como también ocurrió ayer en el caso de los opositores a Somoza en Nicaragua), todas las cuales han sido hegemonizadas por fuerzas de izquierda.

Así, en un clima de polarización política y guerra, el centro político tiende a ser aniquilado y luego hay que "reinventarlo" prácticamente para que desempeñe un papel importante en las etapas de la transición democrática.

3. La radicalidad de los movimientos sociales en la subregión.

Otra secuela de la actitud de las dictaduras se ha reflejado en los programas y plataformas de las organizaciones sociales centroamericanas. Como ha advertido lúcidamente Edelberto Torres Rivas en sus trabajos sobre la situación política del área,²² los propios gobiernos de esos países se han encargado de radicalizar a toda clase de organizaciones sociales, incluso aquellas de origen muy moderado. Lo que ocurre, es que en un cuadro de extremo autoritarismo y de rechazo primario a cualquier manifestación que rompa el monolitismo en la sociedad, cualquier demanda corporativa, por elemental que sea, es vista como un acto subversivo y como una amenaza para los detentadores del poder. Esto fue muy claro en primer término en relación al movimiento obrero: la presentación de los primeros pliegos de peticiones de los trabajadores con demandas que hoy se ven como justas y razonables originó una enorme represión gubernamental. Esto significó un rápido avance de las Confederaciones Laborales a una postura de cuestionamiento del sistema político y económico en su conjunto y a la aprobación de plataformas anticapitalistas.

A su turno, este mismo fenómeno se repitió en otros estratos como el movimiento estudiantil y el movimiento campesino. Las Federaciones Universitarias han sido, desde hace décadas, protagonistas principales de casi todos los esfuerzos y movilizaciones que buscan acabar con los gobiernos dictatoriales en América Central. En sus manifiestos y programas se puede

22 "La crisis política en Centroamérica", Edelberto Torres Rivas, EDUCA, San José, 1982.

hallar también una propuesta que rechaza la existencia misma de un sistema capitalista en la subregión y propone soluciones de tipo socialista.

Más recientemente el mismo fenómeno se ha podido advertir en las organizaciones campesinas. El origen de éstas, en los años 60, estuvo directamente ligado al trabajo de la Iglesia Católica.²³ Por ello, todas estas entidades estuvieron muy influidas en sus años iniciales por el pensamiento social cristiano, como se confirma al revisar su desarrollo en países como El Salvador y Honduras. Sin embargo, la demanda de cambios en las condiciones de trabajo en el campo y, más tarde las propuestas de una Reforma Agraria atrajeron la represión sobre estos grupos. Entonces se produjo un neto desplazamiento a la izquierda de los dirigentes y las organizaciones del ámbito rural. En El Salvador, por ejemplo, un examen de las organizaciones populares que aún a comienzos de los 80 integran los diversos frentes de respaldo a las organizaciones político-militares (tales como el Bloque Popular Revolucionario, el FAPU, o las ligas Populares 28 de Febrero) registran entre sus adherentes a diferentes organizaciones campesinas, la mayoría de las cuales habían sido en sus comienzos sumamente moderadas.

Esta radicalidad de los movimientos sociales centroamericanos ha sido determinante para crear un espacio y condiciones a las organizaciones guerrilleras y a la

23 "Liberation and revolution: Christianity as a subversive activity in Central America", Tommie Sue Montgomery en Diskin op. cit. p. 75 y siguientes. Un examen más a fondo se puede hallar en las numerosas publicaciones del Grupo Especial de Trabajo sobre religión y política del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) que coordinan Jorge Cáceres y Andrés Opazo y en el Fondo Editorial del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Ambas instituciones funcionan en San José, Costa Rica.

vía armada. Pero en una perspectiva más larga, constituye un factor que presiona por soluciones profundas en una salida a la crisis existente. Esto hace que no sea posible un arreglo elaborado exclusivamente entre las cúpulas políticas de un determinado país. Semejante fórmula, de intentarse, sería rápidamente desbordada, desde la base, por las acciones de movilización y demandas que podrían desatar obreros, estudiantes, campesinos, y otros sectores.

El acuerdo político está sujeto, entonces, a condiciones más exigentes de las que han podido buscarse en sociedades como las de Europa del Sur²⁴ en donde la demanda democrática era mucho más central y protagónica en las plataformas de los grupos opositores, puesto que allí no existían situaciones de injusticia y disparidad como las que hoy hallamos en Guatemala o El Salvador.

Todos los factores anteriores, así como el peculiar contexto internacional en que se desarrolla la crisis centroamericana colocan un marco preciso a la búsqueda de una solución política. El perfil del autoritarismo en la subregión, que hemos intentado caracterizar en este trabajo, impone un conjunto de condiciones que no pueden ser desconsiderados en el diseño de ninguna salida que aspire a ser eficaz y estable.

Si siempre es difícil intentar la recomposición de un modelo político autoritario, cuando éste ha llegado a un punto crítico en que se desajustan sus propuestas políticas y económicas, ésto es algo que resulta prácticamente imposible cuando las dictaduras a las que se

24 Para un recuento sucinto del colapso de los proyectos políticos autoritarios de Europa del Sur sigue siendo de utilidad el libro de Nicos Poulantzas "La crisis de las dictaduras" (Portugal, Grecia y España)", Ed. Siglo XXI, México, 1976.

enfrenta son anacrónicas, es decir se caracterizan por su contradicción y desajuste con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y han experimentado un prolongado período de erosión y desgaste.

El problema más complejo en los casos centroamericanos es que muchas soluciones basadas en una transición democrática simple con fórmulas como un llamado a elecciones generales o a una Asamblea Constituyente, carecen de eficacia y credibilidad por el abuso que de estos mecanismos hicieron los dictadores. La "ingeniería política" en que nos habla Juan Linz en los procesos de democratización²⁵ supone entonces una negociación más compleja que incluye la definición y búsqueda de las condiciones de legitimidad de cualquier gobierno de transición y el acuerdo sobre precisas reglas del juego que establezcan pautas de competitividad y garantías en materia de libertades públicas para todas las fuerzas políticas que acepten participar en un arreglo político negociado.

Al mismo tiempo se plantean cuestiones como la integración de las organizaciones sociales al sistema político que se construya y la adhesión de ellas a los procedimientos democráticos. Este es otro asunto complicado, puesto que en estas sociedades se trata simultáneamente de reforzar la densidad del tejido social y asegurar el compromiso efectivo de estos actores sociales con las metas y pasos de la democratización.

Igualmente problemática es la reestructuración de las FF.AA. para garantizar su subordinación frente a las autoridades civiles y su funcionamiento en condiciones de profesionalidad, algo que aparece como otro pre-

25 "Transition to democracy: a comparative perspective", Juan Linz, New Haven. Yale University, 1983, mimeo.

quisito del éxito de cualquier fórmula política democrática. En este mismo terreno está el delicado asunto de "la reabsorción" de los contingentes de las organizaciones político-militares, por parte del sistema político democrático que se construya, y la eliminación de los grupos paramilitares y las guardias privadas de extrema derecha, que han sido los instrumentos más frecuentes del crimen y la represión en estos países.

Finalmente está el problema de la coexistencia política y económica de los cinco países del istmo centroamericano: ¿Cómo asegurar que en un cuadro de efectivo pluralismo político convivan fraternalmente en esta área agitada y pequeña, regímenes políticos de signos diferentes? ¿Cómo reforzar la viabilidad económica de estas naciones, mediante una estrategia de desarrollo común; permitir la real complementación de sus proyectos industriales o de desarrollo agrario, así como de su capacidad negociadora internacional y de sus relaciones económicas con los centros?

Todos estos asuntos no son parte de la temática de este artículo, pero estamos convencidos que ninguno de ellos podrá ser abordado, si no se tiene en cuenta el impacto que, hacia adelante, proyectarán los fenómenos autoritarios que ha padecido América Central y la necesidad de superar los resabios que constituyen su trágica herencia.

Chile: autoritarismo y lucha democrática

La dictadura chilena en el contexto sudamericano.

La década de los ochenta ha resultado devastadora para los regímenes militares de América del Sur.¹ Hace diez años Colombia y Venezuela eran los únicos países gobernados por presidentes civiles mientras que Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile tenían gobiernos militares. Al empezar 1986, en cambio, el autoritarismo y los gobernantes castrenses eran la excepción al punto que sólo dos países continúan hoy regidos por sistemas políticos con esas características: Paraguay que tiene la dictadura más antigua del continente (el general Alfredo Stroessner de-

1 Para los efectos de este trabajo incluimos en la expresión "América del Sur" sólo a los países latinoamericanos, excluyendo a Suriname y Guyana que si bien están situados en la cabecera del subcontinente mantienen una vida de relación e intercambios preferentes con los estados situados en la subregión del Caribe a la que se les asimila.

tenta el poder desde 1954) y Chile, donde el general Augusto Pinochet se sostiene en el mando desde el sangriento golpe de estado de septiembre de 1973.

En un panorama político como el de América Latina en que dictadura y democracia se han alterado cíclicamente durante un largo tiempo es difícil predecir la estabilidad de los» nuevos gobiernos emanados de la voluntad popular a través de procesos electorales. Estos enfrentan inmensos desafíos como la necesidad de superar la desarticulación del aparato político legado por el autoritarismo, las exigencias para dar satisfacción a las expectativas de trabajo, consumo básico y progreso social acumuladas por los sectores medios y populares y la resolución de los problemas en que coloca el agobiante endeudamiento externo a sus) economías.² Pero de lo que no cabe duda en este momento es que los regímenes de fuerza que todavía subsisten en la parte Sur de América hacen frente a una situación de crisis que se agudiza día a día, irremisiblemente.

En Paraguay, la oposición se ha agrupado en torno a un Acuerdo Nacional en el que participan desde las tradicionales corrientes opositoras como liberales, demócratas cristianos y febreristas hasta sectores disidentes del oficialista Partido Colorado. La disidencia al general Stroessner incluye en términos sociales, a prácticamente la totalidad de los sectores sindicales y a todas las organizaciones que se articulan en torno a la Iglesia Católica. En un cuadro en que se entre-

2 Los gobernantes de estos países, especialmente los Presidentes Raúl Alfonsín y Alan García han usado numerosas veces las amplias tribunas internacionales de que disponen para exigir una mayor comprensión de Estados Unidos y subrayar las amenazas y dificultades que afrontan.

mezclan la declinación física del anciano dictador con crecientes denuncias de corrupción, el régimen paraguayo atraviesa por primera vez por dificultades serias que amenazan su continuidad, situación que se ha acelerado luego del advenimiento de los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín, en Argentina, y José Sarney en Brasil, sus influyentes vecinos.

Lo propio ocurre en Chile, aunque en un contexto mucho más complejo. La dictadura del general Pinochet posee un alto valor simbólico que la ha convertido en un referente autoritario a escala mundial. Esto ha ocurrido tanto por el interés que atrajo la experiencia de la "vía chilena al socialismo" ensayada por el Presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973, como por las características particularmente duras y represivas que el gobierno militar presentó al instalarse en el poder y que incluyeron desde el bombardeo aéreo al Palacio Presidencial hasta el uso de estadios y grandes lugares públicos como lugares de reclusión política. Todo esto hizo que Pinochet alcanzara una notoriedad universal y que su régimen deba hacer frente desde entonces a un severo aislamiento internacional que prácticamente no se ha interrumpido durante su ya largo mandato.

En cualquier caso, un análisis riguroso de la situación chilena actual debe comenzar por una caracterización de la propia dictadura. Hace diez años se consideraba virtualmente idénticos a todos los gobiernos militares sudamericanos.³ Ellos compartían una doble matriz ideológica que los aproximaba. Por una parte, aplicaban como concepción oficial la Doctrina

3 Véase al respecto el debate planteado en los trabajos del libro "El Control Político en el Cono Sur", varios autores, Editorial Siglo XXI, México, 1976.

de Seguridad Nacional en una versión derivada de la formulación original norteamericana. Esto significaba: un rígido encuadramiento Este-Oeste de todos los conflictos domésticos, la proclamación del "comunismo internacional" como el enemigo supremo del Estado y de la Nación, la descalificación de la democracia liberal por su incapacidad para contener a este enemigo y una difundida lógica de "guerra interna" que buscaba consolidar un horizonte estratégico para la implantación de los gobiernos de fuerza. Junto a ello, aplicaban esquemas y concepciones de política económica claramente ligadas a las visiones neo-liberales, propiciaban una completa apertura de sus economías frente a los circuitos internacionales, la vigencia del principio de las "ventajas comparativas" y exhibían una indomable voluntad para desregular los "entramamientos burocráticos y estatistas" que impedían el pleno despliegue de la actividad empresarial.

Las semejanzas que producía la adhesión a estos dos pilares fundamentales del autoritarismo político y el liberalismo económico indujo a muchos observadores a subrayar más los parecidos que las diferencias de los modelos autoritarios vigentes en diferentes países sudamericanos. Con el correr del tiempo, sin embargo, los factores nacionales de cada país fueron cobrando creciente relieve. A la larga ellos han sido los que han explicado la declinación, primero, y el colapso, después, de estas dictaduras.⁴

A la luz de una perspectiva que subraye los factores más peculiares y específicos de cada experimento autoritario, el gobierno del general Pinochet aparece

⁴ Hemos insistido en este punto en trabajos anteriores incluidos en mi libro "Chile: autoritarismo, democracia y movimiento popular", Editorial CIDE, México, 1984.

como especialmente "distinto" de sus congéneres. En estos factores precisamente, podemos encontrar las claves que explican su supervivencia.

En primer término, el general Pinochet se apartó de las pautas de ejercicio del poder político hecho en forma conjunta por los mandos militares institucionales (el llamado "ejercicio institucionalizado del poder") que caracterizó a las restantes dictaduras militares. En lugar de radicar las decisiones políticas en el cuerpo de generales y almirantes que integran la cúpula directiva de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, fue concentrando en sus propias manos el manejo de todos los asuntos públicos. Esta progresiva "personalización" del poder culminó en 1978 cuando Pinochet sacó de la Junta Militar al general Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, quien aparecía como la única personalidad militar capaz de amenazar su poder. Desde entonces el ejército, al igual que las demás instituciones militares y de seguridad parecen claramente subordinadas a los designios del Jefe del Gobierno aunque no comparten con él ninguna decisión importante que afecte a la marcha del Estado chileno. En este proceso, no cabe duda, ha jugado un rol muy funcional la antigua mentalidad prusiana predominante en el ejército chileno desde fines del siglo XIX que hace del principio de la verticalidad del mando y de la obediencia dogmas indiscutibles.

Una segunda clave del poder político de Pinochet ha sido su capacidad para mantener su posición efectiva como Comandante en Jefe del Ejército, la rama que sin duda asume una posición hegemónica al interior de las Fuerzas Armadas chilenas. Quienes siguen más directamente las actividades cotidianas de Pinochet, subrayan siempre la gran atención que éste presta a su posición

de jefe efectivo del Ejército. En su despacho se resuelven todos los ascensos y destinaciones de los altos oficiales, durante sus giras por el país el contacto con las unidades militares es un punto prioritario en su programa de actividades, del mismo modo que lo es la planeación militar, (junto a sus colaboradores más estrechos y leales), de la "guerra" contra la amplia gama de sus opositores internos. Este atento escrutinio del quehacer militar le permite a Pinochet detectar el surgimiento de cualquier oficial que, dentro del ejército, pudiera amenazar su poder personal, decidiendo su inmediato alejamiento de las filas.

Finalmente, Pinochet ha captado con especial agudeza el valor de los procesos de institucionalización legal del poder. Gradualmente ha ido revistiendo de apariencias de legitimidad, su desnudo poder inicial. En poco tiempo cambió su título de Presidente de la Junta Militar de Gobierno por el de "Jefe Supremo de la Nación", para terminar adoptando el de "Presidente de la República", todavía más respetable en la tradición política chilena. Luego de desechar las fórmulas moderadas que lo habrían sacado del poder a mediados de los años ochenta, como la propuesta hecha en el Consejo de Estado por el ex Presidente civil, Jorge Alessandri, el general Pinochet hizo aprobar en septiembre de 1980 una Constitución que le confiere el ejercicio total, y por un tiempo virtualmente indefinido, del gobierno.*

La Constitución de 1980 estableció un período presidencial de ocho años 1981-89 susceptible de pro-

* En un discurso pronunciado en la localidad de Santa Juana, cerca de Concepción a comienzos de julio, Pinochet anunció su decisión de buscar un nuevo mandato, a contar de 1989 confirmando plenamente el razonamiento de este trabajo. N. del E.

longación en un segundo mandato 1989-1997 a través de un plebiscito uninominal que debería efectuarse a fines de 1988, lo que hace que su horizonte de poder político coincida prácticamente con el de su existencia física, en este punto ha programado las cosas del mismo modo que el dictador español Francisco Franco a quien Pinochet admira especialmente: si se cumplieran sus deseos para 1997, cuando culminara su "segundo período constitucional", Pinochet tendría 82 años de edad.⁵ Pero además el texto constitucional del régimen está dominado por una lógica de rechazo a los valores y principios de la democracia liberal: consagra la proscrición ideológica de las "concepciones totalitarias", lo que dejaría convertidos en fuerzas extrasistema a todos los partidos de izquierda; asegura un poder de veto a los sectores militares a través de un Consejo de Seguridad Nacional; imagina un funcionamiento restrictivo de los derechos políticos y las libertades públicas y contempla un mecanismo particularmente rígido de reformas de sus propias disposiciones, lo que constituye un gran obstáculo al planeamiento de cualquier transición política que busque superar el estrecho marco de una democracia restringida colocado por el texto de 1980.

El juego combinado de estos tres factores —la personalización y concentración del poder político, la fusión de la autoridad política y la militar y la institucionalización de pautas antidemocráticas— explican la porfía y la capacidad de respuesta que Pinochet muestra ante

5 El General Pinochet ha dejado constancia en diversas entrevistas (especialmente en la que concedió al periodista Edward Schumacher del "New York Times" en mayo de 1984) de su admiración por el pensamiento y la estrategia del caudillo español Francisco Franco, al que busca emular.

sus opositores. Los sectores democráticos chilenos aparecen en muchos aspectos más fuertes y mejor organizados que sus equivalentes brasileños, uruguayos o argentinos en cuanto a la actividad de los partidos políticos. También es mayor la fortaleza de las organizaciones populares (sindicatos, federaciones estudiantiles, colegios profesionales y organismos de pobladores) los que además "cuentan con una gran conciencia democrática y una larga memoria histórica. Sin embargo, el régimen militar chileno no ha concluido, a pesar de estas fuerzas y de la amplitud de las protestas organizadas en su contra porque Pinochet es un dictador especialmente fuerte y ha mostrado, desde su lógica de guerra una gran capacidad para contragolpear, desorganizando y dividiendo a sus adversarios, a la vez de una no despreciable habilidad para descalificar sus propuestas y alternativas.

El escenario chileno ofrece así, en los últimos años el singular interés que proyecta la confrontación de una oposición socialmente fuerte con un dictador que retiene un gran poder represivo y una apreciable iniciativa política. En este juego de fuerzas planteado desde mayo de 1983 (cuando se efectuara la primera protesta nacional), los avances de los sectores que buscan una transición democrática se han visto dificultados por una serie de activas maniobras que ha realizado el propio Pinochet con miras a desarticular su planes. Esto ha hecho que el estrechamiento del cerco democrático haya sido en Chile más lento y más difícil que en los países vecinos. Con su conducta Pinochet ha demostrado también que una combinación de sagacidad e inescrupulosidad en el ejercicio del poder puede constituir un factor capaz de retardar y dificultar la realización de las demandas democráticas. De algún

modo se ha verificado en Chile el cumplimiento de una especie de ley en el funcionamiento de las modernas dictaduras militares que se fundan en las concepciones de Seguridad Nacional: cuando se inicia el asedio de las dictaduras por parte de una sociedad civil que exige democracia, los regímenes personalizados presentan una mayor capacidad de "resistencia" que las dictaduras militares que han institucionalizado el ejercicio del poder a través de sus mandos regulares.

En las dictaduras militares "institucionalizadas*" tanto la sensibilidad frente a lo que acontece en la sociedad como la disposición a la negociación son mayores. La explicación de esto es que los colectivos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas perciben de múltiples maneras las señales de crisis que provienen del mundo civil. Esto hace que al interior de las instituciones armadas brote una deliberación política que muestra cuan acertadas fueron aquellas caracterizaciones que sostuvieron que en las dictaduras "institucionalizadas" las Fuerzas Armadas funcionaban como un verdadero partido político (o si se prefiere como una coalición de partidos políticos para tomar en cuenta la diferenciación orgánica de sus distintas ramas).⁶ En tales casos, la discusión acerca de la diversidad de opciones y caminos que es consustancial a la política

6 El esclarecimiento de este rasgo de las nuevas dictaduras militares fundadas en la doctrina de Seguridad Nacional fue un lúcido y temprano aporte de L.A. Costa Pinto en el libro "Nacionalismo y militarismo", Editorial Siglo XXI, México 1971. Una reflexión original de las relaciones entre el ejercicio institucional del poder por las Fuerzas Armadas y sus márgenes de cohesión interna puede encontrarse en el trabajo de John Samuel Fitch, "Las consecuencias políticas de la ayuda militar norteamericana a América Latina", publicado en el Volumen 4 de "Cuadernos Semestrales de Estados Unidos", CIDE, México, dedicado al análisis del tema "La dependencia militar latinoamericana.

acaba penetrando en el interior de los mandos militares, poniendo fin al monolitismo cerrado e introduciendo los desacuerdos y la deliberación. Entonces, finalmente en un cierto momento de desarrollo de la crisis, los militares se ven enfrentados ante el dilema inevitable de regresar a sus cuarteles y al cumplimiento de su función profesional, como la única forma de impedir el riesgo de una división interna y el enfrentamiento abierto entre los propios sectores castrenses, en razón de sus crecientes desacuerdos políticos.

Nada de ésto ocurre, en cambio, cuando el poder está concentrado en una sola mano. En estos casos el dictador toma conciencia en forma mucho más borrosa de las posiciones de la mayoría de la sociedad, puesto que por su propia naturaleza está aislado de ella y rodeado sólo de partidarios que le seleccionan la información apropiada. Las demandas por un proceso de democratización sólo sirven para acentuar el hermetismo del régimen, de acuerdo al paradigma de la "fortaleza sitiada". Concientes del carácter ineludible que tendrá para el círculo íntimo de los que detentan el poder, el esclarecimiento de las responsabilidades por crímenes, violaciones de derechos humanos o irregularidades financieras, éstos se disponen a sostenerse en el mando por todo el tiempo que les resulte posible. Así, la lógica de las dictaduras personalizadas no es la de la negociación, sino la del "bunker". Los "conductores autoritarios" que las dirigen, al estar seguros y confiados de su superioridad en el terreno de la fuerza atizan el enfrentamiento y buscan, desde arriba, una polarización de la sociedad entre "amigos" y "enemigos", pues saben que sólo en ese terreno podrán compensar, con una mayor capacidad represiva, una posición social minoritaria. De hecho, advierten que al militarizar el

tratamiento de todos los conflictos políticos y sociales, la propia significación de la correlación entre posiciones de "minoría" y "mayoría" se reduce grandemente, puesto que desde la cúpula del poder, al rechazar la legitimidad de todas las demandas, y asociarlas en todos los casos con posiciones "extremistas" y "violentistas", se envía un recado al conjunto de la sociedad en que, cualquier petición de cambio político, será considerada "subversiva" y merecerá una respuesta de fuerza.⁷ Obviamente, en un cuadro así, el poder político reinante está en condiciones de dividir y enfrentar a los sectores civiles opositores, aunque éstos representen a una amplia mayoría de la sociedad civil. La única condición para ello es que el dictador conserve la lealtad de los núcleos hegemónicos de las Fuerzas Armadas y que pueda asegurar la mantención de su capacidad operativa.

Los desencuentros de la oposición

Pero además los opositores a las dictaduras no siempre comprenden cabalmente otra de las enseñanzas que fluye de cualquier examen comparativo de los sistemas políticos autoritarios. Esta consiste en que los métodos

⁷ La crisis del régimen de Ferdinand Marcos da cuenta de las complejidades que acompañan a las fases finales de un dictador con "vocación de bunker". Marcos, luego de tener que realizar anticipadamente elecciones presidenciales en Filipinas como resultado de las presiones que recibiera, a mediados de 1985, del enviado especial del Presidente Reagan, el Senador Paul Laxalt, se las ingenió para realizar un gigantesco fraude y desconocer el claro triunfo logrado por la opositora, Corazón Aquino, amenazando luego con la reimplantación de la ley marcial, cuando los opositores, con el apoyo de la Iglesia Católica llamaron al pueblo a realizar actividades de desobediencia civil generalizada. Nada de esto, sin embargo, impidió su caída.

de lucha y las estrategias para poner término a una dictadura no se inscriben en el cuadro de los principios o de las "verdades teóricas", sino que están directamente vinculadas, en su corrección y eficacia, al propio perfil constitutivo del régimen que se busca reemplazar.

Sabemos que en teoría, existen tres maneras de acabar con una dictadura:

Primero, por medio de una "negociación intra-sistema" con el titular de un régimen autoritario o con un sector disidente de éste, cuando éstos perciben un desgaste insuperable del proceso político que encabezan y están dispuestos a sentarse a una mesa para ajustar las condiciones de entrega del poder;

Segundo, a través de un "enfrentamiento militar" que coloca frente a las Fuerzas Armadas del régimen a un poder militar alternativo que las enfrenta y que finalmente produce el colapso mediante una derrota militar del sistema político autoritario, y

Tercero, por el desarrollo de un "proceso de resistencia social" basado en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares que levantan una propuesta de democratización y despliegan una estrategia de desobediencia civil generalizada, la cual culmina en la paralización de las actividades nacionales y provoca una "derrota política" del régimen autoritario al demostrar que éste es incapaz de administrar el país y mantenerlo en funcionamiento.

Ninguno de estos caminos tiene, por sí mismo, la virtualidad de lograr el objetivo común que persigue. Es la naturaleza propia de cada modelo autoritario la que define para un país determinado la validez de una u otra fórmula. Por lo mismo, resulta imposible invocar las experiencias históricas anteriores como un elemento

unívoco de apoyo de una cierta opción, puesto que las experiencias existentes abonan justamente el criterio de que son posibles diversas y diferenciadas salidas a partir de realidades sociales también distintas.

La historia reciente de América Latina confirma abrumadoramente esta diversidad de opciones. En el término de las dictaduras uruguaya (1985), y argentina (1983) predominó un mecanismo de negociaciones que en el caso uruguayo adquirió expresión formal y material con las reuniones y actas de acuerdo logradas en el Club Naval. El derrocamiento de los regímenes de Fulgencio Batista en Cuba (1959), y Anastasio Somoza en Nicaragua (1979), se hizo en base a una confrontación militar que acabó desarticulando la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas que sostenían a la dictadura. Finalmente, en otros casos, como en la caída de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (1958), la de Hugo Banzer en Bolivia (1979), o la más reciente de Jean Claude Duvalier en Haití (1986), el elemento determinante fue la capacidad de concertación de los sectores civiles para lograr acuerdos amplios de la civilidad, organizar una interrupción prolongada de las actividades productivas y desencadenar una crisis política irreversible.⁸ Probablemente, si en cualquiera de estos países se hubiera intentado una fórmula distinta de la que condujo finalmente a la transición democrática

⁸ En estricto rigor habría que sostener que esta conceptualización atiende al factor básico y desencadenante del fin de las dictaduras, porque en la práctica es muy difícil que un curso de acción se dé en forma nítida y pura. Así, por ejemplo, la negociación uruguaya se hizo posible luego de dos paros nacionales que interrumpieron en forma total las actividades de la nación, mientras que la culminación del cerco militar de los sandinistas pudo llegar a feliz término gracias al desarrollo de las organizaciones populares en Managua y otras ciudades y al constante asedio que sus acciones civiles pusieron sobre el régimen de Anastasio Somoza, hijo.

ésta no se hubiera producido o se hubiera retardado considerablemente.

Esto hace que un ejercicio decisivo para la eficacia del quehacer que las dirigencias democráticas impulsan sea la capacidad para examinar en conjunto, la naturaleza de la situación interna que enfrentan y encontrar caminos comunes que permitan la suma de sus diferentes fuerzas. A la inversa, la tozudez en intentar por separado propuestas que se definen más en función a consideraciones ideológicas que de una revisión científica de su propia realidad nacional constituye una involuntaria, pero eficaz garantía de continuación de los regímenes autoritarios.

Subrayamos este tópico general porque creemos que ha sido decisivo en la situación chilena producida a contar de 1983. El mayor desacuerdo de los opositores chilenos tiene que ver con las insuficiencias en la caracterización del régimen de Pinochet. Al no ponerse de acuerdo sobre este punto (y en muchos casos al ni siquiera percibirlo como un asunto crucial que se debe resolver) se han desplegado —a veces con un sorprendente voluntarismo— estrategias paralelas que han anulado la eficacia de los núcleos democráticos y han originado estériles y significativos conflictos entre ellos.⁹

9 A este respecto el razonamiento más dañino es el que postula la necesidad de excluir a un sector de la izquierda, y en particular al PC, con el argumento de que "constituyen los enemigos históricos de las Fuerzas Armadas, cuya voluntad es decisiva para la transición democrática". Este razonamiento de algunos dirigentes chilenos de derecha y centro derecha ha condicionado, hasta ahora, el comportamiento de la directiva de la Democracia Cristiana dando por resultado la mantención de una división en la oposición. Paradójicamente, este hecho ha reducido la eficacia que habría tenido una oposición unida y le ha permitido al general Pinochet mantener el control y la disciplina de las Fuerzas Armadas, luego que éstas han visto que los sectores democráticos carecen de la fuerza necesaria para amagar al régimen.

A primera vista parece evidente que una parte mayoritaria de la oposición está convencida de la validez para el caso chileno de una estrategia de derrota política. Pero, simultáneamente se advierte el peso y un cierto poder de veto de pequeños grupos que propician los caminos de la negociación y de la derrota militar. Los primeros invocan en su apoyo los precedentes más recientes de Uruguay y Argentina, mientras que los otros levantan en su favor una lectura estrictamente militar de las experiencias cubana y nicaragüense. En los hechos esta disparidad ha fragmentado a una oposición que, de acuerdo a los pronunciamientos realizados en algunas organizaciones sociales,¹⁰ representa más del ochenta por ciento de la opinión política del país. Sin embargo, esta fuerza se diluye ante la inexistencia de un enfoque común y ante la mutua descalificación que se acaban haciendo entre sí los principales dirigentes de los partidos opositores.

Así, poco después del inicio de las protestas nacionales la oposición chilena se dividió en dos referentes políticos nacionales: la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. La primera agrupa a los Partidos Republicano, Liberal, Social-Demócrata, Radical, Demócrata Cristiano y Socialista (dirección: Carlos Briones). El segundo está formado por los Partidos Comunista y Socialista (dirección: Clodomiro

10 Durante 1985 la oposición venció en prácticamente todas las elecciones realizadas para elegir directivas de confederaciones sindicales, colegios profesionales, federaciones universitarias y organizaciones de pobladores. Normalmente obtuvieron un respaldo del 80% o más de los electores y, en no pocos casos ni siquiera hubo listas oficialistas; en el curso de los últimos años la fuerza de estas organizaciones sociales creció en más de un 250% en materia de afiliados y participación institucional.

Almeyda), Socialista XXIV Congreso, Socialista (Coordinadora Nacional de Regionales), Socialista (Comandantes), MIR y MAPU Obrero Campesino, tendencia proletaria. Además, existen otras fuerzas de izquierda que están al margen de estas agrupaciones como la Izquierda Cristiana, el MAPU y dos Partidos Socialistas (dirección Manuel Mandujano e Histórico). Esto hace que el escenario chileno esté dominado por la dispersión política y que en la práctica, resulte muy difícil conseguir un entendimiento de todos los que se definen como adversarios del general Pinochet.¹¹

Especialmente difícil ha resultado, hasta ahora, el entendimiento entre la AD y el MDP. Aunque estas dos coaliciones proclaman una misma estrategia de movilización social contra la dictadura, existen en el interior de ambas, sectores influyentes que sostienen la validez de otros caminos y que impulsan conductas que llevan a la exclusión mutua. Al interior de la AD existe un polo que cree en la posibilidad y conveniencia de una negociación con el régimen y que trabaja en esta dirección. En el seno del MDP, por su parte, se advierte en muchos momentos conductas e interpretaciones que

11 La gran fragmentación del Partido Socialista que fundara Salvador Allende constituye un serio obstáculo para una salida política en Chile, pues radica la mayor parte de la iniciativa en manos de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista que se excluyen mutuamente. Si los diferentes sectores socialistas —históricos y nuevos— se unieran serían uno de los tres partidos más importantes de la oposición. En esta dirección interesante el acuerdo de acción conjunta anunciado por la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), a comienzos de febrero de 1986. Esto crea una primera tendencia positiva y de concertación dentro del área socialista y puede tener un efecto positivo para un acuerdo de conjunto por la convocatoria que en conjunto tienen estos partidos, considerados, entre los más importantes exponentes del "socialismo renovado" en Chile.

parten del supuesto de que es posible terminar con el régimen en base a la "fuerza propia", sin buscar concertaciones con el resto de la oposición e intensificando el empleo de la violencia. El punto más crítico es que estas contradicciones atraviesan también a los dos partidos políticos con mayor apoyo social que, de hecho, hacen cabeza de sus respectivos bloques. En la Democracia Cristiana hay un sector moderado encabezado por el ex-senador Juan Hamilton que cree que es indispensable excluir a las fuerzas de izquierda en el proceso de liquidación de la dictadura de Pinochet por lo cual levanta objeciones a toda forma de colaboración con éstas. Por su parte, el Partido Comunista y el MIR tienen voceros que razonan como si fuera posible terminar con el régimen teniendo como única base orgánica a los grupos más radicalizados del movimiento popular, y que piensan que al perseverar en un activo enfrentamiento y hostigamiento al aparato represivo de Pinochet, sin excluir un empleo creciente de la violencia que ya despliega el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asociado al PC, acabarán arrasando a la lucha a los sectores del centro, inicialmente vacilantes.

La persistencia de este desacuerdo ha hecho que en la práctica el general Pinochet enfrente a dos oposiciones descoordinadas, en lugar de una sola, lo que aumenta considerablemente su rango de maniobra, no sólo en cuanto a la actividad represiva sino especialmente en lo relativo al empleo del enorme aparato oficial de comunicaciones. Desde allí se acentúan los desacuerdos de los opositores, se definen los temas en debate y se impulsan verdaderas operaciones para profundizar la contraposición existente entre el centro y la izquierda.

De este modo, tres años después de iniciada la confrontación abierta de los opositores democráticos con la dictadura, no existe todavía un plan de movilización ni una estrategia común para todos y esto relativiza bastante los importantes avances logrados.

Tal situación debiera ser superada en el tiempo inmediato a partir de una actitud constructiva que asuma la necesidad de la unidad de todos los opositores en base a un debate franco de los desacuerdos estratégicos que subsisten. Estamos convencidos que semejante discusión probaría rápidamente que la propia naturaleza del régimen autoritario chileno impide cualquier negociación exitosa, al menos mientras el general Pinochet mantenga las cuotas de poder de que actualmente dispone. Igualmente, permitiría establecer que una agudización indiscriminada del conflicto y, sobre todo, el desarrollo de acciones de fuerza que la dictadura puede calificar como "terrorismo" (como la colocación de bombas en lugares públicos, el secuestro o la "ejecución" de partidarios de Pinochet), dificultan el desarrollo de las acciones de masas y tienden a aislar a los grupos más radicales del resto del pueblo, facilitando su represión.

Estamos convencidos que si todos parten de una actitud inicial abierta y constructiva y si el debate se establece a partir de un descarte de aquellas estrategias que, al no responder a las características de la realidad chilena, dividen y parcializan a la oposición para concentrarse en la definición de las etapas y de los planes concretos de la movilización social, es posible revertir en corto tiempo las tendencias que esterilizan hasta ahora a las fuerzas democráticas y constituir un movimiento nacional que sea capaz de impulsar exitosamente: la lucha por el restablecimiento de la demo-

cracia.¹² Para ello, no se parte de cero sino **que** se cuenta con los importantes avances que, pese **a** todo, se han logrado en los últimos tres años.

Balance de 1985.

1985 resultó un año positivo para la oposición al general Pinochet. Esto, a pesar de que desde el punto de vista de la represión fue también un año terrible, que la totalidad de los observadores coincidieron en calificar como muchísimo más duro que los precedentes. Prácticamente todo el primer semestre transcurrió bajo estado de sitio y a lo largo de él las diferentes expresiones de los disidentes del régimen fueron desarticuladas con gran violencia. Aumentaron las relegaciones y las detenciones prolongadas, hubo un mayor número de asesinatos políticos y se reabrieron antiguos campos de concentración como el de Pisagua.

Pese a ello, desde un punto de vista político 1985 tuvo un desenlace diferente a los anteriores. En 1983 y 1984 las fuerzas de oposición desarrollaron un ciclo

12 En esta dirección desempeña un papel muy positivo el fortalecimiento de la Intransigencia Democrática. Esta organización fue creada en abril de 1985 por 16 personalidades democráticas de derecha, centro e izquierda que subrayaron que sólo mediante una lucha activa se podría poner término a la dictadura de Pinochet. En enero de 1986 la ID presentó un amplio Plan de Acción para 1986 e inició la creación de una organización de carácter nacional para respaldarlo al mismo tiempo que constituyó un Comité Ejecutivo de 17 miembros y un Consejo Directivo formado por 135 personalidades de los más variados campos. En el seno de la ID participan representantes de los Partidos Republicano, Humanista, Radical, todas las organizaciones del área socialista y los partidos integrantes del MDP, además de independientes.

enteramente estéril que se puede resumir del siguiente modo: los sectores democráticos ocuparon los meses iniciales, que corresponden a las vacaciones de verano, en planificar las acciones; a contar de marzo hicieron esporádicas manifestaciones y protestas para ir acumulando fuerzas. Luego volcaron sus esfuerzos en torno a los actos del 1° de mayo. Sólo después de esa fecha se iniciaron las acciones mayores marcadas por un "crescendo" en los días claves del mes de septiembre (el 4, fecha de celebración de las elecciones presidenciales durante la etapa democrática y el 11, aniversario del golpe). A partir de allí el impulso permitió realizar grandes movilizaciones en octubre y la primera parte de noviembre, pero al no obtenerse resultados concretos que afectaran las bases mismas del poder personal de Pinochet en las vísperas de las fiestas de fin de año se produjo una desmovilización que hizo de todo el período un "ejercicio de suma cero".

En 1985, en cambio, hubo un anudamiento distinto de los acontecimientos que, como resultado, ha dejado a los sectores democráticos con mayor iniciativa y frente a un conjunto de operaciones abiertas que son susceptibles de ser profundizadas a partir de 1986.

Este balance "positivo" puede resumirse en tres grandes tendencias:

A. El terrorismo de Estado organizado, por el régimen quedó en evidencia para la mayoría de la población.¹³

Uno de los grandes problemas enfrentados por la disidencia chilena ha sido, hasta ahora, la dificul-

13 La asociación del régimen de Pinochet con el "terrorismo de Estado" es un hecho central, porque fija en el complejo escenario político

tad para poner en claro la responsabilidad del gobierno en las acciones masivas de violación de los derechos humanos. Más allá de la evidencia abrumadora de muchas pruebas como las acumuladas en torno a las masacres de Lonquén y Yumbel, al caso de los desaparecidos o a los asesinatos del general Carlos Prats y de Orlando Letelier, para una buena parte de la opinión interna no estaba claro el nexo entre esas acciones y las determinaciones de los más altos personeros del régimen.¹⁴

El 30 de marzo de 1985 ocurrió, sin embargo, un hecho terrible que logró conmocionar a la opinión pública chilena con mucho mayor fuerza que cualquier episodio anterior, originando una investigación judicial cuyas consecuencias resultaron también decisivas. En plena vigencia del Estado de Sitio tres dirigentes del Partido Comunista —José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino— fueron secuestrados en medio de espectaculares operativos de seguridad: dos de ellos fueron capturados por la fuerza, ante centenares de niños, en un establecimiento educacional

chileno el "origen" y las "fuentes" de la violencia. Esta, organizada de modo sistemático y con toda clase de recursos se halla en el gobierno. Tiene un carácter estratégico, pues el régimen no podría vivir sin ella. Por lo mismo, quienes desean que exista una convivencia civilizada y condiciones de seguridad efectiva en la sociedad comienzan a advertir que esto sólo será posible terminando con quien produce la violencia, es decir ayudando a poner término a la dictadura de Pinochet. 14 En el caso chileno, a diferencia de lo ocurrido en otras dictaduras se dispone de un exhaustivo recuento de todas las violaciones realizadas a los derechos humanos. Este ha sido hecho, caso a caso, por el Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica, una entidad que desde 1974 ha asistido judicialmente a todos los perseguidos por la dictadura y a sus familias.

al inicio de sus actividades, y el tercero, raptado al mediodía, en una de las calles más importantes y concurridas de Santiago; horas después fueron encontrados degollados, con huellas de terribles torturas en un lugar vecino al aeropuerto internacional de Pudahuel.*

La conmoción provocada por el hallazgo y sus circunstancias determinó la designación de un Ministro en visita perteneciente a la Corte de Apelaciones de Santiago: José Cánovas Robles. Este, un antiguo magistrado sin conexiones políticas, con una tradición de rectitud y acuciosidad en su trabajo, inició una investigación que rápidamente lo condujo a los organismos de seguridad del gobierno, especialmente a la Dirección de Investigaciones y Comunicación de Carabineros (DICOMCAR), un órgano especial anti-subversivo de dicho cuerpo policial. Con apoyo de muchos informantes fue cerrando el cerco en torno a los autores del crimen y finalmente, en la primera semana de agosto de 1985 dictó una espectacular resolución encargando reos y deteniendo a varios altos funcionarios de este organismo, incluyendo al propio jefe de la DICOMCAR, el coronel de Carabineros Luis Fontaine.

Esta situación, que representaba el primer acto de verdadera autonomía del Poder Judicial frente a

* Un impacto análogo al del caso de los degollados —nacional e internacionalmente— ha tenido el incidente producido en un sector de Santiago el 2 de julio de 1986, durante un Paro Nacional convocado por organizaciones sociales, en que 2 jóvenes estudiantes, Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, fueron rociados con combustible y luego quemados por integrantes de una patrulla militar, según pudo relatar el joven Rojas en testimonio prestado poco antes de fallecer el 6 de julio. N. del E.

la dictadura, provocó una profunda crisis política. Como consecuencia de ello, fue disuelta la DICOMCAR y debió renunciar a su cargo el Director General de Carabineros, el general César Mendoza, uno de los cuatro miembros de la Junta que organizara el golpe en 1973 conocido como uno de los aliados más estrechos del general Pinochet.¹⁵ El efecto más profundo de este proceso —bien reflejado en varias encuestas de opinión— fue la mayoritaria percepción entre la opinión pública de que había una directa vinculación entre los crímenes que afectaban a los opositores y el propio gobierno.¹⁶ En pocas semanas la evidencia del terrorismo de estado y el conocimiento de la maquinaria de los organismos de seguridad que incluía sus múltiples recursos y la estructura operativa de los aparatos especiales pasó a ser un dato aceptado por amplios círculos, especialmente los sectores de ingresos medios y altos. Esto trajo un efecto erosionador, paulatino pero sostenido, que ha incidido como pocos en la reducción de la base social de apoyo a Pinochet. Como un efecto indirecto, pero también importante, la conducta del Ministro Cánovas sirvió para activar otros procesos pendientes por crímenes y violaciones de los derechos humanos y para

15 El general Mendoza explicó a los periodistas que había dejado su cargo "porque se me antojó no más...". A continuación agregó, acudiendo a una figura del lenguaje popular chileno "...se está desgranando el choclo...".

16 Conforme a una encuesta efectuada por la firma Diagnos en septiembre de 1985 un 82% de los encuestados creía que los responsables de los degollamientos pertenecían a los cuerpos de seguridad del gobierno y habían actuado por orden superior. Un porcentaje semejante consideraba sin embargo, que nunca se lograría identificar y castigar a los autores materiales.

multiplicar las denuncias sobre este tema.¹⁷ Así en la parte final del año 1985, se logró acumular en diferentes juicios una abrumadora evidencia respecto de la forma en que un Comando Especial Conjunto en que participaron miembros de diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad planificó y ejecutó la masiva desaparición de centenares de dirigentes políticos y sociales entre 1975 y 1977. Aunque debido a la capacidad de maniobra que todavía conserva el Gobierno y a su influencia sobre la mayoría de los miembros del Poder Judicial, resulta muy probable que estos procesos no lleguen a la fase de total esclarecimiento, es igualmente cierto que su impacto ha sido decisivo y ha cambiado la percepción e interpretación que la mayoría de los chilenos tienen respecto de la responsabilidad del general Pinochet y de sus colaboradores más inmediatos en estos hechos. Y esta apreciación, sin duda, tiene un gran valor político y está llamada a producir efectos de alcance permanente.

17 El caso que avanzó más espectacularmente fue el que investiga el Ministro en visita, Carlos Cerda de la Corte de Apelaciones Pedro Aguirre Cerda por el secuestro y desaparición en 1975 y 1976 de diez altos dirigentes del Partido Comunista. En este proceso se identificó como responsables en la detención a tres colaboradores de los servicios de seguridad del gobierno —Otto Trujillo, Miguel Reyno y Roberto Fuentes Morrison, este último perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile— quienes entregaron un completo detalle acerca de la forma en que operaba el Comando Especial Conjunto, organizado por el gobierno.

B. La suscripción del Acuerdo Nacional (AN)

Pocas semanas después de la impactante resolución del Ministro Cánovas, el 25 de agosto, un segundo hecho sustantivo contribuyó a cambiar el escenario político chileno: once partidos políticos, acogiendo una invitación del Cardenal Arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, suscribieron un "Acuerdo Nacional para la transición a una democracia plena"¹, un documento programático en que trazaban las bases para la transición hacia un sistema político democrático en Chile. Dicho texto proponía establecer un régimen político fundado en la soberanía popular y en la fiscalización y control de los actos de las diferentes autoridades. Reafirmaba el principio de la independencia y autonomía de los poderes del Estado y abogaba por el pleno restablecimiento de las libertades públicas. Reconocía el valor de los partidos políticos y definía condiciones para su libre funcionamiento, del mismo modo que restablecía el derecho a la existencia de sindicatos, colegios profesionales, federaciones estudiantiles y otras organizaciones sociales. En materia económica propiciaba una economía mixta en que debían coexistir la propiedad e iniciativa del Estado con la del sector privado. Planteaba igualmente, una atención prioritaria del futuro gobierno democrático para lograr la solución de los problemas más dramáticos, provocados por la crisis económica que se arrastra desde 1982: la necesidad de elaborar un programa nacional de empleo y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores más pobres. El Acuerdo

Nacional incluía, además, un capítulo especial sobre medidas inmediatas que, al recoger las aspiraciones de prácticamente la totalidad de los grupos opositores, establecía una pauta muy precisa para evaluar el inicio y avance de la transición. Entre estas medidas se contemplaban: el retorno de todos los exiliados, el término de la intervención militar en las universidades, la suspensión de todos los estados de excepción, el fin del receso político, el inmediato restablecimiento del funcionamiento de los partidos y la convocatoria de elecciones con plenas garantías para elegir nuevas autoridades en los poderes ejecutivo y legislativo.¹⁸

La suscripción del Acuerdo Nacional alteró también en forma decisiva el proceso político chileno.

18 Al interior del Acuerdo se superó bien el difícil desacuerdo inicial en torno al pleno reconocimiento legal de los partidos de izquierda. En un orden lógico la regulación establecida en este punto es la siguiente: 1) de acuerdo al punto cinco de las medidas inmediatas se establecería "el fin del receso político" y el pleno y normal funcionamiento de los partidos políticos existentes en septiembre de 1973, lo que incluye a partidos como el MAPU, Socialista, Izquierda Cristiana y Comunista; 2) en el futuro sistema político se consagraría como un derecho expreso "el pluralismo político y el derecho a organizar partidos políticos". Un tribunal constitucional, democráticamente generado y que actuaría conforme a derecho, podría disponer la cancelación del registro de un partido si éste contraviene con sus conductas o declaración de principios, postulados democráticos tales como el principio de alternancia en el poder, el de legalidad, el de vigencia de los derechos humanos, usar la violencia contra la autoridad democrática o el de la pluralidad de las organizaciones políticas.

Tales pautas que coinciden en plenitud con la propuesta del Grupo de Estudios Constitucionales que agrupa a juristas de todas las corrientes opositoras, obvio es decirlo, no constituyen ninguna restricción o amenaza para los partidos de izquierda y, de haber existido en 1973, habrían sido un útil instrumento para que el gobierno del Presidente Allende hubiera podido defender mejor el orden constitucional.

Este apareció como un consenso positivo de los diferentes sectores de la oposición que hasta ese momento se hallaban dispersos y, aunque no participaron en su elaboración y suscripción algunos de los más importantes partidos de izquierda, agrupados en el MDP, representó la más amplia alianza de opositores de derecha, centro e izquierda lograda hasta este momento en los doce años de dictadura. En términos prácticos levantó una propuesta programática para el orden político y social post-autoritario y puso fin a uno de los argumentos más usados por el general Pinochet: la afirmación de que la única alternativa a su permanencia en el poder eran el caos y la anarquía debido a la imposibilidad de los opositores para ponerse de acuerdo en torno a una propuesta común.

El hecho de que entre los firmantes de este documento programático aparecieran dos partidos de derecha —la Unión Nacional (UN) y el Partido Nacional (PN)— que hasta poco tiempo antes habían colaborado con el gobierno fue visto como una manifestación evidente de la reducción de la base de apoyo del general Pinochet. Además el activo rol que tuvo en su gestación la Iglesia Católica que ha ganado un amplio prestigio en estos años por sus acciones en defensa de los derechos humanos, revistió al Acuerdo Nacional de una respetabilidad todavía mayor. Por lo mismo, sus efectos concretos fueron amplios e importantes.

Un primer campo en que el AN repercutió fue el de las Fuerzas Armadas. Aunque éstas constituyen una verdadera "caja negra" en el proceso político

chileno¹⁹ hubo numerosas evidencias de que el documento opositor había sido conocido y discutido por oficiales de las diversas ramas. Aunque ésto está lejos de significar una adhesión de ellos a su contenido, los aspectos de deliberación política que el gesto entraña son importantes. Más explícitamente, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei expresó en forma pública su valorización del AN y lo propio hicieron en forma privada ante Obispos de la Iglesia Católica, varios generales del Ejército.

En segundo lugar, el AN tuvo repercusiones positivas en el propio seno de la Iglesia. En ésta se registraba, a mediados de 1985, un desacuerdo respecto a la actitud que se debía tener ante el general Pinochet. Un grupo de obispos aconsejaba la prescindencia política, mientras otros recomendaban asumir una postura pública y activa que subrayara las críticas de la Iglesia al régimen. En el seno de la Conferencia Episcopal, la máxima instancia colegiada de la Iglesia chilena, se había

19 Durante largos años existió en Chile un completo vacío en las ciencias sociales en cuanto a los estudios acerca de las Fuerzas Armadas. Los dos trabajos más serios habían sido elaborados por autores extranjeros: un francés (Alain Joxe), "Las Fuerzas Armadas en el Sistema Político Chileno" (Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970) y un norteamericano (Frederick Nunn), "The Military in Chilean Politics" (University of New México Press, 1975). Más recientemente, sin embargo, un grupo de investigadores sociales chilenos ha realizado interesantes aportes sobre el punto, especialmente Fernando Bustamante, Felipe Agüero y Augusto Varas de FLACSO (Chile: democracia, Fuerzas Armadas, 1980 y Hugo Frühling, Carlos Portales y Augusto Varas, "Estado y Fuerzas Armadas", Santiago, 1982), Genaro Arriagada ("La Política Militar de Pinochet" y "El Pensamiento Político de los Militares") y Antonio Cavalla ("Las Fuerzas Armadas y las Relaciones Estados Unidos - América Latina").

registrado un empate de 14 votos entre ambos sectores, lo que creaba una situación difícil. Con la suscripción del AN, esta disparidad se superó y en forma prácticamente unánime la misma Conferencia Episcopal proclamó su apoyo público a ésta iniciativa.

Finalmente, el AN tuvo un sensible impacto internacional, provocando una reactivación de la solidaridad con las fuerzas democráticas chilenas, y reavivando las críticas a Pinochet. La Comunidad Económica Europea expresó unánimemente su apoyo al AN en octubre y lo propio hizo el Departamento de Estado norteamericano. Esta etapa coincidió con la instalación en Chile de un nuevo embajador (Harry Barnes) de mucho mayor rango, quien asumió una postura más independiente y crítica frente al gobierno, desde el inicio de su mandato, lo que coincide con los anuncios hechos en Washington de considerar superada la etapa de "diplomacia silenciosa" frente al gobierno de Santiago.²⁰

Pero donde finalmente el AN tuvo un efecto más importante fue en relación a clarificar los caminos que debía recorrer la oposición en su búsqueda de la reconquista democrática. El planteamiento de este problema estuvo asociado a fuertes críticas hechas por sectores del MDP (especialmente el

20 Los cambios en la política norteamericana son evaluados en forma diferente entre los opositores chilenos. Algunos (especialmente el PC) subrayan su temor de que un recambio pueda fundar un nuevo modelo autoritario con ciertas perspectivas de estabilidad. Otros (los partidos del área socialista) estiman que la tarea de hoy es sacar a Pinochet y que cualquier otro escenario autoritario posterior sería inestable y ofrecería mejores condiciones a los sectores opositores para conseguir un sistema político abierto.

PC) que subrayaban el "peligro" de que el Acuerdo se convirtiera en un espacio de negociación con el régimen para llegar a una "democracia restringida", conforme a los nuevos planes de la administración Reagan, respaldados, según esta versión, por el Papa Juan Pablo II. Por lo mismo, se insistía en que sus efectos serían una división de la oposición y una disminución de la movilización social.

En el seno de los adherentes al AN se registró también desde el comienzo, una disparidad respecto a la mejor manera de asegurar su realización. Los sectores de derecha (UN, PN) insistieron en que la única forma de asegurar el cumplimiento de esta propuesta era mediante un diálogo con el propio gobierno. El resto de los participantes, con mayor o menor énfasis, imaginaba que sólo una intensificación de la movilización social que demostrara el carácter mayoritario en el país de los firmantes del texto podía conducir a su aplicación eficaz. Esto originó durante varios meses una indudable tensión puesto que ambas fórmulas no resultaban compatibles. La mayor complicación para los partidos de izquierda del AN (la IC, y los sectores socialistas de Briones y Mandujano), consistía en que no podía descalificar "a priori" la opción de la negociación mientras los hechos no les dieran la razón, limitándose a manifestar escepticismo respecto a la viabilidad de ésta. El asunto llegaba a un punto crítico si se tenía en cuenta que el gobierno podía haber mantenido indefinidamente una postura de ambigüedad con sólo no descalificar públicamente el AN y mientras ésto ocurriera no resultaba

posible exigir una vinculación entre el Acuerdo y los programas de movilización social. Sorpresivamente, sin embargo, a fines de diciembre el asunto fue despejado y resuelto por el propio general Pinochet. El día 24 de ese mes el titular del poder ejecutivo recibió en una audiencia, que le había sido solicitada varios meses antes, al Arzobispo de Santiago, Cardenal Fresno. El encuentro fue breve y tenso, pues cuando el Cardenal le planteó el punto, Pinochet manifestó bruscamente que a él "le cargan los sacerdotes metidos en política" y que personalmente ha dado órdenes que nadie de su gobierno reciba a los coordinadores del AN o a sus adherentes por lo que era mejor respecto de ese punto "dar vuelta la hoja".²¹

Esta actitud se vino a sumar a la negativa del ministro del Interior de recibir a los tres asesores directos del Cardenal que actuaban como Coordinadores del AN, lo que estableció la actividad de tajante rechazo del gobierno a cualquier posibilidad de negociación para una transición convenida hacia la democratización. De este modo ha desaparecido la posibilidad de que en el seno del AN los sectores de derecha sigan pidiendo un diá-

21 Durante las reuniones en que se discutió el texto del Acuerdo en el Círculo Español de Santiago el Cardenal Fresno, que no asistía a ellas, delegó su representación en tres asesores directos suyos: Sergio Molina, ex Ministro de Hacienda del Presidente Frei y ex Vice Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Fernando Léniz, ex Ministro de Economía del general Pinochet, luego alejado del gobierno y José Zabala, un empresario católico con una larga participación en agrupaciones empresariales cristianas. Luego de aprobado el Acuerdo Nacional estos asesores del Cardenal fueron invitados por los dirigentes políticos a asumir las tareas de convocatoria y coordinación futura del grupo.

logo con el régimen. Por el contrario la alternativa que se abre para el Acuerdo es bien nítida. O sus miembros toman un papel activo en la movilización social e impulsan acciones concretas para avanzar a la democracia o aceptan, con una conducta pasiva, la mantención de la dictadura.

C. El reforzamiento de la movilización social.

El efecto combinado de la crisis provocada en torno al proceso del ministro Cánovas y la firma del Acuerdo Nacional determinó, en el segundo semestre de 1985, una importante reactivación de las demandas y movilizaciones que diversas organizaciones sociales hicieron frente al gobierno. Especialmente notable fue el hecho de que participaran en estas actividades grupos que, por largo tiempo, habían observado un comportamiento pasivo o que, incluso, habían dado su apoyo al general Pinochet. Esto, a su vez, permitió un nuevo margen de maniobra de los grupos más activos que actúan desde hace más tiempo, los que pudieron intensificar con mayor éxito sus actividades. Esto se tradujo, por ejemplo, en el notable éxito alcanzado por las protestas del 4 y 5 de septiembre de 1985 que virtualmente paralizaron a Santiago y otras ciudades de Chile, así como en las activas manifestaciones de solidaridad que recibieron luego varias decenas de los dirigentes convocantes a dicho evento cuando fueron encarcelados por disposición del general Pinochet. Como se ha manifestado apropiadamente en un informe de coyuntura política, "durante el segun-

do semestre de 1985 se pudo apreciar un fuerte repunte y un ampliación de los conflictos sectoriales y regionales que ha debido enfrentar el gobierno: movilizaciones estudiantiles que logran remover a tres decanos y obtener la libertad de los dirigentes encarcelados por el gobierno; huelga de taxista: "taco" o bloqueo carretero de los camioneros, paralizaciones parciales de líneas de buses; movimientos de los deudores hipotecarios; organización de agricultores, camioneros y comerciantes del sur en contra de las ejecuciones judiciales de deudas morosas; huelga de estibadores y trabajadores portuarios; marcha de 5.000 mineros del cobre y sus familias desde Chuquicamata a Calama; movilizaciones o protestas nacionales del 9 de agosto, del 4 y 5 de septiembre, del 15 de octubre y del 5 y 6 de noviembre; protestas y movilizaciones de médicos; huelga de empleados del Poder Judicial; gran concentración del 21 de noviembre en el Parque O'Higgins, etc."²² Todas estas actividades cobran mayor significación si se las vincula con el tema más amplio de la crisis chilena. Hace casi treinta años, Jorge Ahumada habló de "la crisis integral de Chile".²³ Esta

22 "Informe Trimestral de Coyuntura", Octubre-diciembre de 1985, Grupo de Análisis Político, Mimeo, s/f, p. 3.

23 Ahumada, uno de los más notables economistas y planificadores que Chile ha producido fue el encargado de proporcionar el marco histórico y los fundamentos del programa de la "Revolución en Libertad" propuesto por la Democracia Cristiana en 1964. En 1957, luego de prestar servicios a varios gobiernos latinoamericanos volvió a Chile y publicó el libro "En Vez de la Miseria", un ensayo que ya se ha vuelto clásico en el pensamiento social chileno. Allí formuló el esquema de la crisis integral del país, que formalizó más ampliamente en 1965, pocos meses antes de su muerte, en un pequeño libro titulado justamente "La Crisis Integral de Chile" (Editorial Universitaria, Santiago).

expresión tiene hoy más significación que nunca por la diversidad de los campos en que la desarticulación del proyecto nacional se manifiesta. Hay una dimensión política de la crisis que se refleja en el hecho de que el régimen de Pinochet carece de proyecto político y su único empeño consiste en durar tanto tiempo cuanto pueda. El país sigue anclado en un modelo político excluyente e intolerante que no busca moverse hacia ningún lado. El temor a que se puedan acelerar las cosas lleva a que ni siquiera se ejecute la "transición" hacia una democracia restringida que la Constitución de Pinochet había definido, como lo prueba la postergación en el despacho de las llamadas "leyes políticas".

Hay además un ámbito económico de la crisis que se manifiesta, casi ininterrumpidamente, desde fines de 1981. En 1982, el producto nacional chileno decreció casi un quince por ciento, lo que sumado al impacto similar de la caída económica registrada en 1975 ha hecho retroceder el producto "per cápita" del país a los niveles de 1966. La cesantía llega a cerca de un treinta por ciento si se incluyen los contingentes que disfrazan las cifras del PEM y del POJH.²⁴ Más de un tercio de los

24 Se trata de dos programas organizados por el gobierno a través de las municipalidades. El Programa de Empleo Mínimo (PEM) absorbe a cesantes en obras públicas y de ornato y el Programa Ocupacional de Jefes de Hogar (POJH) contrata a personal más calificado (incluyendo profesionales) para los mismos fines. El salario de los primeros asciende a unos 25 dólares mensuales en tanto que la remuneración de los segundos representa en promedio unos 40 dólares mensuales. Como ambas cantidades están muy por debajo de las cifras básicas de subsistencia en Chile muchos economistas rehúsan aceptar el criterio de considerar "ocupados" para efectos estadísticos a quienes desempeñan estas labores.

chilenos viven en condiciones de extrema pobreza y recién se empieza a evaluar el impacto permanente de la desindustrialización que cerró fábricas y terminó con actividades productivas establecidas por todos los chilenos en un esfuerzo de décadas. Hay también una esfera social de la crisis que se expresa en la dramática desintegración nacional que vive Chile. Pocas cosas sorprenden tanto a los observadores extranjeros como la total falta de sensibilidad del gobierno y sus colaboradores con los sectores más pobres de la nación a los que mira y trata como "enemigos". Un cuarenta y cuatro por ciento de los jóvenes de 16 a 23 años en el Gran Santiago no trabajan ni estudian. En Chile existe una suerte de "apartheid" que aísla al mundo de la opulencia y el confort europeo de los barrios acomodados con la dramática realidad de las poblaciones marginales que se asemejan a los barrios más miserables de Haití, Gabón o Bangladesh. Las políticas de salud, vivienda y educación se diseñan como si su objetivo fuera retirar beneficios a los sectores más desamparados y condenarlos a una existencia sin destino. A todo esto se ha sumado, por último, en 1985, la percepción de una crisis moral. "Terremoto moral" llamó la Iglesia Católica²⁵ al brutal degollamiento de los tres dirigentes comunistas, indicando la gravedad que tiene el hecho de que los chilenos sientan que los cuerpos e instituciones que debieran garantizar la seguridad de las personas son, en cambio, un centro de planeamiento y de

25 Llamado a la Reconciliación Nacional hecho por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, junio de 1985.

ejecución de actividades criminales, financiadas con recursos públicos y al amparo de la impunidad que otorga el poder estatal. Cuando entre amplios sectores del país se tiene la creciente evidencia de que el gobierno es directamente responsable de las situaciones más brutales y contrarias a nuestra tradición histórica, las bases de la convivencia nacional están aniquiladas, porque la autoridad carece de credibilidad y legitimidad. Esta sensación de que el país se destruye irrecuperablemente plantea en forma ineludible un problema ético: coloca sobre cada chileno el dilema de asumir que sólo con respuestas activas se puede detener la desintegración nacional y evitar el riesgo de la gangrena que se extiende sobre el cuerpo social. Por eso, en un contexto como el descrito, resulta claro que participar decididamente en la lucha social es la única forma concreta de asumir un compromiso con el destino de Chile.

TAREAS PARA EL TIEMPO INMEDIATO

Uno de los pocos puntos en que han coincidido todos los dirigentes de la oposición chilena ha sido en asignar a 1986 una importancia decisiva.²⁶ Este consenso se

26 Ver, en Fortín Mapocho, 23 de diciembre de 1985, una amplia encuesta hecha a dirigentes de todos los partidos de oposición que coinciden en calificar a 1986 como "el año clave" para poner término a la dictadura.

explica por el impacto acumulado de los factores que ya analizáramos: las evidencias de la responsabilidad del gobierno en actividades de terrorismo de Estado crean condiciones para plantear abiertamente la decisiva cuestión de la legitimidad del régimen, mientras que la negativa explícita de éste para contribuir a una solución negociada de la crisis no deja a los opositores democráticos otro camino que el de la demostración social de su propia condición mayoritaria.

A ello se une la restricción imperiosa de los propios "tiempos políticos". El mandato actual del general Pinochet concluirá en marzo de 1989 y las elecciones en que debía elegirse presidente tendrían lugar en diciembre de 1988. Esto hace que el año 1986 sea prácticamente uno de los últimos períodos "útiles" para buscar una modificación de dicho cronograma. A esta situación se agrega un hecho de gran importancia política que puede actuar como hito divisorio de toda esta etapa: la venida a Chile del Papa Juan Pablo II, programada y anunciada con inusual anticipación para abril de 1987.²⁷ Así las cosas, los dirigentes de las organizaciones democráticas piensan razonablemente que, desde ahora hasta ese momento, se vivirán condiciones muy favorables para lograr un desenlace democrático de la crisis. Y ésto es lo que ha hecho que al plan de acción para 1986 se le asigne una enorme importancia, algo que coincide con las percepciones y la sensibilidad de la mayoría de la gente. Se estima,

27 El anuncio de la visita papal ha originado variadas reacciones. El ex diputado Fernando Buzeta, de la Izquierda Cristiana, ha convocado junto, a un grupo de colegas suyos, a las comunidades cristianas de base a recoger firmas en todo el país para pedirle al Papa que no visite Chile hasta que en el país exista un gobierno democrático, desencadenando una campaña que recibió una importante adhesión.

en síntesis, que éste es un período decisivo para desplegar —con efectivas posibilidades de éxito— toda la fuerza acumulada por los sectores democráticos.

Este crucial enfrentamiento tendrá lugar dentro de las condiciones de importante poderío e iniciativa política de ambos actores en pugna que ya hemos subrayado. El general Pinochet ha enfrentado todo el período de asedio de sus opositores, que ya dura tres años, sin perder nunca la capacidad para diseñar operaciones de respuesta y contragolpear a las muchas ofensivas y cercos colocados por los opositores. Ha mostrado también, en todo momento, que retiene la posibilidad de emplear la fuerza militar y policial, pues sigue contando con el respaldo de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de seguridad que nunca han dejado de ejecutar cabalmente sus instrucciones.

La oposición, por su parte, ha ido acrecentando sus fuerzas en todo este tiempo. Las diferentes organizaciones sociales, que se encontraban en estado virtualmente germinal en 1983, se han reconstruido y fortalecido. Igualmente, han logrado una significativa capacidad de concertación. La correlación de fuerzas civiles ha cambiado igualmente, aumentando el caudal de los que se oponen al régimen autoritario. En un recuento muy sumario, se podría decir que en un país que hasta 1973 estuvo dividido casi simétricamente en tres tercios, hoy la oposición suma a la totalidad de la izquierda, a la totalidad del centro y, al menos a una mitad de las fuerzas de derecha. Esto permite sostener, como lo confirman las encuestas de opinión,* que

* Encontrándose en prensa este libro, una encuesta realizada por FLACSO confirmó esta situación. Al pedirse a una muestra de encuestados del Gran Santiago que definiera su ubicación política un treinta y tres por ciento se manifiesta de centro; otro treinta y tres por ciento

quienes desean, con diferentes fórmulas, que el gobierno del general Pinochet concluya totalizan cerca del 85°/o de la opinión nacional, en tanto que poco más de un 15°/o expresa su adhesión a Pinochet sin reservas. Pero esta oposición mayoritaria sigue en este momento dividida, sin una estrategia y un plan de acción común, lo que restringe enormemente la capacidad de dar expresión al poderío acumulado.

En el escenario político del período próximo existirán algunas constantes que es indispensable tener en cuenta: probablemente se agudizará la crisis política y se mantendrá la tendencia a la polarización que ha caracterizado a los años anteriores; se mantendrá también el funcionamiento "anémico" de la economía chilena, lo que hace que sea poco razonable esperar modificaciones espectaculares derivadas de la situación económica. Esto implica un cuadro en que el producto se aproximará en términos per cápita a un crecimiento cero, el precio del cobre oscilará dentro de los rangos de bajo precio de los años anteriores y los indicadores sociales, especialmente el de ocupación, no tenderán a repuntar.²⁸ Del mismo modo, seguirá siendo más fácil la concertación social que el acuerdo de los acto-

se definió como de "derecha o centroderecha", mientras el treinta y cuatro por ciento restante se autocalificó como de "izquierda o centroizquierda". N. del E.

28 El precio del cobre ha experimentado en los últimos tres años una sensible declinación como consecuencia de la substitución de sus usos el desarrollo de procesos de miniturización de los diseños industriales y de la explotación de nuevas minas en los años precedentes. Actualmente se cotiza en alrededor de 65 centavos de dólar la libra, lo que representa un valor, en términos reales, del 40°/o del que tenía hace 20 años. Aunque este factor de reducción de ingreso de divisas pudiera haberse paliado por las reducciones importantes en los precios del petróleo que Chile importa, hay que considerar que la deuda externa ha sobrepasado los 21 mil millones de dólares e impone restricciones dramáticas a la economía chilena.

res políticos. Estos últimos, en su expresión institucional, a pesar de sus dificultades internas tenderán a mantenerse. Por ello no cabe esperar una crisis que ponga término a la Alianza Democrática o al Movimiento Democrático Popular, también hay que seguir contando con un grado significativo de dispersión de los partidos del área socialista, porque a pesar de la terminación del Bloque Socialista²⁹ los dos partidos mayores de origen histórico (Almeyda y Briones) se seguirán excluyendo mutuamente y las fuerzas menores del mismo tronco no tienen capacidad para modificar esa conducta.

Del mismo modo, persistirá en lo substancial la dinámica de represión del régimen que originará, de forma también inevitable, expresiones de violencia de algunas organizaciones de izquierda. La violencia será así un dato permanente en el escenario político chileno, sea por la acción implícita del gobierno o por amenazas potenciales de sectores de la izquierda.

29 El Bloque Socialista (BS) había sido organizado en septiembre de 1983 e incluía al Comité Político de Unidad (CPU) del Partido Socialista, la Izquierda Cristiana (IC), el MAPU, el MAPU Obrero Campesino (MOC) y el Grupo de Convergencia Socialista (CS) intentaba a ser un factor aglutinador del socialismo chileno y constituir un tercer referente nacional junto a la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. En la práctica esta tentativa no fructificó por diversos factores: 1) en mayo de 1984 el CPU se dividió en dos grupos: el PS Dirección Carlos Briones y el PS Dirección Manuel Mandujano; 2) la presencia del PS Briones en la Alianza Democrática restó autonomía al BS y provocó un insoluble desacuerdo en su interior y 3) el BS no logró constituirse en un actor dinámico en la movilización social y popular. Por ello, luego de la marginación del PS Mandujano, en octubre de 1984 se retiró de él la IC. En julio de 1985 se disolvió el MOC, ingresando la mayoría de sus miembros al PS Briones y lo propio ocurrió con el círculo de intelectuales y profesionales de la Convergencia Socialista. Todo esto determinó el cese de su funcionamiento desde febrero de 1986.

Pensamos también que una planeación política realista obliga a considerar otros factores relativamente variables, sobre lo que es posible influir. Entre éstos se incluyen la dinámica alternada de aproximación y alejamiento entre la AD y el MDP, así como las variaciones en la profundidad y extensión de los acuerdos del conjunto de la izquierda y del área socialista para prefigurar una conducta común de la oposición. Del mismo modo habrá que prestar atención a las hipótesis posibles de respuesta del régimen y a los conflictos que se puedan plantear al interior de las Fuerzas Armadas como consecuencia de la necesaria línea dura que deberá tener el gobierno ante las demandas de las organizaciones sociales. En este sentido, los planteamientos más claros que los sectores de oposición puedan hacer sobre temas como la valorización de los derechos humanos; el rol institucional futuro de las Fuerzas Armadas; la explicación del impacto que sobre la Seguridad Nacional provoca el aislamiento del país (que ocasiona la dictadura) o la mayor precisión de las condiciones de gobernabilidad democrática futura serán elementos cuya presentación no sería indiferente para las Fuerzas Armadas y que podrían incidir en su comportamiento.

La concertación política de la oposición.

A estas alturas parece evidente que el quehacer de la oposición debería ser reflexionado y estructurado en diferentes niveles. Una primera gran área es definir los grados de viabilidad de la concertación política. Para ello puede ayudar significativamente un rápido avance

destinado a formalizar y hacer más operativa la concertación social. Para ésto, a su vez, se cuenta con un triángulo de actores disponibles que ya han probado una alta capacidad operativa: el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación Nacional de Federaciones Estudiantiles de Chile (CONFECH) y la Confederación de Colegios Profesionales. A ellos tiende a agregarse la Confederación Unica de Pobladores, actualmente en avanzada gestación y las activas y valerosas organizaciones de mujeres. Así, mientras se consolida e irrumpe en el escenario, a corto plazo, una entidad Multigremial,³⁰ se hará posible definir en mejor forma los grados y la modalidad de la articulación política. El entendimiento político de la oposición debe lograrse a partir de una estrategia común y de un plan de acción para la coyuntura próxima. Esquivar este punto resultó fatal en los años anteriores pues posibilitó autonomías operativas que acabaron por empantanar todos los entendimientos. A este respecto, no puede soslayarse una mayor precisión en torno a la efectiva adhesión al llamado camino de la derrota política de la dictadura y al énfasis en la lucha social y de masas.

Hacer una clara opción común por la lucha de masas puede favorecer decisivamente la unidad democrática. *

30 Este objetivo fue ampliamente logrado, a fines de abril de 1986 al constituirse la "Asamblea de la Civilidad", entidad que agrupa a trabajadores, estudiantes, profesionales, mujeres, pobladores, transportistas y comerciantes. Tiene un carácter permanente y la preside el Dr. Juan Luis González, presidente del Colegio Médico y de la Federación de Colegios Profesionales. El aspecto más interesante de ella es que en su seno se encuentran todos los elementos de la alianza de clases necesaria para poner término a la dictadura.

* A este respecto hay que tener en cuenta la declaración hecha el 30 de mayo por el MDP, asumiendo explícitamente el "camino de la derrota

Este aparece como un camino capaz de asegurar resultados concretos como lo prueba el hecho de que todas las conquistas parciales conseguidas hasta hoy han sido el resultado de la movilización. Además hay que tener en cuenta que una mayoría civil desplegada nacionalmente, al crecer y multiplicar su actividad tiende a anular la capacidad de empleo de la fuerza represiva del régimen. En cambio, el desarrollo de cualquier estrategia que parezca dirigirse a la derrota militar tiene el efecto opuesto: unifica a las Fuerzas Armadas en torno de Pinochet en la medida que corporiza un "enemigo armado" y que amenaza la existencia misma de las instituciones castrenses. Ese terreno de enfrentamiento, por lo demás, es el que Pinochet mejor conoce, en el que es más fuerte, y en el que no teme ser derrotado. Por dichas razones resulta indispensable no sólo descartar, de un modo formal, una estrategia de derrota militar del régimen (como todos lo han hecho), sino también evitar aquellas acciones que a este respecto constituyen señales equívocas (como muchas de las que se atribuyen al FPMR) porque ellas también son causa de división en la oposición y ésto ayuda, objetivamente, a la dictadura.

La opción por un camino de derrota política implica entonces la discusión y el acuerdo en torno a una propuesta estratégica común de término de la dictadura, la definición de los plazos y condiciones del período de transición y, muy especialmente, la concertación para colocar en común *todos* los recursos de las diferentes fuerzas opositoras (incluidas *todas* las capaci-

política" y efectuando una propuesta de transición política que contempla un gobierno provisional de 6 meses y luego la elección de autoridades gubernamentales y legislativas en base al voto ciudadano. N. del E.

dades de empleo de la fuerza) de tal forma que se pueda sustentar un único listado de acciones que se acuerden. Sólo así, se podrá llegar luego a discutir y a acordar, en concreto, un plan de movilización que tenga posibilidades de aplicación exitosa. En otras palabras, no habrá fin de la dictadura si no se formaliza en común una propuesta política para la transición.

Ahora bien, es necesario tener en claro que el hecho de que el conjunto de las fuerzas políticas opositoras concuerden una estrategia común con estos alcances no constituye una panacea ni despeja todos los desacuerdos que se pueden presentar al interior de la oposición. Pero sí implica establecer el único terreno en que se puede mantener la confianza mutua y en que las disparidades pueden ser resueltas de un modo constructivo.

Un problema práctico nada secundario es determinar a través de qué instancias orgánicas es posible lograr esta concertación. Pensamos que a la luz de las experiencias recientes es necesario buscar el acuerdo en función de los referentes más amplios y representativos. En concreto, ésto puede intentarse a través de cualquier instancia capaz de agrupar prácticamente a la totalidad de las organizaciones que han expresado su disposición en favor de un plan de movilización social. Ahí se puede lograr una síntesis de las propuestas específicas elaboradas por el grupo de los 24, el Acuerdo Nacional, o el plan de la Intransigencia Democrática que constituyen un buen punto de partida para un diálogo eficaz y constructivo.

Plan de acción: objetivos y fases.

Si se logra resolver adecuadamente el problema de

contar con un "Estado Mayor Conjunto" de la oposición la elaboración de un plan concreto de movilización puede ser abordado sin que existan desacuerdos substanciales entre los diferentes partidos opositores.

Una secuencia óptima a la luz de otras experiencias de transición podría considerar las tres fases siguientes:

Fase 1: *La acumulación de las demandas sectoriales y corporativas.*

En un primer momento se trata de identificar y hacer brotar las múltiples contradicciones existentes entre el pueblo chileno y la dictadura de Pinochet. Para ello, debiera promoverse la formulación de los más variados pliegos y demandas reivindicativas de los diferentes sectores sociales del país. Esto originaría una aglomeración desordenada y compleja de peticiones de todo tipo: nacionales y regionales, de sectores activos y pasivos, de capas medias y populares, etc. El objetivo pedagógico de este ejercicio sería hacer comprender a la mayor cantidad de chilenos posible que los problemas actuales, que en un contexto político distinto podrían ser resueltos, tienen su origen en la existencia y mantención del régimen autoritario.

Una ventaja adicional de esta operación es que ella puede ser ejecutada en base a la concertación social y no necesita todavía de la existencia de una coordinación política. Con la suma de estas demandas debidamente ordenadas y seleccionadas se podría estructurar "El Pliego de Chile".³¹

31 El "Pliego de Chile" es un tipo de documento que ha sido utilizado en varios momentos de la historia social chilena para ordenar y dar un alcance global y político a las demandas que hacen las organizaciones al gobierno. En el caso actual el texto, con estas características aprobado, en la Asamblea de la Civilidad ha adoptado la denominación de la "Demanda de Chile".

Fase 2: *La formalización de la ilegitimidad del régimen de Pinochet.*

Desde 1983, existe en Chile un dramático conflicto de legitimidades políticas. Esto ocurre porque entre el orden político consagrado en la Constitución de 1980, que el general Pinochet considera intangible, y las propuestas democráticas efectuadas por la oposición no hay ajuste ni concordancias posibles. En una palabra, el concepto mismo de "democracia" tiene significados antagónicos para el gobierno y la oposición. O, si se prefiere, el general Pinochet denomina como "democrático" a un régimen que no tiene ninguno de los elementos esenciales que caracterizan a las democracias que existen en diferentes lugares del mundo.

Este conflicto, sin embargo, no ha sido cabalmente entendido, hasta ahora, por un sector importante de la opinión pública. Por ello parece necesario, antes de desencadenar acciones decisivas para forzar un cambio de régimen, resolver este problema. Para ello resulta útil la propuesta que varios sectores han hecho de exigir la convocatoria a un plebiscito, en que se pueda dirimir justamente, por un pronunciamiento mayoritario de los chilenos, este desacuerdo. Proponer este mecanismo tiene la ventaja de que se ofrece una nueva y última oportunidad a la que nadie podría cuestionar su carácter de solución pacífica para la crisis política que enfrenta Chile. Obviamente, tal llamado debería contener tanto los resguardos que los opositores exigen como el plazo que se otorga al gobierno para acoger la propuesta. Si éste transcurriera sin respuesta o si las condiciones de una eventual convocatoria oficial no fueran satisfactorias debería producirse una "declaración formal de ilegitimidad" del régimen por medio de un manifiesto solemne que fuera firmado por un

amplio listado de personalidades nacionales del campo político, social, cultural y religioso. Allí debiera convocarse a los chilenos a iniciar masivamente el desarrollo de acciones de desobediencia civil, como único medio eficaz para restablecer las condiciones de la convivencia nacional.

Fase 3: *El Paro Nacional y el término de la dictadura.*

Estamos convencidos que en caso de resolverse públicamente la cuestión de la legitimidad del régimen autoritario, las organizaciones sociales y políticas democráticas tendrían el camino abierto para resolver la organización de una jornada prolongada de paralización de las actividades económicas en los mismos términos que se registraron en la reciente crisis de la dictadura en Filipinas que tenga como objetivo la exigencia de un inmediato retorno a la democracia, en la que puedan participar los más amplios sectores productivos del país junto a aquellos grupos que padecen los efectos de la política económica en vigor (tales como cesantes, trabajadores ocasionales que viven en las poblaciones populares y estudiantes).

Naturalmente la realización de un Paro Nacional con estas características debiera ser la culminación de los diversos esfuerzos anteriores, lo que supone de parte de las organizaciones sociales su cuidadosa preparación. En un contexto semejante puede constituirse en un momento de máxima desobediencia civil en torno al objetivo de devolver un sistema de convivencia civilizada a Chile.

Una situación similar se produjo al término de la dictadura de Ibáñez, en julio de 1931 y también sirvió para manifestar la firme decisión de los chilenos de suspender la creación de bienes y servicios en el país, hasta que cambió el gobierno.

La fuerza del Paro podría crear, como entonces, un efecto en cadena al interior de las Fuerzas Armadas, al demostrar que el país no acepta ser gobernado más tiempo por la fuerza y que sólo podrá ser normalizado al establecerse otra autoridad política, decisión que las Fuerzas Armadas están en condiciones de producir, reduciendo el costo social de una confrontación prolongada.

La urgencia de pensar en el Chile democrático del futuro

No podemos concluir este análisis sin insistir en la necesidad de dar un contenido creativo y de futuro al quehacer de los sectores democráticos, perfilando, desde ahora, con claridad las metas y objetivos que perseguirá un gobierno democrático en Chile. La experiencia de la fase declinante de todos los sistemas políticos autoritarios enseña que la gestación de un proyecto nacional alternativo al de una dictadura debe ser hecho en forma simultánea a la lucha por la democratización. Más tarde, cuando el ordenamiento dictatorial ha sido liquidado, las múltiples urgencias del proceso político post-autoritario impiden la reflexión lúcida sobre el destino del país.

En estos largos años, Chile ha vivido una experiencia atípica en la medida en que el orden autoritario ha coexistido con un creador esfuerzo de investigación realizado por numerosas organizaciones culturales disidentes que han mantenido viva al interior de la sociedad, la tradición de pensamiento crítico y excelencia académica que las universidades chilenas tuvieron en el período democrático. Existen, por lo mismo, numerosos estudios, proyectos de investigación, monogra-

fías y trabajos que suministran una base sólida y científica respecto de la situación actual de Chile, de las perspectivas de la economía en sus diversos sectores, el sistema político, las Fuerzas Armadas y la organización social. Ellos constituyen un punto de partida serio para afianzar, en un trabajo de elaboración política, los objetivos que en forma simple y angustiosa demandan los chilenos, y que se hallan bien resumidos en la consigna "Pan, trabajo, justicia y libertad".

La proyección de estos objetivos (planteados en diversos documentos como el Manifiesto de la Alianza Democrática, el Manifiesto del Movimiento Democrático Popular, el Manifiesto por la Libertad y la Democracia, declaración fundacional de la Intransigencia Democrática o el Acuerdo Nacional) en un programa de gobierno provisional, pueden dar una base técnicamente solvente a un Programa nacional de empleo, a un programa de satisfacción de las necesidades básicas de los sectores más pobres, a un Plan de reindustrialización y de reactivación de actividades productivas, así como a nuevos Programas Nacionales de salud, educación y vivienda. Esto, unido a la definición de criterios comunes acerca de la composición y características del gobierno provisional, del proceso de reorganización de las Fuerzas Armadas y de saneamiento y modernización de la Administración Pública y la Justicia, permitirá establecer los fundamentos exactos del proceso de transición y quitarle ese carácter borroso y atemorizador que, para algunos, presenta la falta de definición sobre estos puntos.

Para quienes además de creer en la democracia creemos en la necesidad del progreso social, como ocurre con las fuerzas de izquierda, se plantea un desafío complementario: tenemos la necesidad de definir un

proyecto nacional capaz de resolver también la segunda contradicción fundamental que enfrenta Chile, que no será resuelta con el término del régimen dictatorial. Nos referimos a la contradicción entre el capitalismo y el socialismo que, pensamos, se hará presente a poco andar, cuando se intente dar una respuesta seria a los profundos males que el país arrastra.³² Los años transcurridos desde 1973 han tenido un valor, más que simbólico, para mostrar las insuficiencias de una solución capitalista para la crisis de Chile. Durante una etapa tan prolongada que excede ya al mandato de dos gobiernos democráticos, de acuerdo a la anterior Constitución de 1925, los defensores más tenaces de este sistema han impuesto las condiciones que ellos mismos siempre definieron como ideales para la aplicación de sus planes: la ausencia de toda presión sindical y la total falta de interferencia de los "intereses políticos" en la marcha del gobierno. Han contado, además, con el apoyo irrestricto de la comunidad financiera internacional y durante un buen tiempo con préstamos y flujos financieros que acumularon la inmensa deuda externa de más de 20 mil millones de dólares que hoy tiene el país. El resultado final, sin embargo, ha sido el mayor desastre social y productivo que Chile ha experimentado en toda su historia. Si en estas condiciones "óptimas" para sus defensores el capitalismo fracasó de este modo; ¿cabe esperar que sea capaz de una propuesta exitosa en la etapa democrática futura?

Para quienes creemos en el socialismo, se plantea,

32 En estos años ha cobrado un valor profético la lúcida reflexión sobre las insuficiencias y limitaciones de la clase dirigente chilena para implantar un modelo capitalista eficiente en el país, hechas hace casi treinta años por el economista Aníbal Pinto en los editoriales de la Revista "Panorama Económico" y en sus libros "Chile un caso desarrollo frustrado" y "Chile: una economía difícil".

entonces, como un imperativo patriótico, el recoger en una propuesta de conjunto las aspiraciones de profundización democrática, las metas de consolidación de la soberanía nacional y los objetivos de un cambio social más justo que surgirán como una legítima demanda de la mayoría de los chilenos cuando el país recupere el pleno ejercicio de la soberanía popular. Tenemos que restablecer una democracia con horizontes de progreso social y participación popular ininterrumpidos.

Sólo así la transición democrática culminará en un sistema político estable, capaz de fundar una convivencia social justa que devuelva a la vida de los chilenos, especialmente de los pobres, el horizonte de dignidad y esperanza que la dictadura les ha arrebatado durante todos estos años.

ÍNDICE

Introducción	7
Las nuevas dictaduras militares en América Latina	13
Notas para un estudio comparado entre el Estado Fascista "clásico" y el Estado de Seguridad Nacional.....	37
El autoritarismo en Centroamérica: una mirada desde la historia y la teoría política latinoamericana	77
Chile: autoritarismo y lucha democrática.....	109

IGLESIA, TEOLOGIA, POLITICA

Varios autores

CONSTITUCION DE 1980

Varios autores

MIEDO EN CHILE

Patricia Politzer

BALMACEDA

Luis Enrique Délano

RECUERDOS

Anita Fresno de Leighton

LA OTRA MITAD DE CHILE

María Angélica Meza

IGLESIA Y DICTADURA

José Antonio Viera-Gallo

Enrique Correa

Los trabajos que integran este libro examinan las dictaduras militares surgidas en las décadas de los 60 y de los 70 en América Latina; comparan los caracteres del Estado Fascista "clásico" que conoció Europa, con el Estado de Seguridad Nacional latinoamericano; estudian las causas del autoritarismo en Centroamérica, y finalmente el análisis recae en el régimen chileno y en las estrategias de la oposición.

No hay acción política eficaz sin una seria comprensión teórica de la realidad que se enfrenta.

Este libro aparece en un momento particularmente difícil para Chile. Su publicación permite acercar la reflexión y la acción políticas, convergencia indispensable para el avance del movimiento democratizador.
